**Dictámenes y Acuerdos correspondientes a la Décima Octava Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**24 de junio del año 2020.**

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:

**A.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción primera del artículo 73, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**B.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXVII y se recorre la subsiguiente del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

**C.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona la fracción I, VI y VII del artículo 42, así como la fracción I del artículo 43, ambos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, asimismo se agrega una nueva fracción II al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza.

**D.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 453 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**E.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**F.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**G.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por la Presidenta Municipal de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un bien inmueble identificado como fracción del lote número 11 de la manzana 15, con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Valle del Campestre” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Club de Leones de San Buenaventura A.C.”, con objeto de llevar a cabo la construcción de un Plantel Educativo de Nivel Preescolar.

**H.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción de área vial de la Calzada Xochimilco con una superficie de 77.07 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. Daniel Garza González, con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**I.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para celebrar un contrato de comodato, con vigencia hasta el año 2030, de un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.”, con objeto de llevar a cabo la instalación de un módulo de Servicios Amigables contemplado en el programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes.

**J.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento “Fundadores V Sector” de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para ser destinado a la Secretaría de Educación, con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel primaria.

**K.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 161.70 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor del C. Antolín Pozos Zaragoza, con objeto de que se destine a uso de casa habitación y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, el cual fue desincorporado con Decreto número 528 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 27 de septiembre de 2016.

**L.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 22,327.706 m2., de la Manzana 27 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano” en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a favor del Organismo Público Descentralizado, Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS.

**M.-** Dictamen presentado por la Comisión de Igualdad y no Discriminación, con relación a una Iniciativa de Decreto por la cual se reforma diverso contenido de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza; cuya propuesta confirmar la adopción de las medidas necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres a través de políticas integrales de protección de los derechos humanos de las mujeres; suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**N.-** Dictamen presentado por la Comisión de Igualdad y no Discriminación, con relación a una Iniciativa de Decreto por la cual se modifica el contenido de la fracción X del artículo 8 y; así como el contenido de la fracción IV del artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza; cuya propuesta esampliar los conceptos de violencia mediática, laboral y escolar; planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel.

**Ñ.-** Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Segundo Párrafo del Artículo 107, el Primer Párrafo del Artículo 111 y se adicionan los Artículos 113 BIS 4 y 133 BIS 5 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**O.-** Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el contenido de los párrafos primero y tercero del artículo 208 del Código Municipal para Estado de Coahuila de Zaragoza.

**P.-** Dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, “Con objeto de que se exhorte atentamente a los 38 Ayuntamientos de la Entidad a que, a través de sus respectivos organismos, operadores, implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, los cuales resultarían inadmisibles, ante el inicio de la temporada de calor, pero, sobre todo, en vista de la actual pandemia por coronavirus” planteado por el Diputado Benito Ramírez Rosas.

**Q.-** Dictamende la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 225, segundo párrafo; y el artículo 229, fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional.

**R.-** Dictamende la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se propone reformar los artículos 17, tercer párrafo, 22 primero y segundo párrafos, 60 primer párrafo, 94 Apartado B en sus fracciones I, VIII y XVIII, 111 segundo párrafo, 112 fracciones IV y VII y 118, y derogar los artículos 4, segundo párrafo, y 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, anexándose voto particular presentado por el Diputado Juan Antonio García Villa.

**S.-** Acuerdopresentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, mediante el cual se pronuncia sobre Proposición con Punto de Acuerdo planteadas por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que solicita al Ejecutivo del Estado desarrollar programas que fortalezcan la creación de escuelas municipales para fortalecer el apoyo a talentos deportivos y la cultura del deporte”.

**T.-** Acuerdopresentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteadas por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, relativo a ampliar el personal de psicólogos que atienden los diversos centros escolares.

**U.-** Acuerdopresentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que en su página oficial publique material digital destinada a alumnos de nivel básico, como libros, material didáctico, que contribuyan a fortalecer el aprendizaje desde casa”.

**INFORME DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTACIÓN**

**RECIBIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO**

**24 DE JUNIO DE 2020**

**1.-** OFICIO REMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA, MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA RELATIVA AL CUADERNO DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 01/2020, DERIVADO DEL EXPEDIENTE ELECTORAL 41/2019, CON RELACIÓN AL RECURSO DE QUEJA PRESENTADO POR JAVIER GARZA ANICO Y OTROS.

**SE TURNÓ A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES**

**2.-** ESCRITO DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA LOSINFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

**3.-** INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO LA DESINCORPORACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 5,685.400 M2, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, PARA QUE LO ENAJENE A TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DE ESTADO DE COAHUILA DE ZRAGOZA, A TRAÉS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**4.-** ESCRITO SUSCRITO POR LA SÍNDICA DE MAYORÍA Y LOS REGIDORES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DEL AYUNTAMIENTO DE PARRAS, MEDIANTE EL CUAL RATIFICAN LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE DICHO AYUNTAMIENTO, PRESENTADA EN ESTE CONGRESO

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

**5.-** OFICIO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL ACUERDO APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO DE DICHO MUNICIPIO, PARA CONTINUAR CON LA ENAJENACIÓN A TITULO GRATUITO DE UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 32,532.76 M2, UBICADO EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO FRACCIÓN DE MITAD ORIENTE DE DICHA CIUDAD, PARA ENAJENARLO A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

**TÚRNESE A LA COMISIÓN DE FINANZAS**

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción primera del artículo 73, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 del mes marzo del año 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción primera del artículo 73, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quela iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción primera del artículo 73, de la Constitución Política del Estado de Coahuila, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Los Artículos 39 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen expresamente que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que todo poder público dimana de él y se instituye para su beneficio, teniendo en todo tiempo el pueblo el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno.*

*Así mismo, en tales dispositivos se reconoce que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación, en donde el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.*

*Ahora bien, el artículo 32 de la Constitución Política de Coahuila de Zaragoza, prevé expresamente que el ejercicio del Poder Legislativo local, recae en una asamblea que se denominara Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de dicho ordenamiento, este Poder Público cuenta entre uno de sus órganos con la Diputación Permanente, la cual estará en funciones cuando el Congreso en Pleno no esté en actividad, Órgano Directivo y de decisión parlamentaria que tiene entre sus funciones las que expresamente se encuentran establecidas en el artículo 73 de nuestra Ley Fundamental, una de las cuales la de la Fracción I, explícitamente dispone que está facultada para llevar la correspondencia con los Poderes de la Federación y con la de los Estados, de ahí, que puede entenderse implícitamente que también está facultada para llevar la correspondencia con los otros Poderes del Estado de Coahuila, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como con los demás entes autónomos previstos en dicho ordenamiento.*

*Lo anterior es así, dado que por facultades explícitas deben de entenderse a aquellas otorgadas por la Constitución a un Órgano del Estado, de forma concreta y determinante respecto de alguna materia o asunto, y las facultades implícitas, son aquellas que se pueden desprender y utilizar como un medio necesario para ejercer alguna de las facultades explícitas, en donde para hacer uso de una facultad implícita se requieren reunir los siguientes requisitos; Primero, la existencia de una facultad explícita, que por sí sola no pudiera ejercerse, y Segundo, la relación de medio necesario entre la facultad implícita y el ejercicio de la facultad explícita, de suerte que sin la primera no podría alcanzarse el uso de la segunda.*

*Lo antes dicho, presupone que la facultad explícita quedaría inútil, estéril, o en calidad de letra muerta, si su ejercicio no se actualizara por medio de la facultad implícita; de lo que surge la relación de necesidad entre una y la otra, de lo anterior, claramente se debe de entender que con base a esas atribuciones, la Diputación Permanente de este Poder Legislativo, puede legítimamente recibir iniciativas de Ley o de Decreto y turnarlas para su estudio y dictamen a las comisiones que correspondan, facultad implícita de la cual ya se había hecho uso por tal órgano, pero que para no dejar tal tema a interpretaciones que pudieran llevar a discusiones parlamentarias innecesarias, es por lo que se pretende reformar la fracción I, del Artículo 73 de la Constitución Local, para el efecto de establecer como una facultad explícita de la Diputación Permanente, el de poder recibir y dar turno para estudio y dictamen de las comisiones correspondientes las iniciativas de Ley o de Decreto que se reciban en este Recinto Legislativo durante los periodos de receso del Pleno.*”

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa, verificando que la misma tiene por objeto el de establecer como una facultad explícita de la Diputación Permanente, recibir y dar turno para estudio y dictamen de las comisiones correspondientes las iniciativas de Ley o de Decreto que se reciban en este recinto legislativo durante los periodos de receso del Pleno.

El promovente sustenta su propuesta en que *“este Poder Público cuenta entre uno de sus órganos con la Diputación Permanente, la cual estará en funciones cuando el Congreso en Pleno no esté en actividad, Órgano Directivo y de decisión parlamentaria que tiene entre sus funciones las que expresamente se encuentran establecidas en el artículo 73 de nuestra Ley Fundamental, una de las cuales la de la Fracción I, explícitamente dispone que está facultada para llevar la correspondencia con los Poderes de la Federación y con la de los Estados, de ahí, que puede entenderse implícitamente que también está facultada para llevar la correspondencia con los otros Poderes del Estado de Coahuila, como son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, así como con los demás entes autónomos previstos en dicho ordenamiento”* en el mismo orden de ideas estima que *“con base a esas atribuciones, la Diputación Permanente de este Poder Legislativo, puede legítimamente recibir iniciativas de Ley o de Decreto y turnarlas para su estudio y dictamen a las comisiones que correspondan, facultad implícita de la cual ya se había hecho uso por tal órgano, pero que para no dejar tal tema a interpretaciones que pudieran llevar a discusiones parlamentarias innecesarias, es por lo que se pretende reformar la fracción I, del Artículo 73 de la Constitución Local, para el efecto de establecer como una facultad explícita de la Diputación Permanente, el (…) recibir y dar turno para estudio y dictamen de las comisiones correspondientes las iniciativas de Ley o de Decreto que se reciban en este Recinto Legislativo durante los periodos de receso del Pleno.*

Aunado a lo anterior, a manera de referencia revisamos el contenido del artículo 78 de la Constitución Federal concerniente a la conformación y atribuciones de la Comisión permanente, observando que la fracción tercera establece la facultad de:

*Resolver los asuntos de su competencia;* ***recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas****, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;*

En este sentido, una vez que hemos agotado el estudio y análisis de la iniciativa la consideramos procedente.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma la fracción I, del artículo 73, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 73. …**

1. Llevar la correspondencia con los Poderes de la Federación y con los de los Estados, así como para recibir iniciativas de Ley o de Decreto, y turnarlas para su estudio y dictamen a las comisiones que correspondan.
2. a **VIII.** …

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXVII y se recorre la subsiguiente del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 01 del mes de abril de 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 14 de abril del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXVII y se recorre la subsiguiente del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXVII y se recorre la subsiguiente del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“El miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró una alerta mundial por el esparcimiento de un nuevo tipo de coronavirus conocido como Covid 19. Hasta este momento, la pandemia que inició en China y se ha propagado rápidamente por todo el mundo ha contagiado a un aproximado de 684,139 personas en 177 países, de las cuales, han fallecido alrededor de 32.091.*

*En nuestro país hasta el momento se han detectado 717 casos, de los cuales 12 han sido fatales .Desde que se declaró la pandemia, el gobierno mexicano ha recomendado a la ciudadanía tomar las medidas de higiene necesarias para evitar más contagios, evitar salir de casa e incluso interrumpir las actividades no esenciales en el sector público y privado. De la misma forma se han suspendido actividades que impliquen la aglomeración de personas, así como el cierre temporal de escuelas, bares, antros y parques entre otros.*

*No obstante, el problema más grave al que se han tenido que enfrentar los ciudadanos en los últimos días, es el aumento injustificado de los productos e insumos necesarios para enfrentar el brote del Covid 19. El jabón, los cubrebocas, las toallitas desinfectantes, el gel antibacterial, el alcohol así como las materias primas para poderlos hacer en casa se han disparado de forma inusitada, de la misma forma se ha detectado un incremento injustificado de los productos de la canasta básica.*

*Gran parte del aumento se debe a las compras de pánico, pero también a los acaparadores y comerciantes que aprovechan el miedo y la necesidad de las personas para su beneficio personal, subiendo deliberadamente los precios para obtener más ganancias a costa de la pandemia. Desde luego los más afectados resultan ser las personas que menos tienen pues no pueden acceder a los insumos básicos al no contar con los recursos suficientes, generando así un grave problema de vulnerabilidad ante la enfermedad.*

*Mientras tanto la autoridad permanece pasiva ante los precios abusivos e injustificados, como señala una investigación realizada por el sitio de noticias Animal Político en la cual sostiene que “La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) no está realizando ningún operativo especial de vigilancia respecto a los precios de productos como cubrebocas, gel antibacterial o toallitas desinfectantes con alta demanda al ser insumos de higiene contra el coronavirus”.*

*Hasta la semana pasada, la PROFECO reconoció haber iniciado procedimientos en contra de 22 establecimientos por casos de sobreprecios, lo cual, consideramos un número muy reducido dada la magnitud del problema. La justificación de la autoridad es que sólo pueden hacer revisiones cuando existen denuncias, sin embargo la fracción XIII del artículo 24 de la Ley Federal del Consumidor, le da la facultad expresa de vigilar los precios sin necesidad de que existan denuncias.*

*El texto normativo citado sostiene que son facultades de la Procuraduría: “Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor”.*

*Asimismo, la fracción XX del artículo citado sostiene que la PROFECO debe: “Requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores”.*

*Desde nuestra perspectiva, tales normas jurídicas son suficientes para poder llevar a cabo las revisiones de oficio correspondientes, sin embargo, y en ánimo de dotar a la autoridad de facultades expresas para que puedan atender de manera efectiva futuras crisis humanitarias, proponemos una adición al artículo 24 de la Ley Federal del Consumidor para que en casos de emergencia derivados de crisis humanitarias, como las pandemias, endemias, pestes, o cualquier otra enfermedad que obligue a los ciudadanos a ponerse en cuarentena, la autoridad pueda de oficio revisar los costos e insumos de productos con el fin de evitar y sancionar el sobre precio.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio de la propuesta de iniciativa que adiciona la fracción XXVII, recorriendo la subsiguiente del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de erradicación de las prácticas de sobreprecio y acaparamiento.

Los integrantes de esta dictaminadora, podemos observar que la iniciativa objeto del presente dictamen, encuentra motivación en un fenómeno que se ha venido presentando a raíz de la emergencia sanitaria del Covid-19, y es que al haberse declarado el país en un estado de emergencia y aislamiento social ante esta pandemia, se han despertado una serie de prácticas comerciales que afectan negativamente a la sociedad, como lo es la especulación de precios en el mercado de los productos para la protección de la higiene y salud, así como los de la canasta básica.

Es ante esta situación, que coincidimos con la promovente de la propuesta de iniciativa, en razón de que se debe proteger a la ciudadanía para que los precios de dichos productos se mantengan dentro de los límites establecidos por el mercado, evitando así abusos por parte de los comercios, tiendas de autoservicio y farmacias, en la venta de los productos que los consumidores requieran adquirir, de tal manera que la economía de los mexicanos no se vea afectada aún más ante situaciones como la que nos está tocando vivir.

Es por ello, que nos manifestamos a favor de la iniciativa, para que se adicione como otra atribución de la Procuraduría Federal del Consumidor, lo siguiente: *“en caso de pandemia, endemia, epizootia, peste o cualquier otra enfermedad análoga que afecte a gran parte de la población, la procuraduría revisará de oficio y de manera periódica los precios y la disponibilidad de los medicamentos, utensilios, productos o insumos, o cualquier otro haber necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, así como todos aquellos productos que pertenezcan a la canasta básica, con el objeto de evitar el acaparamiento y los sobreprecios injustificados, sancionando además a quienes realicen estas prácticas en los términos que determinen las normas aplicables”*.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXVII, al artículo 24 y se recorren las subsiguientes de la Ley Federal de Protección al Consumidor; para quedar en la forma siguiente:

**ÚNICO.-** Se adiciona la fracción XXVII, al artículo 24 y se recorren las subsiguientes de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 24.** La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

**I.** a **XXVI.** …

**XXVII.** En caso de pandemia, endemia, epizootia, peste o cualquier otra enfermedad análoga que afecte a gran parte de la población, la procuraduría revisará de oficio y de manera periódica los precios y la disponibilidad de los medicamentos, utensilios, productos o insumos, o cualquier otro haber necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, así como todos aquellos productos que pertenezcan a la canasta básica, con el objeto de evitar el acaparamiento y los sobreprecios injustificados, sancionando además a quienes realicen estas prácticas en los términos que determinen las normas aplicables.

**XXVIII.** Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos.

**TRANSITORIO**

**Único.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Por lo expuesto y fundado, instrúyase a la Oficialía Mayor de este Congreso, para que la presente propuesta de iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los trámites correspondientes.

**SEGUNDO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez (Secretario), Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona la fracción I, VI y VII del artículo 42, así como la fracción I del artículo 43, ambos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, asimismo se agrega una nueva fracción II al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 18 del mes de marzo del año 2020, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el 23 de mayo del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona la fracción I, VI y VII del artículo 42, así como la fracción I del artículo 43, ambos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona la fracción I, VI y VII del artículo 42, así como la fracción I del artículo 43, ambos de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“El presente planteamiento se inspira en el garantismo de los instrumentos de participación y organización ciudadana y comunitaria que se expresan en el artículo 6º de la citada Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza que, textualmente, reza lo siguiente:*

*Los gobiernos estatal y municipal, en los ámbitos de sus competencias, establecerán las garantías necesarias para que los instrumentos de participación y organización ciudadana y comunitaria sean reales, efectivos y democráticos.*

*Dicho artículo también establece que, para tal efecto, (ambos niveles de gobierno en la Entidad) removerán los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio del derecho de las personas a participar en la vida política, económica, cultural y social del estado.*

*Congruente con estos principios, y mediante importantes adecuaciones al merco legal respectivo, este Honorable Congreso no ha dejado de fomentar la participación ciudadana, particularmente en materia legislativa.*

*Partimos de que, como afirma el politólogo e investigador del Conacyt y del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México, Jason Alexis Camacho Pérez, “la gobernanza es un marco formal e informal que da cabida a diferentes actores dentro de las instituciones de gobierno. Es importante destacar al actor más importante en la toma de decisiones públicas: el ciudadano”.*

*En efecto, al ciudadano se le puede considerar “como el más importante en varios sentidos, puesto que el ciudadano, de manera individual y organizada, es quien define el rumbo y naturaleza de las acciones del gobierno”.*

*Por otra parte, “el ciudadano no lo es por habitar en un lugar...; ni tampoco lo son necesariamente los que disfrutan de derechos jurídicos como para entablar juicio o ser juzgados... El ciudadano... se define mejor por su participación en la justicia y en el gobierno.” (Aristóteles).*

*De ahí la preocupación del de la voz, tanto como la del resto de esta Honorable LXI Legislatura, de seguir trabajando en mejorar el marco normativo correspondiente, así como en la designación y uso de medios que faciliten la participación del gobernado, en este caso, en la tarea legislativa.*

*No pocas veces, nos hemos encontrado con que en las minucias legales está la clave para generar cambios importantes y positivos. Un ejemplo de ello es la fracción I del artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a los requisitos de la iniciativa popular, donde se indica que el proponente deberá presentar su planteamiento por escrito.*

*Para tal efecto, considero pertinente establecer que el interesado haga uso del programa computacional más usual en el procesamiento de textos, como es Office Word, que permite un tratamiento más rápido y eficiente del contenido de la iniciativa, esto último, sin menoscabo de que esta se presente en otro formato, pero en todo caso impresa y firmada, como se indica en la fracción V de dicho artículo, en vigencia.*

*Bajo el referido propósito de agilizar y mejorar la calidad del proceso legislativo posterior a la presentación de la iniciativa popular, se propone que, para su formulación, el ciudadano siga los principios y reglas de técnica legislativa, para lo cual podrá solicitar asesoría a la autoridad competente, concretamente, a la Oficialía del Congreso del Estado.*

*Por otra parte, para proyectos legislativos de mayor envergadura, como los que abordan temas muy sensibles o que planteen un fuerte impacto social, por ejemplo, la creación, derogación o abrogación de leyes o decretos, el ciudadano deberá contar con un amplio respaldo comunitario, derivado de foros o consultas a entidades públicas y/o agrupaciones de la sociedad civil, que concuerden con el planteamiento respectivo.*

*Obviamente, esto propiciará la participación de especialistas, autoridades públicas, organizaciones sociales reconocidas y líderes de opinión calificados, tanto en la orientación, como en lograr un mayor sustento y, por ende, en elevar la certeza y viabilidad de la iniciativa popular.*

*Por lo demás, se propone, mediante las modificaciones planteadas en la presente iniciativa, que la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tanto como la Ley Orgánica que rige a este Honorable Poder Legislativo, sean más específicas en lo referente a indicar el órgano interno al que el Congreso del Estado o la Diputación Permanente debe turnar las iniciativas populares para determinar si son o no son procedentes, como es la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.*”

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente comisión legislativa, efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente dictamen, observando que la misma tiene por finalidad la de modificar los artículos 42 y 43 de la Ley de Participación Ciudadana y el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso a efecto de:

1. ***Establecer que el interesado haga uso del programa computacional más usual en el procesamiento de textos, como es Office Word, que permite un tratamiento más rápido y eficiente del contenido de la iniciativa, esto último, sin menoscabo de que ésta se presente en otro formato, pero en todo caso impresa y firmada, como se indica en la fracción V de dicho artículo, en vigencia.***
2. ***Bajo el referido propósito de agilizar y mejorar la calidad del proceso legislativo posterior a la presentación de la iniciativa popular, se propone que, para su formulación, el ciudadano siga los principios y reglas de técnica legislativa, para lo cual podrá solicitar asesoría a la autoridad competente, concretamente, a la Oficialía del Congreso del Estado.***
3. ***Por otra parte, para proyectos legislativos de mayor envergadura, como los que abordan temas muy sensibles o que planteen un fuerte impacto social, por ejemplo, la creación, derogación o abrogación de leyes o decretos, el ciudadano deberá contar con un amplio respaldo comunitario, derivado de foros o consultas a entidades públicas y/o agrupaciones de la sociedad civil, que concuerden con el planteamiento respectivo. Estableciéndose para tal efecto que* deberá anexar a su iniciativa escritos en donde se exprese el respaldo de por lo menos tres instituciones y/u organizaciones, sean gubernamentales o de la sociedad civil, legalmente constituidas.**
4. ***Por lo demás, se propone, mediante las modificaciones planteadas en la presente iniciativa, que la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tanto como la Ley Orgánica que rige a este Honorable Poder Legislativo, sean más específicas en lo referente a indicar el órgano interno al que el Congreso del Estado o la Diputación Permanente debe turnar las iniciativas populares para determinar si son o no son procedentes, como es la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.***

En este orden de ideas las modificaciones analizadas en el presente dictamen consisten en lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENTE** | **PROPUESTA DE REFORMA** |
| **ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.** Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:  I. Presentarse por escrito.  II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.  III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.  IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.  V. Nombre y firma de quien la presenta.  El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular. | ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR. Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:   1. Presentarse por escrito**, preferentemente mediante el uso del programa informático Word, tanto como en versión impresa.** 2. ... a la V. ... 3. **En su elaboración y redacción, la iniciativa deberá apegarse a los principios y reglas convencionales de técnica legislativa, para lo cual el interesado(a) podrá solicitar asesoría oportuna a la autoridad competente.** 4. **Para la creación, derogación o abrogación de leyes o decretos, el o la proponente(s) deberá anexar a su iniciativa escritos en donde se exprese el respaldo de por lo menos tres instituciones y/u organizaciones, sean gubernamentales o de la sociedad civil, legalmente constituidas, cuyos fines y/o quehacer se relacionen en forma directa con el asunto central del planteamiento.**   El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular. |
| **ARTÍCULO 43. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA LEGISLATIVA.** Toda iniciativa popular en materia legislativa que se presente ante el Poder Legislativo del Estado, se sujetará al trámite legislativo siguiente:  I. El Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente turnará la iniciativa a una comisión que se integrará con siete diputados.  El funcionamiento de la comisión se regirá por la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  II. La comisión resolverá sobre la procedencia de la iniciativa, bajo las reglas siguientes:  1. Verificará que la iniciativa cumpla con los requisitos previstos en el artículo anterior.  2. En caso de que falte alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, se notificará al solicitante para que en un plazo no mayor de quince días hábiles presente la información requerida.  3. Una vez cumplidos los requisitos necesarios para la iniciativa popular, la comisión resolverá, en su caso, sobre la procedencia de la misma.  4. Si el solicitante no cumple con lo previsto en el numeral 2 de esta fracción, la comisión declarará la improcedencia de plano en los términos previstos por la ley.  5. La comisión notificará al solicitante o, en su caso, a su representante la resolución sobre la procedencia o improcedencia de la iniciativa popular.  6. La iniciativa que se declare procedente se sujetará al proceso legislativo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Congreso del Estado.  7. En la discusión de la iniciativa, podrán participar con voz hasta tres personas autorizadas por los solicitantes ciudadanos.  III. Toda omisión, acto o resolución del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente que viole el trámite de la iniciativa popular, podrá ser impugnada en los términos de la ley de la materia.  IV. (DEROGADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2008) | ARTÍCULO 43. EL TRÁMITE PARA DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA POPULAR EN MATERIA LEGISLATIVA. Toda iniciativa popular en materia legislativa que se presente ante el Poder Legislativo del Estado, se sujetará al trámite legislativo siguiente:   1. El Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente turnará la iniciativa a **la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.**   El funcionamiento de la comisión se regirá por la Ley Orgánica del Congreso del Estado**.**   1. **a IV. …** |
| **LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO VIGENTE** | **PROPUESTA** |
| **ARTÍCULO 90.-** La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia conocerá de los asuntos relacionados con:  **I.** Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado, iniciativas para la expedición o reforma de códigos en materia municipal y de leyes, iniciativas en materia de acceso a la información pública, e iniciativas de decretos relacionados con las materias y aspectos que sean o se consideren de su competencia; así como de las omisiones legislativas y errores plasmados en los ordenamientos que ya han sido promulgados;  **II.** División territorial y organización política y administrativa del Estado y de los Municipios, y la modificación de límites intermunicipales;  **III.** Creación, fusión, supresión y cambio de denominación de Municipios;  **IV.** Suspensión y desaparición de Ayuntamientos o Concejos Municipales y suspensión o revocación del mandato de alguno o algunos de sus integrantes, así como la designación de quienes deban desempeñar los cargos vacantes;  **V.** Designación de Concejos Municipales y de quienes deban suplir las faltas temporales o absolutas de los miembros de los Ayuntamientos o Concejos Municipales;  **VI.** Licencias o renuncias del gobernador y de los integrantes de los Ayuntamientos y demás servidores públicos que señalen la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos, cuando esto no sea competencia de otra Comisión;  **VII.** Nombramiento de gobernador interino o provisional, así como nombramiento o elección de quienes deban sustituir a servidores públicos que renuncien o soliciten licencia para separarse de su cargo, en los casos que sea procedente;  **VIII.** Nombramiento de los servidores públicos que señalen la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos, cuando esto no sea competencia de otra Comisión;  **IX.** Cambio de residencia de los Poderes del Estado o del Recinto Oficial del Congreso;  **X.** Otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo;  **XI.** Otorgamiento de facultades al Ejecutivo, para celebrar convenios sobre límites territoriales con las Entidades Federativas vecinas y para la ratificación de estos convenios.  **XII.** Ratificación o negación para que se erijan nuevos estados, dentro de los límites de los existentes;  **XIII.** Adaptación y readaptación social  **XIV.** Protección civil;  **XV.** Legislación civil y penal;  **XVI.** Leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público;  **XVII.** Nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios así como del Presidente y Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos;  **XVIII.** Renuncias y licencias de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios así como del Presidente y Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos;  **XIX.** Nombramiento o elección de quienes deban sustituir a los servidores públicos mencionados en la fracción anterior;    **XX.** Nombramiento del Fiscal General del Estado;  **XXI.** El otorgamiento de amnistías;  **XXII.** Convenios de asociación entre Municipios del Estado y de otras Entidades Federativas; y  **XXIII.** Otros asuntos que sean o se consideren de la competencia de esta comisión. | **ARTÍCULO 90.-** La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia conocerá de los asuntos relacionados con:  I. ...  **II. Iniciativas populares, a fin de dictaminar en torno a la procedencia de estas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y turnarlas, en su caso, a las comisiones competentes.**  III. a la XXIV. ... |

Una vez efectuado el estudio del objeto, contenido y motivos en los que se sustenta el proyecto de reforma quienes integramos la presente Comisión Dictaminadora, coincidimos con el promovente en que las modificaciones que se realicen a la ley de participación ciudadana deben partir de *“las garantías necesarias para que los instrumentos de participación y organización ciudadana y comunitaria sean reales, efectivos y democráticos”.*

Para este Congreso promover los mecanismos de participación ciudadana y de parlamento abierto, ha sido una tarea preponderante, cobrando especial relevancia, en este proceso las iniciativas ciudadanas, las cuales debemos destacar, en esta legislatura se ha presentado un número de ellas sin precedentes en la historia del Poder Legislativo de Coahuila, superando las 100 propuestas ciudadanas.

En este orden de ideas, consideramos al igual que el promovente en la necesidad de seguir trabajando en mejorar el marco normativo correspondiente, así como en la designación y uso de medios que faciliten la participación del gobernado, en este caso, en la tarea legislativa.

Como sabemos por disposición de las leyes General y Local en materia de transparencia, todos los proyectos normativos que se presentan ante esta Soberanía tienen la naturaleza de públicos, y se encuentran considerados entre los documentos que conforman la información pública de oficio, en este sentido, siendo uno de los parámetros que se utilizan para evaluar el acceso a la información de los particulares, el que estos documentos se encuentren disponibles en formatos de datos abiertos, resulta entonces para nosotros adecuado, el establecer que las iniciativas ciudadanas, además de presentarse en la forma escrita, ya prevista en la ley vigente, se presenten preferentemente en formato electrónico, ya sea en un C.D o memoria, en la que se encuentre el documento en un formato editable, como WORD, o algún equivalente.

Esta dictaminadora también considera, a efecto de garantizar una representación real y efectiva de la población, no establecer como requisito, en los casos en que se trate de expedición de nuevas leyes o decretos o extinción de los mismos, el contar con el respaldo de por lo menos tres organizaciones de sociedad civil relacionadas con el tema que expresen su respaldo a la propuesta, puesto que pudiera constituir un obstáculo para que los ciudadanos realicen propuestas de este tipo.

Por lo que hace a fijar como requisito de procedencia de las iniciativas populares que en su elaboración y redacción, deberán apegarse a los principios y reglas convencionales de técnica legislativa, para lo cual el interesado(a) podrá solicitar asesoría oportuna a la autoridad competente, si bien estimamos que es una propuesta que persigue la finalidad de abonar a la elaboración y presentación de iniciativas ciudadanas más completas y adecuadas, al tratarse cuestiones de forma, pudiera resultar excesivo el desechar alguna propuesta ciudadana que no se ajustara a tales reglas, o pudiere resultar restrictivo a los derechos de participación de los ciudadanos que las desconozcan, por tanto no se incluyó este aspecto en el proyecto de Decreto, contenido en el presente dictamen.

Finalmente esta dictaminadora realizó algunos ajustes de técnica legislativa, estableciéndose una adición de una fracción segunda al artículo 42, en lugar de la reforma a la fracción I, originalmente planteada.

Por lo que hace a las modificaciones propuestas al artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana y 90 de la Ley Orgánica, los integrantes de esta comisión legislativa, coincidimos en que los mismos son congruentes con nuestro marco normativo.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

**PROYECTO DE DECRETO**

**PRIMERO.-** Que adiciona la fracción II, recorriéndose las ulteriores al artículo 42, y se reforma la fracción I del artículo 43, de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de la manera siguiente:

**ARTÍCULO 42.** …

1. …
2. Procurar acompañar a su escrito la iniciativa en versión electrónica, en un procesador de texto, en memoria USB o CD.
3. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.
4. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.
5. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.
6. Nombre y firma de quien la presenta.

…

**ARTÍCULO 43.** …

1. El Congreso del Estado o, en su caso, la Diputación Permanente turnará la iniciativa a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

El funcionamiento de la comisión se regirá por la Ley Orgánica del Congreso del Estado**.**

1. a IV. …

**SEGUNDO.-** Se adiciona una nueva fracción II al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, recorriéndose las fracciones subsecuentes de dicho artículo, para quedar de la manera siguiente:

**ARTÍCULO 90.-** …

1. **…**
2. Iniciativas populares, a fin de dictaminar en torno a la procedencia de estas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y turnarlas, en su caso, a las comisiones competentes;
3. División territorial y organización política y administrativa del Estado y de los Municipios, y la modificación de límites intermunicipales;
4. Creación, fusión, supresión y cambio de denominación de Municipios;
5. Suspensión y desaparición de Ayuntamientos o Concejos Municipales y suspensión o revocación del mandato de alguno o algunos de sus integrantes, así como la designación de quienes deban desempeñar los cargos vacantes;
6. Designación de Concejos Municipales y de quienes deban suplir las faltas temporales o absolutas de los miembros de los Ayuntamientos o Concejos Municipales;
7. Licencias o renuncias del gobernador y de los integrantes de los Ayuntamientos y demás servidores públicos que señalen la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos, cuando esto no sea competencia de otra Comisión;
8. Nombramiento de gobernador interino o provisional, así como nombramiento o elección de quienes deban sustituir a servidores públicos que renuncien o soliciten licencia para separarse de su cargo, en los casos que sea procedente;
9. Nombramiento de los servidores públicos que señalen la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos, cuando esto no sea competencia de otra Comisión;
10. Cambio de residencia de los Poderes del Estado o del Recinto Oficial del Congreso;
11. Otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo;
12. Otorgamiento de facultades al Ejecutivo, para celebrar convenios sobre límites territoriales con las Entidades Federativas vecinas y para la ratificación de estos convenios;
13. Ratificación o negación para que se erijan nuevos estados, dentro de los límites de los existentes;
14. Adaptación y readaptación social;
15. Protección civil;
16. Legislación civil y penal;
17. Leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público;
18. Nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios así como del Presidente y Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos;
19. Renuncias y licencias de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Administrativo, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios así como del Presidente y Consejeros de la Comisión de los Derechos Humanos;
20. Nombramiento o elección de quienes deban sustituir a los servidores públicos mencionados en la fracción anterior;
21. Nombramiento del Fiscal General del Estado;
22. El otorgamiento de amnistías;
23. Convenios de asociación entre Municipios del Estado y de otras Entidades Federativas; y
24. Otros asuntos que sean o se consideren de la competencia de esta comisión.

**TRANSITORIO**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÈRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 453 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 13 del mes de mayo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 15 de mayo del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 453 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 453 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“El principio del bien común se refiere a la razón de ser de la sociedad, la cual existe para crear, mantener y promover un conjunto de condiciones que permitan y favorezcan el desarrollo de sus miembros. Así, el bien común se logra con el esfuerzo de todos y para servir y ayudar a todos; luego entonces el bien común es un estado o situación de la sociedad en la que existe y se desarrolla toda clase de bienes.*

*Ahora bien, toda vida social combina en distinta proporción el bien y el mal común, y destaca la obligación de promover el bien común como razón de ser de la vida social, de tal suerte que la insuficiencia del bien común altera para muchos el significado de la vida social y hace que, por el hecho de vivir en una sociedad con graves deficiencias de bien común, la vida social sea más destrucción y retraso de muchas personas y familias que oportunidad positiva y alentadora de desarrollo para ellas.*

*Para lograr lo anterior, es decir el bien común, se requiere la autoridad social, que es ante todo un órgano o instancia con derecho de mandar, este derecho claro destinado a lograr precisamente, el bien común. Esta es la autoridad jurídica, que debería ser acompañada de la autoridad moral e intelectual. Así, una autoridad completa debería tener no solo el derecho de mandar, sino la capacidad y preparación para hacerlo, además de calidad y ejemplo moral en el ejercicio del poder.*

*Ahora bien, históricamente han preocupado que primen aspectos del mal común en cuanto al ejercicio del poder por parte del Estado, en lo que respecta a la Administración Pública, entendida ésta como el proceder del Estado orientado a lograr el bien común en la sociedad.*

*En ese contexto, como medida de contención, dentro de los delitos que se conocen como de conducta antisocial, existen los que afectan y ofenden a la Administración Pública que el Estado pretende llevar adelante en forma lo más eficiente posible, todo en aras de lograr el bien común. Así, en nuestro Código Penal del Estado se encuentra el Título Undécimo relativo a los “delitos contra la honestidad en el servicio público”.*

*Y es que un proceder deshonesto, del servidor público cuyo servicio va encaminado precisamente a lograr el bien común, viene a afectar substancialmente la esencia del desenvolvimiento social y con ello la dinámica del Estado, por la cual, se pretende la buena marcha de los órganos y servicios que vienen a ser los realizadores de los fines jurídicos y sociales, los que fincan el cimiento de la verdadera Administración Pública.*

*Así, el servicio público, enfocado al mantenimiento del desarrollo de los órganos estatales para la consecución de bien común, requiere estar jurídicamente protegido, sobre todo contra los que formalmente ejercen una función pública pero que materialmente, en un notorio abuso de la confianza en ellos depositada, no sólo denigran negativamente la función encomendada, sino, además, afectan económicamente al Estado, promoviendo por supuesto, el mal común.*

*La convivencia social, por la cual el ciudadano vive en paz, depende de la buena observancia del trabajador estatal, por lo que es importante revisar nuestro marco jurídico para determinar de forma eficaz como perseguir y castigar, a aquel servidor público que, teniendo en su poder en calidad de custodia, bienes en depósito de confianza que se otorgaron, los desvía ilícitamente de su fin, cometiendo el delito conocido como peculado.*

*Así pues, la presente iniciativa de adición pretende aumentar las penas para el delito de peculado, en los casos en que los recursos que fueren desviados indebidamente estuvieren destinados para fines de salud pública, programas de apoyo o inclusión social. Y es que resulta inaceptable el que, siendo los recursos del Estado escasos, sobre todo ante la crisis económica que atravesamos, éstos, en el caso particular de los destinados a cubrir los programas más esenciales para garantizar el derecho humano a la salud, y a una vida digna, sean desviados de sus fines, dañando no solo a la hacienda pública en lo particular, sino a la sociedad en general.*”

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en las que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto adicionar dentro del Código Penal del Estado un párrafo tercero dentro del artículo 453, con el fin de aumentar la penalidad del tipo penal de peculado, en los casos en que éste se cometa sobre recursos destinados para fines de salud pública, programas de apoyo o inclusión social.

La palabra peculado se puede definir como la estafa o fraude del patrimonio público. Este delito consiste en la utilización indebida de recursos pertenecientes al estado por parte de quienes son los responsables de su resguardo y supervisión, a fin de obtener un beneficio propio.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003 y suscrita por México el 11 de diciembre del mismo año, contempla que “*La corrupción tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”*.

*Este fenómeno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.*

Dentro del articulado de la citada convención, considerando el tema que nos ocupa, se manifiesta que:

*Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público.*

***Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado****, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.*

*Artículo 65. Aplicación de la Convención*

*1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.*

*2.* ***Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción.***

Aunado a lo anterior, nuestra legislación penal federal tipifica el delito de peculado en su artículo 223, describiendo las conductas y sanciones a imponer sobre el servidor público que incurra en el supuesto jurídico señalado, el cual se enuncia al tenor literal siguiente:

***Artículo 223****.- Comete el delito de peculado:*

***I.-*** *Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;*

***II.-*** *El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;*

***III.-*** *Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y*

***IV.-*** *Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.*

*Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:*

*Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.*

*Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.*

*Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.*

Por su parte el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, tipifica el mencionado delito en su artículo 453, el cual alude que:

***Artículo 453 (Peculado)***

*Comete el delito de peculado, el servidor público que:*

***I.*** *(Disposición de recursos públicos)*

*Por sí o por interpósita persona, fuera de los casos en que la ley lo permita, disponga con ánimo de apropiación para sí, para otro, o para cualquiera de las personas señaladas en el párrafo segundo del artículo 452 de este código, de dinero, valores o fondos del erario del Estado o de cualquiera de sus municipios.*

***II.*** *(Disposición de bienes públicos)*

*Por sí o por interpósita persona, fuera de los casos en que la ley lo permita, disponga con ánimo de apropiación para sí, para otro, o para cualquiera de las personas señaladas en el párrafo segundo del artículo 452 de este código, de bienes muebles o inmuebles, pertenecientes a cualquier entidad oficial del Estado o de cualquiera de sus municipios.*

*A quien realice cualquiera de las conductas de peculado previstas en este artículo, se le impondrán las penas siguientes:*

***1)*** *(Peculado de cuantía mínima)*

*De cien a doscientos días multa, cuando el monto del peculado no exceda de cien veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito, o no sea posible determinar el valor de las cosas muebles.*

***2)*** *(Peculado de cuantía menor)*

*De uno a tres años de prisión y de doscientos a mil días multa, cuando el monto del peculado exceda de cien, pero no de quinientas veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito.*

***3)*** *(Peculado de cuantía media)*

*De dos a cuatro años de prisión y de quinientos a mil días multa, cuando el monto del peculado exceda de quinientos, pero no de mil veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito.*

***4)*** *(Peculado de cuantía intermedia)*

*De cuatro a ocho años de prisión y de mil a dos mil días multa, cuando el monto del peculado exceda de mil, pero no de diez mil veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito.*

***5)*** *(Peculado de cuantía mayor)*

*De cinco a doce años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, cuando el monto del peculado exceda de diez mil veces el importe del valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometió el delito.*

Si bien, de lo anterior se desprende que el delito de peculado se encuentra ampliamente penado, quienes integramos esta comisión dictaminadora coincidimos con el iniciador en la importancia de sancionar de manera más estricta cuando éste se cometa en el desvío de recursos destinados específicamente para el sector público de salud, así como a cualquier programa de apoyo encaminado a la obtención de una vida digna y a una inclusión social adecuada.

Ello tomando en consideración que, en el caso del derecho a la salud, éste constituye uno de los derechos humanos fundamentales para el adecuado desarrollo de la sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que quienes conformamos la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, conscientes de que el delito de peculado quebranta el patrimonio del Estado y restringe la posibilidad de implementar acciones y recursos a favor del desarrollo social, consideramos que resulta indispensable vigilar y proteger el adecuado cumplimiento del derecho a la salud y a una vida digna, a través de mecanismos de seguridad que permitan disminuir esta problemática.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO. -** Se **adiciona un tercer párrafo al artículo 453** del Código Penal de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

**Artículo 453 (Peculado)**

…

…

Cuando los recursos materia del peculado estuvieran destinados a fines de salud pública, programas de apoyo o inclusión social, se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.

**TRANSITORIO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 16 del mes de octubre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 17 de octubre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por nuestra sola condición de personas, tenemos el derecho a una vida digna y rodeada de los elementos necesarios para el desarrollo.*

*Esta prerrogativa debe ser garantizada por la legislación, sin embargo, la obligación de proporcionar dichos elementos también corresponde a aquellas personas entre las cuales existen vínculos de parentesco.*

*En la actualidad la desintegración familiar, ocasiona que sus integrantes enfrenten diversas situaciones con mayor dificultad, esta circunstancia afecta notablemente el desarrollo de las hijas e hijos, los cuales pueden caer en conductas antisociales, así como afectaciones emocionales.*

*Las causas que motivan la desintegración familiar no deben de ser omisas en alguna legislación, ya que en ocasiones sus causas se generan por el incumplimiento de la obligación alimentaria.*

*Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), el 67.5% de madres solteras no reciben pensión alimenticia, 3 de 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia; el 91% de los casos los acreedores son los hijos; mientras que el 8.1% son esposas e hijos.*

*La convención sobre los Derechos del Niño garantiza en su artículo 27, fracción IV, las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres. Todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de padres y madres proporcionárselo. Es obligación del Estado adaptar medidas apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es necesario, mediante el pago de la pensión alimenticia.*

*En este orden de ideas, es oportuno señalar que, sobre el derecho de alimentos, en sesión celebrada el pasado 21 de agosto de 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en amparo directo en revisión número 6605/2017, sostuvo lo siguiente:*

*“El derecho a los alimentos tiene origen en el deber de solidaridad que existe entre familiares, razón por la cual dicha obligación suele derivarse del parentesco. En virtud del derecho de alimentos una persona puede exigirle a otra el suministro de los bienes necesarios para su subsistencia que la misma no puede proveerse por cuenta propia, de tal manera que puede afirmarse que la obligación alimentaria es un deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra.*

*El derecho de alimentos abarca obligaciones que van más allá de la estricta alimentación. Así se ha recogido en los ordenamientos jurídicos y en los diversos tratados doctrinales que sobre la materia existen. De este modo, el derecho de alimentos incluye todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, pero también comprende –en el caso de los menores– la educación e instrucción*

*Asimismo, es doctrina de esta Sala que los elementos de la obligación alimentaria es posible derivarlos del artículo 4º constitucional, ya que cuando en su párrafo octavo determina que los niños y las niñas tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, está delineando los elementos esenciales del derecho de alimentos, que, además, tiene como objetivo central el desarrollo integral de los menores.*

*Esta Suprema Corte en diversas resoluciones ha sostenido que los alimentos son materia de orden público e interés social, hasta el punto de conceder la suspensión contra el pago de alimentos, entre otras razones, porque de no otorgarse se impediría al acreedor alimenticio recibir la protección necesaria para su subsistencia.*

*Aunado a lo ya dicho, es importante enfatizar que la obligación de suministrar alimentos no sólo incluye los bienes indispensables para la subsistencia del menor, sino aquellos necesarios para su desarrollo integral armónico, de tal manera que todos estos son aspectos deben ser evaluados por el juzgador al momento de determinar el monto de la cuota alimentaria.*

*Sin menoscabo de lo ya señalado, es claro que el contenido último de la obligación alimentaria es económico pues se traduce en un pago en dinero o en la incorporación a la familia, pero la finalidad a que se atiende es personal: aunque patrimonial es el objeto de la prestación, la obligación se encuentra conexionada con la defensa de la vida del acreedor y el desarrollo de su personalidad. En otras palabras, tiene un contenido económico que permite al ser humano obtener su sustento en los ámbitos biológico, psicológico, social, etcétera.*

*La obligación alimentaria puede consistir en una obligación de dar o de hacer, ya que se cumple mediante la asignación de una pensión o la realización de actividades determinadas con la finalidad de proporcionar una vida digna al acreedor alimentista. En el caso de los menores, también implica el brindarles la educación y capacitación para que posteriormente puedan valerse por sí mismos.*

*Tomando en cuenta lo anterior, el objeto de la obligación alimentaria está formado tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los medios necesarios para satisfacer los requerimientos ya aludidos del acreedor alimentista.*

*Una vez expuestos los rasgos generales del derecho de alimentos, debe señalarse que la obligación de los alimentos se da, en primer lugar, en la relación paterno-materno-filial, de ahí que los alimentos sean normalmente considerados como un derecho de los hijos y como un deber de los padres, independiente de que ostenten o no la patria potestad, y sin que importe si los hijos han nacido fuera o dentro del matrimonio: la obligación de los progenitores de prestar alimentos a sus hijos queda integrada en la relación de patria potestad, pero la fuente no es la patria potestad sino la paternidad y/o maternidad, de tal manera que esa situación comienza para el menor desde el instante que marca el inicio de su vida. Sobre este aspecto conviene precisar que la obligación alimentaria recae no sólo sobre el progenitor que convive con su hijo menor de edad, sino también sobre el progenitor no conviviente, porque –como ya se dijo– el origen es el vínculo paternomaterno-filial.*

*A diferencia de los alimentos entre parientes, la obligación alimentaria de los padres para con los hijos reviste una fisonomía particular y se rige por normas específicas que contemplan su singularidad, como es el que no debe acreditarse la necesidad del alimentado, pues ésta se presume: el menor no necesita probar el elemento de necesidad para pedir alimentos, configurándose así una situación especialísima que marca una nítida diferencia con la obligación entre parientes; es decir, tratándose del derecho de alimentos cuyo titular es un menor de edad no se requiere la conformación del requisito de necesidad, sino que basta la mera existencia del vínculo familiar.*

*Por otra parte, la obligación alimentaria posee características especiales que la diferencian de las obligaciones originadas por la voluntad negocial, lo que hace que las normas que la regulan se aparten de los principios generales del derecho netamente crediticio y se rijan por normas específicas, lo cual debe tenerse siempre presente, especialmente cuando se trata de resolver situaciones que involucren el derecho de alimentos de un menor.*

*La obligación alimentaria ineluctablemente nace desde el momento del nacimiento del menor. Por consiguiente, la obligación alimentaria, en virtud de su causa y naturaleza, así como por ser de orden público, no puede renunciarse ni ser delegada, sino que recae directamente y en primerísimo lugar en los padres: pesa tanto en el padre como en la madre, porque de esa manera se garantiza el máximo desarrollo posible del menor, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Convención, que reconoce el deber de ambos progenitores en el cuidado y la crianza de los menores de edad, quienes deben asegurarle, dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo.*

*Por último, y no por ello menos importante, la cuestión alimenticia excede la legislación civil proyectándose como un derecho humano. Si bien es cierto que todo reclamo alimentario tiene apoyo en artículos precisos de los códigos civiles aplicables, el derecho de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil tradicional involucrando derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, como se observa en el artículo 4º constitucional y en diversas disposiciones legales: los niños y las niñas tienen el derecho fundamental a recibir alimentos, los cuales se presumen indispensables para garantizar su desarrollo integral.*

*En otras palabras, el derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental, de tal manera que los elementos esenciales que integran el derecho a los alimentos se corresponden con varios de los derechos consagrados en el artículo 4º de la Constitución.*

*Por ello, no es de extrañar que el derecho de alimentos haya sido comprendido en diversos instrumentos internacionales. En concreto, el artículo 18, inciso 1, de la Convención es específico en ordenar a los Estados poner el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio por el que ambos padres tiene obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño, enfatizando que su preocupación fundamental será el interés superior del niño.*

*Sentado lo anterior, esta Primera Sala, empleando como pauta hermenéutica el artículo 4º constitucional, considera que el pago de alimentos retroactivos a favor de una niña, niño o adolescente, a diferencia de la pensión alimenticia, debe fijarse en el juicio de origen en cantidad líquida y no en un porcentaje, para garantizar así de manera más amplia e integral el derecho de alimentos del menor y preservar la certeza y seguridad jurídicas, tanto del deudor como del acreedor alimentario.*

*En este sentido, el juez de la causa debe valorar el material que obra en autos y tomar en cuenta distintas cuestiones que permitan emitir una cantidad adecuada, pues ciertamente la cuantificación exige de ciertas pruebas y análisis de condiciones particulares. Por ello, el juzgador debe atender a los elementos que tradicionalmente han servido como marco de referencia para su determinación, esto es, la capacidad económica del deudor y la necesidad del acreedor alimentista, asumiendo que por tratarse de un menor de edad opera la presunción de necesidad. Esto implica que el Juez, si es preciso, debe recabar de oficio las pruebas necesarias para que la cantidad resulte proporcional.*

*Indubitablemente, en la fijación del monto de la pensión alimenticia debe regir el principio de proporcionalidad y atenderse a los demás derechos involucrados en el juicio, como son la igualdad, la certeza jurídica y el derecho al mínimo vital, así como los derechos de otros acreedores alimentarios, de ser el caso.*

*En este sentido cobra vigencia lo señalado por esta Sala, en el sentido de que, para modular el monto retroactivo de la pensión alimenticia, de tal forma que sea razonable y no llegue a ser abusivo, debe considerarse i) si existió o no conocimiento previo de su obligación; y, ii) la buena o mala fe del deudor alimentario.*

*Por lo que se refiere al conocimiento previo, el juzgador debe ponderar si el deudor alimentario tuvo o no conocimiento del embarazo o del nacimiento del menor, ya que el conocimiento del hecho generador es una condición esencial al ponderar el quantum, en tanto que si el padre no tuvo conocimiento de la existencia del menor, y ese desconocimiento no es atribuible a él, no podrá asumirse que quiso incumplir con las obligaciones alimentarias, sino que, al desconocer su existencia, no podía cumplir con una obligación que ignoraba.*

*Dicho de otro modo, el juez debe tomar en cuenta si el embarazo y/o nacimiento del menor no le fueron ocultados, restringiéndose con ello los derechos tanto del menor como del padre y así, una vez delimitado si existió o no conocimiento previo, el juzgador debe considerar la actuación del deudor alimentario en el transcurso del proceso para determinar la filiación y los alimentos, y si ha actuado con buena o mala fe durante la tramitación del proceso; si siempre se ha mostrado coadyuvante y con afán de esclarecer la situación o si, por el contrario, se ha desempeñado negligentemente o se ha*

*Ciertamente, la fijación del monto de los alimentos tomando en cuenta el estándar señalado no implica que se deje de lado la proporcionalidad que rige la materia de alimentos, ni que la obligación deba cumplirse en una sola exhibición. En cada caso el juez deberá valorar las circunstancias particulares y determinar lo conducente, pero lo que no es acorde con el interés superior del menor y con el principio de seguridad jurídica de acreedor y deudor alimentario es que la deuda permanezca indeterminada en su cuantificación”.*

*Una vez puntualizado lo anterior, debe señalarse que actualmente el artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, establece que la obligación de dar alimentos en los juicios de paternidad, debe retrotraerse a la fecha de nacimiento de la niña o niño, si se acredita que el padre tuvo conocimiento del embarazo de la madre y se negó a reconocer a su hijo o hija; o bien, si la madre actuó de mala fe o impidió que el padre reconociera a su hijo o hija, la pensión alimenticia de meses vencidos se pagará a partir de la presentación de la demanda correspondiente; sin establecer la fórmula aritmética que debe emplearse.*

*En por esto que resulta necesario reformar el artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, donde se contemple que la pensión alimenticia que se aplique de manera retroactiva en los juicios de paternidad deberá fijarse en una cantidad líquida, a favor del interés superior del menor; atendiendo además, al criterio adoptado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*”

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora, efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en la que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto regular la determinación retroactiva de pensiones alimenticias en los casos de reconocimiento de paternidad, garantizando con ello el interés superior de la niñez.

La obligación alimentaria, surge como consecuencia de la necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la imposibilidad para procurarse de los medios necesarios para su subsistencia física y su mejor desarrollo humano.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 establece lo siguiente:

***Artículo 4o.*** *El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.*

*Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.*

***Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.***

*Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.*

*Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.*

*Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.*

*Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.*

*Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.*

***En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.***

***Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.***

*El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.*

*Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.*

*Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.*

En base a ello, podemos acentuar la importancia del derecho que tiene el menor de edad de que el estado vele por su protección y adecuado desarrollo, otorgándole a los padres o tutores la obligación de colmarlos de las atenciones necesarias para garantizar el interés superior de niñas y niños en nuestro país.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989, obliga a los estados firmantes a reforzar el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo, destacando dentro de sus bases el deber que recae sobre los representantes legales del menor en cuanto a su efectiva crianza y desarrollo, manifestándolo en su artículo 18, al tenor literal siguiente:

***Artículo 18***

*1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.*

*2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.*

*3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.*

En este contexto, la promovente de la presente propuesta de reforma, se enfoca en la importancia de que las niñas y niños reciban un apropiado desarrollo, a través de una pensión alimenticia digna, enfatizando en el hecho de que “*en la actualidad la desintegración familiar, ocasiona que sus integrantes enfrenten diversas situaciones con mayor dificultad, esta circunstancia afecta notablemente el desarrollo de las hijas e hijos, los cuales pueden caer en conductas antisociales, así como afectaciones emocionales.*

*Las causas que motivan la desintegración familiar no deben de ser omisas en alguna legislación, ya que en ocasiones sus causas se generan por el incumplimiento de la obligación alimentaria”.*

En este orden de ideas, resulta conveniente señalar que en sesión de 1 de febrero de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 1388/2016, determinándose que el pago retroactivo de los alimentos que se generaron en la niñez, pueden ser solicitados por el acreedor alimentario mayor de edad, mediante los criterios que, entre otros, a continuación se exponen:

*La Sala señaló que, de acuerdo con la doctrina sustentada por el Máximo Tribunal, el derecho a los alimentos es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir, siendo así que los alimentos tienen como fundamento la solidaridad que se deben las personas que llevan una vida familiar, ya sea formal o de hecho.*

*Asimismo, se indicó que dado que su cumplimiento resulta ser de interés social y orden público, la procuración de los alimentos trasciende más allá de los integrantes del grupo familiar, por lo que el Estado tiene el deber de vigilar que se procuren los medios de vida suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carece de los mismos y se encuentra en la imposibilidad real de obtenerlos.*

*Del mismo modo, se destacó que el acceso al derecho de los alimentos se rige por distintos principios que deben ponderarse al momento de fijar la pensión alimenticia, tal es el caso del principio de proporcionalidad, el cual refiere que tratándose de los alimentos debe atenderse a la capacidad económica del deudor alimentario y a las necesidades de quien deba recibirlos.*

*La Primera Sala indicó que en tal asunto, se concluyó que si el derecho de los menores a recibir alimentos por parte de sus progenitores surge desde su nacimiento, entonces puede sostenerse que la deuda alimenticia también se origina desde ese momento y, por lo tanto, resulta posible retrotraer la obligación del derecho a los alimentos al momento del nacimiento del menor, siendo así que esta obligación puede ser exigida en cualquier tiempo por el acreedor.*

*La Sala resaltó que la posibilidad de reclamar el pago de los alimentos no se circunscribe a la esfera de la minoría de edad, dado que una persona mayor de edad puede reclamar dicho pago de manera retroactiva, no en cuanto a su derecho a los alimentos en la actualidad, sino respecto de aquellas necesidades alimenticias que se actualizaron y no se subsanaron cuando era menor de edad, esto es, debe distinguirse entre el ámbito de protección del derecho (alimentos por minoría de edad) y el momento en que dicho derecho puede ser exigible (cualquier tiempo).*

*En esa tesitura, la Sala refirió que la obligación alimenticia persiste incluso cuando el acreedor haya adquirido la mayoría de edad, por lo que no existe una razón para negarle la posibilidad de exigir su cumplimiento, de tal manera que asiste la razón al Tribunal Colegiado al reconocer que la acreedora mayor de edad pueda reclamar el pago de las necesidades alimenticias que se originaron durante su infancia.*

*No obstante, la Primera Sala modificó la sentencia recurrida sólo para que se tomaran en cuenta los elementos necesarios a fin de cuantificar el monto de los alimentos retroactivos, dado que el órgano colegiado omitió establecer que para evaluar el quantum indemnizatorio derivado del pago de los alimentos que le correspondían a la actora cuando era menor, se debían tomar en cuenta los siguientes aspectos: a) si existió o no conocimiento previo del embarazo o del nacimiento de la reclamante; b) la buena o mala fe del deudor alimentario durante el procedimiento; c) considerar que en el progenitor recae la carga de probar la existencia de razones justificadas por las que deba ser relevado de la obligación de contribuir al sostenimiento del menor a partir de la fecha de nacimiento; y d) los demás elementos que tradicionalmente han servido como marco de referencia para su determinación, tal es el caso de la capacidad económica del deudor alimentario.*

En virtud de lo anterior, el artículo 279 de la Ley para la Familia del Estado, establece que en los juicios de paternidad, la pensión alimenticia debe retrotraerse a la fecha de nacimiento de la niña o niño, si se acredita que el padre tuvo conocimiento del embarazo de la madre y se negó a reconocer a su hijo o hija. Si la madre actuó de mala fe o impidió que el padre reconociera a su hijo o hija, la pensión alimenticia de meses vencidos se pagará a partir de la presentación de la demanda correspondiente.

Por consiguiente, la presente iniciativa propone la reforma del artículo anteriormente citado, con el fin de que se puntualice que la pensión alimenticia que se otorgue de manera retroactiva en los juicios de paternidad, deberá fijarse de manera líquida, favoreciendo en interés superior de las niñas y los niños, y atendiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de expediente 6605/2017, manifestado en la presente exposición de motivos.

Es en este contexto, que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos constitucionales y Justicia, coincidimos con la iniciadora en la necesidad imprescindible de salvaguardar el derecho de percibir pensión alimenticia de manera adecuada, considerándose este como de orden público e interés social, procurando en todo momento la protección y el adecuado desarrollo de la niñez y así poder lograr un mejor entorno social en nuestra entidad.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona un segundo párrafo al artículo 279 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 279.** …

En cualquiera de los casos señalados en el párrafo anterior, la pensión alimenticia que se aplique de manera retroactiva deberá fijarse en una cantidad líquida.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**ÚNICO.-** El presente decreto, entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 29 del mes de noviembre del año 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 02 de diciembre del mismo año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Protección Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S***

*“Por todos conocidos, fue el accidente ocurrido en la kermés realizada dentro de una institución de educación de esta localidad, el cual puso en riesgo la vida de la pequeña Marian L.*

*Por lo que vemos necesario llevar a cabo una reforma en la Ley en comento, similar a la que nuestro Grupo Parlamentario en su momento propuso en relación con los cursos o campamentos de verano, ya que ambas iniciativas tienen un objetivo común, la protección al interés superior de los menores de edad, quienes son los protagonistas de estos tristes sucesos.*

*La finalidad de esta reforma es que se determinen los mecanismos para la celebración de las ferias eventuales o kermés, donde se contemple la instalación y funcionamiento de juegos mecánicos, garantizando que con motivo de su desarrollo no se altere la seguridad de la población, ni se ponga en riesgo la integridad de sus participantes y asistentes.*

*Dentro de la Ley de Protección Civil de nuestro Estado, no se contempla la definición de kermés, fiestas populares que incluyen puestos de juegos de destreza, juegos mecánicos, puesto de comida y bebida, sorteos y números artísticos, que se utilizan más comúnmente en las escuelas o en las iglesias, para recaudar fondos a favor de distintas causas benéficas, artísticas o sociales, por lo que como primer punto está su inclusión en la norma, al ser está una actividad que implica un riesgo a las personas que asisten a ella.*

*Si bien, no es una regla general, que en todos estos eventos suceda un incidente como el que mencione anteriormente, sí es vital dado los tiempos en los que vivimos, que se regule en relación a este tema, con el objeto de minimizar cualquier tipo de accidente, así como fomentar la participación activa de las autoridades y la sociedad para deslindar las responsabilidades que se generen.*

*Así mismo incluimos como una facultad de la Subsecretaria de Protección Civil, la elaboración de protocolos de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos dentro de una feria eventual o kermés.*

*Lo anterior independientemente de que dichas instalaciones cuenten con el dictamen de seguridad y operación de otro giro, y en su caso, aplicar las medidas y/o sanciones, que considere adecuadas, protocolos que deben cumplir los promotores, organizadores o responsables de la realización de dichos eventos, así como los que instalan y ponen en operación los juegos mecánicos.*

*Es indispensable que dichos protocolos especiales contengan indicaciones precisas con el objeto de prevenir o en su caso atender cualquier tipo de eventualidad.*

*Deseamos que dentro estos mecanismos de regulación que se contemplen las medidas de prevención encaminadas a proteger el interés público y evitar daños a las asistentes.*

*Que se contemplen y revisen las condiciones físicas y materiales de los lugares donde se pretendan llevar a cabo dichos eventos.*

*Que se establezcan las condiciones de seguridad pública, tránsito y protección civil, esto en coordinación con las autoridades competentes en la materia.*

*Que se especifiquen los supuestos que generen la suspensión de dichos eventos.*

*Que se presente el documento o bitácora en donde se constate el mantenimiento que se les ha dado a los juegos mecánicos instalados.*

*Asimismo que pueda ser fácilmente visible, las condiciones bajo las cuales se puedan subir los menores de edad a dichos juegos.*

*De igual manera que se pueda contemplar en la medida de las posibilidades, la presentación de una carta responsiva por parte de los organizadores y de quienes instalan los juegos mecánicos, para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que puedan sufrir los asistentes y/o los operadores de dichos juegos.*

*Sabemos que en el proceso de elaboración de estos protocolos, surgirán muchos más supuesto, las menciones anteriores son para nosotros el inicio de lo que estamos seguros, será un excelente mecanismo que minimizara los accidentes en las ferias eventuales o kermés.*

*Deseamos que la diversión sana y segura de nuestros pequeños, sea nuestro principal foco de atención, ya que el desarrollo de una niñez feliz, dará como resultado una etapa de adultez más tolerante y abierta a los cambios como los que hoy estamos viviendo.”*

**TERCERO.-** Quienes integramos la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, realizamos el estudio y análisis del contenido y alcances de la iniciativa y de las consideraciones en las que se motiva, de lo cual se desprende que a través de la misma se pretende establecer en la Ley de Protección Civil “*los mecanismos para la celebración de las ferias eventuales o kermés, donde se contemple la instalación y funcionamiento de juegos mecánicos, garantizando que con motivo de su desarrollo no se altere la seguridad de la población, ni se ponga en riesgo la integridad de sus participantes y asistentes”.*

En este sentido, la promovente observa que *“*[d]*entro de la Ley de Protección Civil de nuestro Estado, no se contempla la definición de kermés, fiestas populares que incluyen puestos de juegos de destreza, juegos mecánicos, puesto de comida y bebida, sorteos y números artísticos, que se utilizan más comúnmente en las escuelas o en las iglesias, para recaudar fondos a favor de distintas causas benéficas, artísticas o sociales, por lo que como primer punto está su inclusión en la norma, al ser ésta una actividad que implica un riesgo a las personas que asisten a ella”.*

Quienes dictaminamos compartimos la preocupación de la promovente por prevenir accidentes y situaciones de riesgo en eventos en donde habitualmente asisten menores de edad, y como los que lamentablemente se han presentado en nuestro país y nuestro Estado.

Así, tanto la omisión en la norma como las situaciones y percances que se han venido presentando alrededor de este tipo de fiestas en las que están presentes juegos mecánicos,hacen indispensable la emisión de medidas legislativas como la presente, que tiene el objeto de “*minimizar cualquier tipo de accidente, así como fomentar la participación activa de las autoridades y la sociedad para deslindar las responsabilidades que se generen”.*

En este sentido, se prevén las modificaciones que a continuación se precisan:

***Artículo 5.-*** *…*

*I a XXXVII. …*

***XXXVII BIS. Kermés:*** *Es una fiesta popular que habitualmente se desarrolla en escuelas y templos o edificios destinados al culto, en el que incluyen puestos de comida y bebida, sorteos o rifas, presentaciones artísticas, juegos de destreza y juegos mecánicos, cuyo objetivo es la recaudación de fondos a favor de distintas causas benéficas.*

***XXXVIII. a la LVII. …***

***Artículo 12.-*** *…*

***I. a XXXVI. …***

***XXXVII.*** *Emitir protocolos especiales de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos dentro de una kermés, independientemente que dichas instalaciones cuenten con el dictamen de seguridad y operación de otro giro, y en su caso, aplicar las medidas y/o sanciones, que considere adecuadas; y*

***XXXVIII.*** *Las demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones aplicables.*

***ARTÍCULO 26.- …***

***I a XV…***

***XVI.-*** *Cuando se trate de una kermés, deberán presentar previo a su realización, el protocolo especial de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos, ante las autoridades de protección civil que corresponda, para su revisión y en su caso aprobación, conforme a las atribuciones contempladas en los artículos 12 y 13 de esta Ley. El contenido del protocolo estará previsto en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se emitan*.

Como se observa, la propuesta incluye dentro de las facultades de la Subsecretaría de Protección Civil, la elaboración de protocolos de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos dentro de una feria eventual o kermés, independientemente de que dichas instalaciones cuenten con el dictamen de seguridad y operación de otro giro.

Una vez efectuado el estudio y análisis de la iniciativa, quienes dictaminamos estimamos conducente promover la emisión de lineamientos de seguridad para los juegos mecánicos fijos e itinerantes, que operen en el Estado, puesto que ello es necesario para garantizar la seguridad de las niñas y los niños coahuilenses.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.** Se adiciona la fracción XXXVII BIS al artículo 5; se adiciona la fracción XXXVII recorriéndose la ulterior del artículo 12 y se adiciona la fracción XVI recorriéndose la ulterior del artículo 26 de la Ley de Protección Civil de Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 5.-** …

**I.** a la **XXXVII. …**

**XXXVII BIS. Kermés:** Es una fiesta popular que habitualmente se desarrolla en escuelas y templos o edificios destinados al culto, en el que incluyen puestos de comida y bebida, sorteos o rifas, presentaciones artísticas, juegos de destreza y juegos mecánicos, cuyo objetivo es la recaudación de fondos a favor de distintas causas benéficas.

**XXXVIII.** a la **LVII. …**

**ARTÍCULO 12.-** …

**I.** a la **XXXVI. …**

**XXXVII.** Emitir protocolos especiales de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos dentro de una kermés, independientemente que dichas instalaciones cuenten con el dictamen de seguridad y operación de otro giro, y en su caso, aplicar las medidas y/o sanciones, que considere adecuadas; y

**XXXVIII.** Las demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO 26.- …**

**I.** a la **XV…**

**XVI.** Cuando se trate de una kermés, deberán presentar previo a su realización, el protocolo especial de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos, ante las autoridades de protección civil que corresponda, para su revisión y en su caso aprobación, conforme a las atribuciones contempladas en los artículos 12 y 13 de esta Ley. El contenido del protocolo estará previsto en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se emitan.

**XVII.** Las demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones aplicables.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Protección Civil en el Estado deberá emitir dentro de los ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, el protocolo especial de actuación en materia de prevención y atención de siniestros, ocasionados por la instalación y/o funcionamiento de juegos mecánicos.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por la Presidenta Municipal de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un bien inmueble identificado como fracción del lote número 11 de la manzana 15, con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Valle del Campestre” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Club de Leones de San Buenaventura A.C.”, con objeto de llevar a cabo la construcción de un Plantel Educativo de Nivel Preescolar.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 08 del mes de mayo del año 2019 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *” Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, según consta en acta de Cabildo, de fecha 14 de febrero de 2019, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Valle del Campestre” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Club de Leones de San Buenaventura A.C.”, con objeto de llevar a cabo la construcción de un Plantel Educativo de Nivel Preescolar.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción del lote número 11 de la manzana 15 con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en la calle Avena entre calles Manuel Acuña y Sabinas en el Fraccionamiento Valle del Campestre, de esa ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 30.42 metros y colinda con Prolongación de la calle Sabinas.

Al Sur: mide 30.50 metros y colinda con Prolongación de la calle Manuel Acuña.

Al Oriente: mide 108.50 metros y colinda con calle Avena.

Al Poniente: mide 109.80 metros y colinda con propiedad privada de la colonia 16 de abril.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de San Buenaventura, en las Oficinas de Registro Público de la ciudad de Monclova del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 67372, Libro 674, Sección I de fecha 13 de abril de 2011.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel preescolar. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de San Buenaventura, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, para poder cubrir la necesidad de llevar a los habitantes de esa colonia formación educativa con la construcción de un plantel educativo de nivel preescolar, el cual otorgara beneficio social a los habitantes de ese municipio.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Valle del Campestre” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada “Club de Leones de San Buenaventura A.C.”.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción del lote número 11 de la manzana 15 con una superficie de 3,256.20 M2., ubicado en la calle Avena entre calles Manuel Acuña y Sabinas en el Fraccionamiento Valle del Campestre, de esa ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 30.42 metros y colinda con Prolongación de la calle Sabinas.

Al Sur: mide 30.50 metros y colinda con Prolongación de la calle Manuel Acuña.

Al Oriente: mide 108.50 metros y colinda con calle Avena.

Al Poniente: mide 109.80 metros y colinda con propiedad privada de la colonia 16 de abril.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de San Buenaventura, en las Oficinas de Registro Público de la ciudad de Monclova del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 67372, Libro 674, Sección I de fecha 13 de abril de 2011.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel preescolar. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, una fracción de área vial de la Calzada Xochimilco con una superficie de 77.07 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. Daniel Garza González, con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 16 del mes de octubre del año 2019 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *” Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, según consta en acta de Cabildo, de fecha 14 de noviembre de 2019, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, una fracción de área vial de la Calzada Xochimilco con una superficie de 77.07 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. Daniel Garza González.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción de área vial de la Calzada Xochimilco de la colonia Carolinas, de esa ciudad, con una superficie de 77.07 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 13.13 metros y colinda con Lote 92, manzana “N” SMZ. XII.

Al Suroeste: mide 13.13 metros y colinda con Calzada Xochimilco.

Al Sureste: mide 5.87 metros y colinda con fracción de área vial de la Av. Xochimilco.

Al Noroeste: mide 5.87 metros y colinda con calle Pirámides del Sol.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, para dar certeza jurídica al predio y regularizar la tenencia de la tierra.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, una fracción de área vial de la Calzada Xochimilco con una superficie de 77.07 M2., ubicado en la colonia “Carolinas” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor del C. Daniel Garza González.

El inmueble antes mencionado se identifica como fracción de área vial de la Calzada Xochimilco de la colonia Carolinas, de esa ciudad, con una superficie de 77.07 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: mide 13.13 metros y colinda con Lote 92, manzana “N” SMZ. XII.

Al Suroeste: mide 13.13 metros y colinda con Calzada Xochimilco.

Al Sureste: mide 5.87 metros y colinda con fracción de área vial de la Av. Xochimilco.

Al Noroeste: mide 5.87 metros y colinda con calle Pirámides del Sol.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para celebrar un contrato de comodato, con vigencia hasta el año 2030, de un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.”, con objeto de llevar a cabo la instalación de un módulo de Servicios Amigables contemplado en el programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 6 del mes de noviembre de 2019, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 301, 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *”Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en certificación del acta de Cabildo de fecha 06 de septiembre de 2019, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, celebrar un contrato de comodato, con vigencia hasta el año 2030, de un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.”.

La superficie antes mencionada se identifica como un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 17.34 metros y colinda con área municipal.

Al Sur: mide 17.34 metros y colinda con calle 22.

Al Oriente: mide 30.00 metros y colinda con área municipal.

Al Poniente: mide 30.00 metros y colinda con área municipal.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, en las Oficinas del Registro Público de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 5535, Folio 2468, Libro 56, Sección I, de fecha 09 de agosto de 1993.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es con objeto de llevar a cabo la instalación de un módulo de Servicios Amigables contemplado en el programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindido el contrato de comodato y el predio será reintegrado al Municipio.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Saltillo, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia del contrato de comodato de acuerdo a la superficie en mención, logrando así la posibilidad de llevar a cabo los fines de dicho Organismo para ofrecer el programa anual de actividades para la Prevención de embarazo no planeado en los adolescentes, así como trabajar paralelamente con la estrategia estatal y nacional, esto debido al incremento de embarazos en adolescentes en el estado, el cual otorgará un beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para celebrar un contrato de comodato, con vigencia hasta el año 2030, de un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.”.

La superficie antes mencionada se identifica como un bien inmueble conocido como Centro Comunitario con una superficie de 520.16 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Ampliación Morelos” de esta ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 17.34 metros y colinda con área municipal.

Al Sur: mide 17.34 metros y colinda con calle 22.

Al Oriente: mide 30.00 metros y colinda con área municipal.

Al Poniente: mide 30.00 metros y colinda con área municipal.

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, en las Oficinas del Registro Público de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 5535, Folio 2468, Libro 56, Sección I, de fecha 09 de agosto de 1993.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es con objeto de llevar a cabo la instalación de un módulo de Servicios Amigables contemplado en el programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindido el contrato de comodato y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la celebración del contrato de comodato correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice el contrato de comodato que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de la operación realizada con el contrato de comodato, del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos e impuestos que se ocasionen con motivo de la formalización del Contrato de Comodato, así como de reubicación de servicios públicos serán tramitados y cubiertos por el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en el contrato correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento “Fundadores V Sector” de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para ser destinado a la Secretaría de Educación, con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel primaria.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 13 del mes de noviembre del año 2019 ese dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *” Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, según consta en certificación de acta de Cabildo, de fecha 24 de junio de 2019, aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento “Fundadores V Sector” de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para ser destinado a la Secretaría de Educación.

El inmueble antes mencionado se identifica como área municipal, con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento Fundadores V Sector, de esta ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 104.09 metros y colinda con calle Río Tula.

Al Sur: mide 90.56 metros y colinda con calle Río Usumacinta.

Al Este: mide 43.00 metros y colinda con calle Juan Navarro.

Al Oeste: mide 45.02 metros y colinda con propiedad privada.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Saltillo, en las Oficinas de Registro Público de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el Folio Real N° 633423. de fecha 02 de mayo de 2019.

**QUINTO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel primaria. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Saltillo, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, para poder dar cumplimiento a las funciones de dicha Secretaria, el cual pretenden beneficiar a toda la comunidad, brindando un espacio digno para otorgar educación nivel primaria a los residentes de esa colonia.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento “Fundadores V Sector” de esta ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para ser destinado a la Secretaría de Educación.

El inmueble antes mencionado se identifica como área municipal, con una superficie de 4,184.88 M2., ubicado en el fraccionamiento Fundadores V Sector, de esta ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 104.09 metros y colinda con calle Río Tula.

Al Sur: mide 90.56 metros y colinda con calle Río Usumacinta.

Al Este: mide 43.00 metros y colinda con calle Juan Navarro.

Al Oeste: mide 45.02 metros y colinda con propiedad privada.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Saltillo, en las Oficinas de Registro Público de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo el Folio Real N° 633423. de fecha 02 de mayo de 2019.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** La autorización de esta operación es exclusivamente con objeto de llevar a cabo la construcción de un plantel educativo de nivel primaria. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 302, 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 161.70 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor del C. Antolín Pozos Zaragoza, con objeto de que se destine a uso de casa habitación y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, el cual fue desincorporado con Decreto número 528 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 27 de septiembre de 2016.

**RESULTANDO**

**ÚNICO.** Que, en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso, de fecha 05 de febrero de 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en acta de Cabildo de fecha 14 de noviembre de 2019, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 161.70 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor del C. Antolín Pozos Zaragoza, el cual fue desincorporado con Decreto número 528 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 27 de septiembre de 2016.

La superficie antes mencionada se identifica como Lote 4 de la manzana C del Fraccionamiento Lucio Cabañas, con una superficie de 161.70 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 20.00 metros y colinda con Lote 2 y 3.

Al Sur: mide 20.00 metros y colinda con Lote 5.

Al Oriente: mide 8.05 metros y colinda con calle Ricardo Flores Magón.

Al Poniente: mide 8.12 metros y colinda con Lote 19.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en las Oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 1869, Libro 22-B, Folio 220, Sección I, de fecha 10 de noviembre de 1989 por adquisición. Y bajo la Partida 41367, Libro 414, Sección I, de fecha 27 de abril de 2005 por lotificación.

**TERCERO.** El objeto de esta operación es única y exclusivamente para que se destine a uso de casa habitación y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, logrando así garantizar certeza jurídica al predio y con esto se lleve a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 161.70 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor del C. Antolín Pozos Zaragoza, el cual fue desincorporado con Decreto número 528 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 27 de septiembre de 2016.

La superficie antes mencionada se identifica como Lote 4 de la manzana C del Fraccionamiento Lucio Cabañas, con una superficie de 161.70 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 20.00 metros y colinda con Lote 2 y 3.

Al Sur: mide 20.00 metros y colinda con Lote 5.

Al Oriente: mide 8.05 metros y colinda con calle Ricardo Flores Magón.

Al Poniente: mide 8.12 metros y colinda con Lote 19.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en las Oficinas del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 1869, Libro 22-B, Folio 220, Sección I, de fecha 10 de noviembre de 1989 por adquisición. Y bajo la Partida 41367, Libro 414, Sección I, de fecha 27 de abril de 2005 por lotificación.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El objeto de esta operación es única y exclusivamente para que se destine a uso de casa habitación y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Torreón, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado para que se autorice al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito, un inmueble con una superficie de 22,327.706 m2., de la Manzana 27 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano” en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a favor del Organismo Público Descentralizado, Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS.

**RESULTANDO**

**ÚNICO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 21 del mes de mayo del año 2020, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.**  Que estaComisión de Finanzas, con fundamento en los artículos 91, 116, 117 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.** Que la iniciativa se sustentó en la siguiente exposición de motivos.

**TERCERO.**  Uno de los objetivos primordiales de esta Administración es concertar la realización de planes, programas y acciones previstas en el **“PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2023”**, que dentro de su Eje Rector 4, referente al Desarrollo Social Incluyente y Participativo, se encuentra el tema de Salud y Seguridad Social, mediante el cual, se pretende contar con un sistema de salud eficiente que impulse la participación y corresponsabilidad de las y los Coahuilenses, basado en la prevención, equidad y calidad en la atención, teniendo como objetivo, lograr el acceso universal a los servicios de salud de calidad, a través de la mejora de la infraestructura física en salud, mediante acciones focalizadas en base a las necesidades reales de cada Región, optimizando todos los recursos disponibles, y que para lograrlo, se realizarán las gestiones necesarias ante las autoridades federales en materia de salud para el mejoramiento de la infraestructura médica, en beneficio de sus derechohabientes, con la ampliación y en su caso, construcción de nuevas unidades.

Por lo que solicito la autorización del poder legislativo para enajenar a título gratuito a favor del Organismo Público Descentralizado Instituto Mexicano del Seguro Social, el inmueble ubicado en la Manzana 27 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, ubicado en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para que se construya un Hospital General.

Que el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, es propietario y poseedor, con pleno dominio, del inmueble conocido como Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, del cual, se han segregado diversas áreas, siendo objeto del presente Decreto de Donación una extensión de 22,327.706 m² de la Manzana 27, ubicada en el municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, cuya titularidad se acredita con el Primer Testimonio de la Escritura Pública N° 35, de fecha 30 de septiembre de 1998, inscrita en la Oficina de Saltillo, Coahuila, del Registro Público del Estado bajo las Partidas 60968 y 5, Libros 610 y 1, Secciones I S.C. y IX S.C., de fechas 02 y 18 de febrero de 1999, respectivamente.

Conforme a la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila, le corresponde al Titular del Ejecutivo disponer de los bienes del Dominio Público y Privado del Estado.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que se han cubierto los requisitos necesarios para la enajenación de la superficie en mención, logrando así la posibilidad de coadyuvar con las instituciones para abatir el rezago médico, proporcionando los medios necesarios para satisfacer la demanda de servicio médico con la instalación de un Hospital, en este Municipio, el cual se otorgará seguridad y beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, las integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUE DESINCORPORE UN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 22,327.706 M² DE LA MANZANA 27 DEL FRACCIONAMIENTO “NUEVO CENTRO METROPOLITANO”, EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUE LO ENAJENE A TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que desincorpore, un bien inmueble con una superficie de **22,327.706 m²**,ubicado en la Manzana 27 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se autoriza al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que enajene a título gratuito, un bien inmueble con una superficie de **22,327.706 m²**,ubicado en la Manzana 27 del Fraccionamiento “Nuevo Centro Metropolitano”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a favor del Organismo Público Descentralizado, Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objeto de que lo destine a la construcción de un Hospital General y se identifica con el siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO DE CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | |
| **LADOS** | | **DISTANCIA** | **RUMBO** | **V** | **COORDENADAS** | |
| **EST** | **PV** | **X** | **Y** |
| **1** | **2** | **9.478** | **N 23°48’34” W** | **2** | **302903.018** | **2812762.229** |
| **2** | **3** | **262.979** | **S 67°37’44” W** | **3** | **302659.831** | **2812662.138** |
| **3** | **4** | **14.998** | **S 73°11’27” E** | **4** | **302674.188** | **2812657.801** |
| **4** | **5** | **45.04** | **S 40°23’37” E** | **5** | **302703.375** | **2812623.497** |
| **5** | **6** | **40.842** | **S 33°12’55” E** | **6** | **302725.748** | **2812589.328** |
| **6** | **7** | **230.765** | **N 67°37’44” E** | **7** | **302939.164** | **2812677.166** |
| **7** | **8** | **40.115** | **N 22°55’57” W** | **8** | **302923.533** | **2812714.11** |
| **8** | **1** | **42.832** | **N 22°55’57” W** | **1** | **302906.844** | **2812753.557** |
| **SUPERFICIE 22,327.706 M².** | | | | | | | |

Dicho inmueble, es propiedad del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, según consta en la Escritura Pública número 35, de fecha 30 de septiembre de 1998, inscrita en la Oficina del Registro Público de la Propiedad en la ciudad Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO TERCERO. -** Se faculta al Titular del Ejecutivo, para que por sí o por conducto de quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Finanzas, otorgue la Escritura correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO. -** El presente Decreto deberá insertarse íntegramente en el Título de Propiedad respectivo.

**ARTÍCULO QUINTO. -** Los trámites y gastos que se generen para el proceso de Escrituración y registro de la enajenación autorizada, correrán a cargo del Organismo donatario.

**ARTÍCULO SEXTO. -** El donatario tendrá un plazo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir de la publicación de este Decreto, para que formalice la escritura en la que deberá expresar en su clausulado esta condición, y concluya la construcción de la Unidad de Medicina Familiar objeto de la donación.

Transcurridos los 24 (veinticuatro) señalados en el párrafo anterior sin que la construcción haya concluido, el donatario podrá solicitar de forma justificada, por única vez, al Ejecutivo del Estado, la ampliación hasta por otros 12 (doce) meses, dando vista de dicha solicitud al Congreso del Estado para su consideración, discusión, y en su caso aprobación.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 17 de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga.  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Verónica Boreque Martínez González. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Igualdad y no Discriminación, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto por **la cual** **se reforma diverso contenido de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza**; cuya propuesta **confirmar la adopción de las medidas necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres a través de políticas integrales de protección de los derechos humanos de las mujeres**; suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, de manera conjunta con las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Y;

**RESULTANDO**

**PRIMERO.-** Que en Sesión celebrada por el Pleno el día 29 de noviembre del año 2019, se acordó turnar a la Comisión de Igualdad y no Discriminación la iniciativa de decreto con el objetivo ya descrito en el proemio de la presente”.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la mencionada iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen, en fecha 10 de diciembre del mismo año.

**TERCERO.-** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 103, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís y las Diputadas Blanca Eppen Canales, Diana Patricia González Soto y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, como integrantes de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, se basa en establecer en el ordenamiento  **en cita una mayor certeza y precisión en las medidas, acciones y políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos de mujeres y hombres en condiciones de igualdad; promoviendo para ello políticas integrales de derechos humanos para las mujeres.**

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**Exposición de Motivos**

Si bien los derechos humanos son atributos de la persona por su propia naturaleza, las acciones lacerantes y las continuas violaciones a los derechos de las mujeres, ha marcado la necesidad de otorga un carácter también específico al reconocimiento y a la protección de sus derechos.

Esto ha provocado una constante y amplia lucha de organizaciones de mujeres en todo el mundo, entre cuyos logros más importantes se cuenta el haber contribuido a la adopción de instrumentos internacionales e interamericanos que consagran y protegen sus derechos; y haber colocado la igualdad de género como un componente indispensable del trabajo sobre derechos humanos y democracia, en todas sus fases.

La comunidad internacional, en el seno de la Organización de Naciones Unidas de 1979, se adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés y adoptó, su Protocolo Facultativo en 1999, con el fin de fortalecer sus mecanismos de exigibilidad hacia los estados parte, así como asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades.

En el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, en 1994 se creó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”, la cual constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas.

En este sentido, también puede citarse como instrumentos que reconocen los principios de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres a lo largo de todo el siglo XX y durante los años de este siglo XXI, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 1919), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), los Convenios y Recomendaciones de la OIT (convenios N° 100, de 1951, y N° 111, de 1958) que se ocupan de la materia, así como diversas Directivas, Recomendaciones y Decisiones de la Organización de los Estados Americanos y otras muchas iniciativas de diverso signo.

A esta relación de normas, hay que sumar que en el año 2015, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas se transforma en el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 2030, donde todos los Estados parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidieron que ese objetivo debía tenerse en cuenta y hacerlo efectivo al trabajar cada uno de los objetivos.

América Latina y el Caribe han construido la Estrategia de Montevideo, que contribuye a hacer posible en nuestra región, que la perspectiva de género sea transversalizada en todos los objetivos de desarrollo sostenible, la propuesta de ambos documentos se enmarca en diversos instrumentos del derecho internacional y regional de los derechos humanos.

Latinoamérica es la región en la que, por primera vez en todo el mundo, se adoptaron leyes para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres en la representación parlamentaria, con la pionera ley de cupos en la Argentina en 1991.

En estos últimos veinte años, hemos sido testigos de la ampliación sostenida de derechos y libertades fundamentales de las mujeres; de la elaboración o modificación de constituciones que garantizan el principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres; de la adopción generalizada de leyes de igualdad y sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de todo tipo de violencia, incluyendo el feminicidio; de la institucionalización de mecanismos para el adelanto de las mujeres y de sistemas de coordinación interinstitucional para la formulación e implementación de políticas públicas sensibles al género en distintas esferas del desarrollo; de la creciente asignación de recursos públicos para promover la igualdad; y, de manera particular, hemos presenciado la adopción de medidas especiales de carácter temporal, también conocidas como acciones afirmativas o medidas de acción positiva, como las leyes de cuotas, para garantizar una mayor participación política de las mujeres, principalmente en los puestos de representación popular y de toma de decisiones.

En México, desde el 3 de diciembre de 1974 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma del artículo 4º constitucional, que estableció la igualdad entre mujeres y hombres, un punto de partida que permitió concretar instrumentos normativos fundamentales como la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2001 , que dio pie la creación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proequidad) , así como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de agosto del 2006 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2007 .

Esta evolución legislativa, la vemos reflejada en el reconocimiento que se plasma al considerar a la igualdad como un valor superior del ordenamiento jurídico, que obliga a los poderes públicos a otorgar un trato a las personas, acorde a su igual dignidad y que no puede ser diferenciado en atención a sus características subjetivas, salvo que tengan una relevancia objetiva y razonable que justifique esa diferencia, así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al determinar que: “no toda desigualdad de trato es discriminatoria, sino sólo aquella que, afectando a situaciones sustancialmente iguales desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de una justificación objetiva y razonable” .

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha señalado que las y los legisladores deben evitar, dentro del proceso legislativo, que una norma pueda crear una situación de discriminación en los hechos o en el derecho (de jure o de facto).

En este sentido el principio de igualdad entre mujeres y hombres, va tomando una impostergable importancia en el ámbito internacional y nacional, la cual queda puesta de relieve a partir de las normas que se van modificando y creando para incorporar esta igualdad entre el hombre y la mujer en sus contenidos, y es así como se va adoptando la llamada “perspectiva de género”.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, son ahora universalmente reconocidos como los objetivos fundamentales para lograr un desarrollo humano efectivo y sostenible, basado en la noción de la igualdad de oportunidades, esto significa, que la acción pública puede y debe garantizar que las personas tengan acceso a un conjunto equitativo de opciones de vida, sin importar las limitaciones individuales o del contexto, y con ello, la posibilidad de elegir con el mismo poder para dar forma a sus propias vidas y contribuir a sus comunidades.

Con este objetivo y con el fin de evitar actos de discriminación y garantizar el derecho a la igualdad, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 2006, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, esta tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Dicha norma, cuyos principios rectores son la equidad y la no discriminación, define una serie de medidas concretas para avanzar hacia la construcción de una sociedad igualitaria en nuestro país.

Uno de los elementos fundamentales de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es la creación de una política nacional que ha permitido coordinar las metas, objetivos y acciones de la administración pública federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, entes autónomos, así como de las entidades federativas y municipios, a fin de garantizar a las mujeres el pleno goce de derechos humanos.

En el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 31 de mayo de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual establece, que el hoy Instituto Coahuilense de las Mujeres tiene la atribución de velar por el progreso legislativo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a fin de armonizar la legislación local con los estándares internacionales en la materia.

Los avances en materia legislativa son fundamentales para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y para alcanzar la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, pero no garantizan la igualdad sustantiva, la igualdad de facto.

Es por ello, que en el Gobierno del Estado de Coahuila ha sido necesario generar políticas públicas integrales, que respondan a los marcos normativos permitiendo

con esto, el desarrollo de acciones encaminadas a lograr la igualdad en los hechos, teniendo como objetivo primordial reducir las disparidades de género en el acceso de las oportunidades y los servicios económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, así como también, reducir la violencia por motivos de género y mitigar sus efectos nocivos sobre las personas y las comunidades, empoderando económica y socialmente a las mujeres, adolescentes y niñas coahuilenses para aumentar sus capacidades, y promoviendo el ejercicio de los derechos que les permita determinar su plan de vida y potenciar la toma de decisiones.

El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, en el eje rector 4. Desarrollo Social Incluyente y Participativo, establece en su Objetivo 4.2 Inclusión e Igualdad de Oportunidades, el cual busca ampliar, mejorar y focalizar los programas de atención para asegurar la inclusión de todos los grupos de población y garantizar el disfrute de sus derechos sociales, comprometiéndose a reforzar las políticas públicas orientadas a lograr el avance de las mujeres en cuanto a su posicionamiento político, económico y social.

Así mismo, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, tiene su bases en este ámbito en el marco el Programa Especial de Igualdad de Género 2017-2023, el cual es el principal instrumento de la planeación estatal en la materia y el cual, contribuye a la generación de políticas públicas equitativas que garanticen el desarrollo pleno de los derechos y capacidades de todas las mujeres y niñas coahuilenses, por lo que en la línea 3.14 sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el Gobierno de Coahuila de Zaragoza deberá fortalecer la política pública en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En el Gobierno del Estado de Coahuila, estamos convencidos y convencidas que todos los esfuerzos deben ir encaminados a la consecución de la igualdad de forma real y efectiva, por lo que la propuesta conmina a todos las instituciones públicas responsables y a toda la sociedad, de forma general e individual, para que se impulse y consolide la igualdad, como principio fundamental en el desarrollo integral de cada persona, todo esto dentro del marco jurídico que nos determina como un estado social y democrático de derecho.

En este tenor, y con el objeto de continuar ejerciendo como fuerza catalizadora para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, contribuyendo a la visión de un mundo en el que todas las personas están igualmente preparadas para asegurar una vida mejor para sí mismos, sus familias y sus comunidades, presentamos esta iniciativa que tiene como objeto confirmar la adopción de las medidas necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres a través de políticas integrales de protección de los derechos humanos de las mujeres, dignos por tanto de la máxima protección.

El Gobierno del Estado, preocupado por lograr la materialización de la igualdad de todas las mujeres y niñas, promovió la realización de foros en las distintas regiones del Estado, en los que se trataron aquellos temas que representan una problemática para las mujeres en la vida cotidiana, así como las propuestas para eliminar esta brecha de desigualdad y fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres.

En estos foros se tuvo la participación destacada de representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que cuentan con la experiencia en temas de derechos de las mujeres, muchas de ellas por haber vivido circunstancias personales que las han llevado a luchar por ellas mismas y por otras mujeres que se encuentran en su misma situación, estas mujeres representan también, la voz de las mujeres que de alguna manera no han logrado superar los obstáculos que les impiden alcanzar el disfrute pleno de sus derechos humanos, así como también representantes de la administración pública del estado, la Fiscalía General del Estado, integrantes del Congreso del Estado de Coahuila y del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Es así que durante los foros que se realizaron en diferentes municipios del Estado, como Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Sabinas y Monclova, se presentaron las propuestas y se lograron los acuerdos que ayudaron a la elaboración de esta iniciativa.

La presente iniciativa reafirma el papel vinculatorio que las instituciones públicas tienen para garantizar el cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible para la igualdad de género, ampliando sus atribuciones en el sistema estatal para favorecer la institucionalización de las buenas prácticas de igualdad en la administración pública estatal y contribuir al adelanto y empoderamiento económico y social de las mujeres, a través de un sistema de información para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia.

Se incluye la paridad de género como principio rector y de reconocimiento constitucional que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política, al ser parte esencial de los derechos de las mujeres.

En el ámbito municipal, se incluyen diversas atribuciones necesarias, como lo son: Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres; Fomentar la participación social, política y ciudadana, tanto en las áreas urbanas como en las rurales; Fortalecer la formación, capacitación y certificación de las y los servidores públicos en materia de igualdad de género; Fomentar actividades reglamentarias con perspectiva de género; Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en cargos públicos; así como diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización y programas de desarrollo de acuerdo a la región.

Se establecen diversos objetivos y acciones de la política de igualdad entre hombres y mujeres en la vida económica, como instituir medidas que fortalezcan el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y de no discriminación respecto de las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, así como el derecho fundamental a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Se crea el capítulo sexto bis, en el que se incluye lo relativo a la igualdad en el acceso a la justicia y la seguridad pública que incluye los objetivos de la política estatal, que garanticen desde un enfoque diferencial, especializado, transformador, de igualdad y no discriminación el acceso a la justicia, así como promover el conocimiento e impulsar, el diseño de políticas públicas que favorezcan la igualdad de hombres y mujeres en este sentido, propiciando la formación en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos en los operadores de los sistemas de justicia, así como el favorecer la instalación de sistemas de información con indicadores desagregados por sexo.

Por último, se crea el capítulo sexto ter, en el que se establecen los objetivos y acciones para promover la igualdad en los pueblos y comunidades indígenas, teniendo como objetivo principal, garantizar los derechos de las mujeres que habitan estas comunidades en relación a su participación activa y directa en la toma de decisiones de la vida comunitaria, la protección de las mujeres titulares de los derechos sobre tenencia de la tierra que se encuentren en otros supuestos que pudieran generar discriminación, promover la igualdad en derechos y obligaciones para la mujer para elegir o ser elegida como autoridad o representante de su comunidad, conforme a sus propias formas de gobierno y garantizar el acceso a bienes y servicios en igualdad de oportunidades.

**TERCERO. -** Analizada la iniciativa, procedimos a realizar las siguientes consideraciones:

I.- La desigualdad entre mujeres y hombres es una realidad ancestral, que ha vulnerado un abanico muy amplio de prerrogativas y condiciones que deberían haber disfrutado las mujeres desde existen los gobiernos modernos y democráticos; incluso desde el nacimiento mismo de lo que conocemos como derechos humanos; sin embargo no fue ni es así; las mujeres han debido transitar un arduo, sufrido y doloroso camino de mil batallas para hacer realidad victorias como el derecho al voto, el derecho a acceder a cargos gubernamentales y la paridad en la conformación de los poderes públicos.

II.- Los pendientes en materia de igualdad son muchos, destacando la igualdad de salarios y prestaciones para trabajos iguales, y el acceso a oportunidades de desarrollo económico y profesional en las mismas condiciones que los hombres, por citar lo menos. Como lo señalan los promoventes, durante los últimos 20 años, hemos presenciado el desarrollo de nuevos tratados, leyes y reformas constitucionales nacionales para erradicar la violencia contra las mujeres, garantizar la paridad en los cargos de elección popular, implementar políticas públicas sensibles al género, y en los años más recientes, el diseño de presupuestos públicos con perspectiva de género.

III.- La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene por objeto, de acuerdo a su artículo 1, “regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.”

IV.- La Ley General antes mencionada, así como las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres en los estados y en la Ciudad de México, deben ser constantemente revisadas y actualizadas para que respondan en sus contenidos a las necesidades y demandas en la materia, y sean instrumentos que traduzcan los avances, logros y luchas en pro de la igualdad en una realidad.

Es así que las propuestas que los autores hacen en esta iniciativa son muy acertadas, destacando:

1. Se reafirma el papel vinculatorio que las instituciones públicas tienen para garantizar el cumplimiento de la transversalidad como instrumento imprescindible para la igualdad de género, ampliando sus atribuciones en el sistema estatal para favorecer la institucionalización de las buenas prácticas de igualdad en la administración pública estatal.
2. Se incorpora la paridad de género como principio rector y de reconocimiento constitucional para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a cargos públicos.
3. Se incorporan atribuciones municipales para diseñar, formular y promover campañas de concientización que conlleven al logro de los objetivos de la igualdad entre mujeres y hombres; así como fomentar la capacitación de los servidores públicos en la materia.
4. Se establecen objetivos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito económico y laboral.
5. Se crea el capítulo sexto bis, en el que se incluye lo relativo a la igualdad en el acceso a la justicia y la seguridad pública que incluye los objetivos de la política estatal, que garanticen desde un enfoque diferencial, especializado, transformador, de igualdad y no discriminación el acceso a la justicia.
6. Y se establecen los objetivos y acciones para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en las comunidades indígenas, para proteger el derecho de las mujeres de dichas comunidades a participar de manera activa en la toma de decisiones de la vida comunitaria, protegiendo, además, sus derechos sobre la tierra; garantizando a la vez que pueden acceder a los cargos de autoridad de sus comunidades en igualdad de circunstancias con respecto a los hombres.

Estas propuestas aportan un significativo avance modernizador al marco legislativo de nuestra entidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres; y nos permiten estar a la vanguardia con las demandas y necesidades de actualización de nuestra Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**CUARTO. -** Atentos a lo señalado, las integrantes de esta Comisión tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

**Proyecto de Decreto**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se reforma el párrafo tercero del artículo 1, el párrafo segundo del artículo 3, el artículo 4, las fracciones III y IV del artículo 18, las fracciones XII y XIII del artículo 20, las fracciones XII y XIII del artículo 29, las fracciones IX y X del artículo 30; la fracción IV del artículo 40, las fracciones XIII y XIV del artículo 41; se adiciona el párrafo tercero del artículo 3, la fracción XIX del artículo 8, las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 18, las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 20, las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 29, las fracciones XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del artículo 30; las fracciones XV y XVI del artículo 41, el Capítulo Sexto Bis, denominado De la Igualdad en el Acceso a la Justicia con los artículos 50 bis y 50 ter y el Capítulo Sexto Ter, denominado Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Pueblos y Comunidades Indígenas y Rurales, con los artículo 50 quáter y 50 quintus, del Título IV, de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 1. Naturaleza de la ley.**

…

…

Tiene como eje principal, que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana y homogéneos en derechos y deberes, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo, con respeto entre las personas y sus culturas.

**Artículo 3. Ámbito de aplicación.**

...

Las obligaciones establecidas en esta ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentren en territorio del Estado de Coahuila, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia y que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, creencia religiosa, opinión, preferencias sexuales o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja.

La aplicación y debida observancia de esta ley será en los ámbitos público y privado y corresponde a la Administración Pública Estatal y Municipal, de conformidad con sus respectivas competencias, debiendo tomar las medidas presupuestales y administrativas que permitan garantizar la igualdad entre mujeres y hombres sin discriminación de cualquier tipo.

**Artículo 4. Principios rectores.**

Son principios rectores de la presente ley, la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación, la igualdad de género, la perspectiva de género, la paridad de género, contenidos en los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables en la materia.

**Artículo 8. Glosario.**

…

**I. a la XVIII.** …

1. **Paridad de género.** Principio que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política, asegurando la participación igualitaria en la definición de candidaturas.

**Artículo 18. Atribuciones de los municipios.**

…

**I. a la II.** …

1. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo que promuevan los contenidos de la presente ley;
2. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales;
3. Fortalecer la prestación de los servicios públicos de la administración municipal, a través de la formación, capacitación y certificación de las y los servidores públicos en materia de igualdad de género;
4. Fomentar actividades reglamentarias con perspectiva de género;
5. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en cargos públicos; y
6. Diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta ley le confiere.

**Artículo 20. Lineamientos de la política estatal.**

…

**I. a la XI.** …

1. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres;
2. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud;
3. La transversalización de las políticas públicas;
4. Propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el uso y aprovechamiento de sus propiedades para su beneficio; y
5. Alcanzar la paridad de mujeres y hombres en el liderazgo y toma de decisiones.

**Artículo 29. Atribuciones del Instituto Coahuilense de las Mujeres en el sistema estatal.**

…

**I. a la XI.** …

1. Establecer medidas para la erradicación del acoso sexual;
2. Favorecer la institucionalización de las buenas prácticas de igualdad en la Administración Pública Estatal;
3. Contribuir al adelanto y empoderamiento económico y social de las mujeres;
4. Contar con un sistema de información para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia en el Estado para lo que podrá:
   1. Solicitar y recibir información sobre medidas y actividades que pongan en marcha los sectores público y privado en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
   2. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad;
   3. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad;
   4. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres; y
5. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del sistema estatal y las que determinen las disposiciones aplicables.

**Artículo 30. Integración del sistema estatal.**

…

**I.** **a la** **VIII.** …

**IX.** Dos representantes del sector empresarial;

**X.** Dos representantes de los medios de comunicación;

1. Titular de la Secretaría de Finanzas;
2. Titular de la Secretaría de Economía;
3. Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural;
4. Titular de la Secretaría de Medio Ambiente;
5. Titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad;
6. Titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;
7. Titular de la Secretaría de Cultura;
8. Titular de la Secretaría del Trabajo;
9. Titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial; y
10. Titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos.

**Artículo 40. Objetivos de la política de igualdad en la vida económica.**

…

**I. a la III.** …

1. Instituir medidas que fortalezcan el acceso de las mujeres al empleo y a la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y de no discriminación respecto de las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, así como el derecho fundamental a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

**Artículo 41. Acciones para la igualdad en la vida económica.**

…

**I. a la XII.** …

1. Difundir, previo consentimiento de las personas físicas o morales, los planes que apliquen estas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
2. Establecer estímulos y certificados de igualdad, los cuales se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. Para la expedición del certificado a empresas se observará lo siguiente:
3. La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación de género y establezca sanciones internas por su incumplimiento.
4. Que en la integración de la plantilla laboral, que ésta se componga de al menos el cuarenta por ciento de personas de un mismo sexo, y que el diez por ciento del total de la plantilla corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos.
5. La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, contemplando desde la publicación de sus vacantes hasta el ingreso del personal.
6. Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la desigualdad en el ámbito laboral;
7. Establecer medidas para asegurar la corresponsabilidad en el trabajo y en la vida familiar y personal de las mujeres y hombres; y
8. Fomentar el acceso al trabajo de las madres jefas de familia.

**CAPÍTULO SEXTO BIS**

**DE LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LA JUSTICIA**

**Y A LA SEGURIDAD PÚBLICA**

**Artículo 50 bis. Igualdad en el Acceso a la Justicia.**

Serán objetivos de la política estatal de Igualdad en materia de acceso a la justicia y seguridad pública:

1. Diseñar los lineamientos que garanticen desde un enfoque diferencial, especializado, transformador, de igualdad y no discriminación el acceso a la justicia;
2. Promover el conocimiento y aplicación de la legislación en materia de igualdad y violencia de género; e
3. Impulsar las reformas legislativas y el diseño de políticas públicas que favorezcan la igualdad;

**Artículo 50 ter. Igualdad en las Instituciones de Justicia.**

Para los efectos del artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

1. Asegurar que los operadores del sistema de procuración y administración de justicia en el Estado, cuenten con formación, capacitación y sensibilización en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos;
2. Garantizar el respeto de los derechos humanos de las partes; y
3. Favorecer la instalación de sistemas de información con indicadores desagregados por sexo.

**CAPÍTULO SEXTO TER**

**IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN**

**LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES**

**Artículo 50 quáter. Política de Igualdad de Pueblos y Comunidades Indígenas.**

Serán objetivos de la Política de Igualdad en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas:

1. Garantizar los derechos de las mujeres indígenas para garantizar su participación activa y directa en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria;
2. Proteger a las mujeres titulares de los derechos sobre tenencia de la tierra que sean mayores de 60 años, se encuentren en situación de embarazo o lactantes, tengan alguna discapacidad o incapacidad médica, para que no sean obligadas a realizar faenas en el campo, ni trabajos que excedan su capacidad física o pongan en riesgo su salud e integridad;
3. Eliminar cualquier práctica discriminatoria en contra de las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas que obstaculice la igualdad en el ejercicio de sus derechos y obligaciones para elegir o ser elegida como autoridad o representante, de acuerdo a sus propias formas de gobierno; y
4. Garantizar el acceso a bienes y servicios en igualdad de oportunidades.

**Artículo 50 quintus. Acciones para promover la igualdad en los pueblos y comunidades indígenas.**

Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, se promoverán las siguientes acciones:

1. Asegurar que las personas que integran los pueblos y comunidades indígenas gocen en igualdad, los derechos y oportunidades que la legislación les otorga;
2. Establecer acciones para transversalizar la perspectiva de género en los pueblos y comunidades indígenas, con acciones específicas que sean medibles y evaluables;
3. Vigilar que se garantice la participación e integración de mujeres y hombres en condiciones de igualdad en la toma de decisiones en el ámbito comunitario, de tal forma que contribuyan a lograr su realización y superación, así como el reconocimiento y respeto a su dignidad humana;
4. Establecer sinergias y estrategias de sororidad entre los grupos feministas y de mujeres organizadas;
5. Establecer metodologías y formas de trabajo participativas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;
6. Promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres para acceso, tenencia y herencia de la tierra;
7. Difundir información en medios de comunicación escritos, electrónicos, radio y televisión sobre igualdad de género en los pueblos y comunidades indígenas;
8. Desarrollar políticas, planes y programas para la prevención, atención y eliminación de la violencia en todas sus formas y en todos sus espacios, ejercida contra las mujeres indígenas; y
9. Garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con relación a los derechos reales de propiedad, así como de uso y disfrute de tierras y del derecho fundamental a la no discriminación en materia agraria.

T R A N S I T O R I O S

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad y no Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, a los 17 días del mes de junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIPUTADA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| BLANCA EPPEN CANALES |  |  |  |
| ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES |  |  |  |
| DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Igualdad y no Discriminación, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto por **la cual** **se modifica el contenido de la fracción X del artículo 8 y; así como el contenido de la fracción IV del artículo 9 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza**; cuya propuesta es  **ampliar los conceptos de violencia mediática, laboral y escolar**; planteada por el C. Erick Rodrigo Valdez Rangel ”. Y;

**RESULTANDO**

**PRIMERO.-**  Que en Sesión celebrada por el Pleno el día 23 de octubre del año 2019, se acordó turnar a la Comisión de Igualdad y no Discriminación la iniciativa de decreto con el objetivo ya descrito en el proemio de la presente”.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la mencionada iniciativa fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen

**TERCERO.-** Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 103, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, esta comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta del autor se basa en establecer en el ordenamiento  **en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza un concepto más amplio de violencia mediática, así como realizar un ajuste al concepto de violencia laboral y escolar.**

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las siguientes consideraciones:

**Exposición de Motivos**

La violencia de género es un problema generalizado que se encuentra en casi todas las sociedades, y que no es exclusiva de personas con cierto nivel social o de algunos países, adopta muchas formas y aparece en todos los ambientes: como en el trabajo, en el hogar, en la calle y en la comunidad en su conjunto.

Durante mucho tiempo, la violencia comunitaria se manifestaba al discriminar a mujeres y hombres de ciertas ocupaciones, carreras u oficios, por ejemplo, a muchas mujeres no se les permitía estudiar carreras consideradas “de hombres” y viceversa, o bien, como en el caso de la joven, a la que se le niega un servicio a menos que tenga el respaldo de un hombre porque se le considera una persona incapaz de asumir responsabilidades sólo por el hecho de ser mujer, por ello, el Estado a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se compromete a promover una educación donde las niñas y los niños aprendan que sus capacidades no tienen nada que ver con ser mujeres u hombres.

La violencia en los espacios comunitarios es un grave problema, las agresiones pueden ir desde insultos o expresiones ofensivas hasta violaciones, suelen ocurrir en calles, fiestas, cines, centros comerciales, etc…; Éstas son algunas de las múltiples manifestaciones de violencia contra la mujer por el sólo hecho de serlo.

El artículo 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia comunitaria como “los actos individuales o colectivos que trasgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, marginación o exclusión en el ámbito público”

Este problema, si bien, es complejo, puede tener solución, el artículo 17 de la ley antes mencionada, dice que el “Estado debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad a través de: La reeducación libre de estereotipos y la información alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria, el diseño de un sistema del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres, y el establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias”.

Es innegable que las mujeres viven bajo el riesgo diario de recibir agresiones físicas, psicológicas y sexuales, en forma que no tienen paralelo para los hombres: la violencia o la amenaza de violencia limita las opciones de que disponen las mujeres en todas las esferas de la vida, en el hogar, en la escuela, en el lugar de trabajo y en la mayoría de los espacios comunitarios.

Todas estas formas de violencia impiden la cabal participación de la mujer en la sociedad.

Históricamente, los espacios de las mujeres han sido equiparados con los privados, y los públicos o comunitarios prácticamente exclusivos para los hombres, en este sentido, hay una oposición simbólica entre la casa y el resto del mundo: lo femenino es la esfera opuesta a lo masculino, por tanto, la reciente o posible incorporación de ellas a este espacio simbólico de por si masculino, podría ser considerada como una subversión y, como consecuencia, detonar violencia.

La violencia que se ejerce en los espacios públicos sobre las mujeres adquiere expresiones similares a la de aquella que se comete puertas adentro, pues además e avasallar el cuerpo y la mente de la mujer, se inscribe y define en estereotipos de género, discriminación hacia las mujeres, cuenta con un alto grado de tolerancia social y se termina culpabilizando a las víctimas

Es necesario trabajar desde una perspectiva de género en todos los ámbitos de actuación, para convertir en visibles todas las formas de violencia, en general, y en particular aquellas que sufren las mujeres por el sólo hecho de serlo, pensando en cómo las afecta y, por lo tanto, también a toda la sociedad. La violencia contra las mujeres, en sus variantes física, emocional, económica o sexual puede tener lugar dentro de la familia o unidad doméstica, pero también en la comunidad, y puede ser perpetrada por cualquier persona.

En Coahuila, 24.7% de las mujeres mayores de 14 años han sido víctimas de agresión en espacios públicos; de las cuales, 90.1% sufrieron intimidación, 26.3 fueron abusadas sexualmente, y 9.2% fueron agredidas físicamente. También en lugares públicos la violencia infligida contra las mujeres puede llegar a alcanzar niveles extremos, tal es el caso de las violaciones y el sometimiento con el fin de obligarlas a ejercer la prostitución, la información derivada de la ENDIREH 2011 indica que en el país 357,121 mujeres fueron forzadas a prostituirse o declararon haber sido víctimas de este hecho; en la entidad, 5850 mujeres declararon haber sufrido estas agresiones.

Otro espacio público en donde se focaliza la violencia contra la mujer son los centros educativos, en el ámbito escolar la presencia de este fenómeno alcanza altas cuotas; esta modalidad de maltrato, sea entre los propios alumnos o de autoridades y maestros hacia los educandos, a fuerza de repetirse ha llegado a volverse común, y a tolerarse como parte de la socialización de niños y jóvenes, al convertirse en un ejercicio sistemático de agresión por parte de los más fuertes sobre los más débiles. La violencia escolar se refiere a las situaciones de discriminación, hostigamiento, acoso y abuso sexual, experimentadas en los planteles educativos a donde han asistido a lo largo de su vida las mujeres entrevistadas, así como en las interacciones y relaciones generadas en este ambiente.

En el espacio educativo la información de la encuesta revela que en ámbito nacional, de quienes padecieron esta situación en la escuela, 70.6% han vivido humillaciones, o han sido denigradas e ignoradas, y 43.7% sufrieron agresiones y daño físico, o propuestas de tipo sexual a cambio de calificaciones, o fueron objeto de contactos obscenos u obligadas a tener relaciones sexuales. En Coahuila de Zaragoza, 64.0% han sido humilladas, denigradas o ignoradas; y, 45.3% han padecido agresiones físicas o situaciones de carácter sexual.

Por otra parte, producto del estudio se sabe que en el país, 43.5% de las mujeres víctimas de violencia en la escuela en el ámbito nacional, señalan a los maestros o a otras autoridades del centro educativo como responsables, y en 65.1% de los casos son los propios compañeros quienes tienen actitudes hostiles hacia ellas.

En la entidad, 40.2 %de las mujeres declararon haber sufrido agresiones por parte de las autoridades escolares, y 68.8% fueron agredidas por compañeros. Entre las diversas formas de menoscabo a la dignidad de la mujer cometida en el país, la practicada de manera frecuente, y en la mayoría de las ocasiones, impunemente, se manifiesta en el contexto de las relaciones de trabajo, tanto en empresas privadas como en instituciones públicas.

La violencia laboral en sus diferentes formas tiene efectos graves sobre su salud física y mental, productividad y rendimiento. Esta modalidad de violencia generadora de condiciones negativas, consiste en actitudes y comportamientos claramente agresivos, hostiles, humillantes o discriminatorios hacia las mujeres insertas en el medio laboral; perpetrados por jefes inmediatos, superiores jerárquicos, compañeros de trabajo y, en ocasiones, hasta por personal que labora bajo el mando de ellas mismas, a este tipo de maltrato se suman también los de connotación sexual.

En esta dinámica laboral, es importante destacar cuando los agresores tienen una posición privilegiada de poder formal o autoridad, situación ventajosa utilizada para presionar a las mujeres, sobre todo a aquellas más vulnerables dada su calidad de jefas de familia, y que, por lo tanto, cargan con la responsabilidad de mantenerla, factor aprovechado por estos victimarios.

Los dos tipos de violencia laboral destacados en la encuesta son el acoso (relacionado con cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual, tanto física como verbal, no deseada por quien la sufre, y da por resultado un ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas y un condicionamiento de las oportunidades de empleo de la mujer perseguida), y la discriminación, que implica menores opciones, promociones y prestaciones; En el país, 22.6% de aquellas con 15 y más años de edad ocupadas, en algún momento durante el año anterior a la entrevista han sufrido violencia de un colega o de un superior en su ámbito laboral, y de ellas, 91.3% han sido víctimas de discriminación y 19.3% de acoso. Por su parte, en el estado, 26.5% de las mujeres ocupadas mayores de 14 años, padecieron violencia por parte de un superior o compañeros en su lugar de trabajo, en el año anterior a la entrevista; de las cuales, 94.6% sufrieron discriminación y 10.6% de acoso laboral.

Dichas reformas a los apartados Decimo (X) y Cuarto (IV), de los artículos 8° y 9°, respectivamente, de la “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Coahuila de Zaragoza” se basan en la demanda de las mujeres al sentirse objetizadas y utilizadas bajo un contexto sexual, al bailar y exhibirse al público como medio de publicidad para “atraer clientes”, “aumentar ganancias” e intentar “posicionarse en un mercado especifico.”

Estas reformas a los apartados antes mencionados, surgen con la finalidad de prohibir en el estado de Coahuila de Zaragoza, las llamadas “edecanes”. Esto sin duda va a generar, más allá de problemáticas, que estos establecimientos y/o negocios empiecen a invertir en publicidad de calidad, publicidad mejor y más creativa y más inversión en servicios de publicidad y marketing, además de buscar nuevas estrategias de ventas, detonando actividades económicas y académicas especificas en temas y estrategias de publicidad y marketing.

Por último, comparto esta reflexión con usted, dejando un poco el formalismo de la petición, siendo sinceros, cuantas personas se detienen en algún establecimiento y/o comercio a comprar “lo que sea” solo porque vio a alguna de estas mujeres bailando, con vestimentas que probablemente están siendo forzadas a utilizarlo, muchas veces sin protección a la radiación ultravioleta, etc…, la respuesta es ninguna, al contrario, se torna en un tipo de acoso y/u hostigamiento al conductores verlas y pitarles o gritarles cosas, o detenerse a solo tomarse una foto y ni siquiera adquirir nada en estos establecimientos y/o negocios.

**TERCERO. -** Analizada la iniciativa, se aprecia que las reformas que propone son las siguientes:

*Artículo 8. Los tipos de violencia contra las mujeres son:*

*I…, II…, III…, IV…, V…, VI…, VII…, VIII…, IX…*

*X. Violencia Mediática o Publicitaria. Aquella difusión, publicación de imágenes estereotipadas, mensajes a través de anuncios publicitarios* ***y/o el uso de mujeres para publicitar y animar comercios, negocios y/o servicios que estén*** *en exhibición al público en general, que de manera directa o indirectamente promueven la explotación de la mujer en imágenes y/o acciones sexistas que injurien, difamen, discriminen, deshonren, humillen y atenten contra la dignidad humana, legitimando la desigualdad de trato o construya parámetros sociales generadores de violencia contra la mujer.*

*2.- Artículo 9. Las modalidades de violencia son:*

*I…, II…, III…*

*IV. Violencia en el ámbito laboral y escolar: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, escolar o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad* ***y/o dignidad****. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso sexual, hostigamiento sexual, acoso y hostigamiento laboral* ***y/o el uso de mujeres para publicitar y animar comercios, negocios y/o servicios.***

La propuesta contiene algunos problemas de técnica legislativa, de concordancia de contenidos, y de armonía con los contenidos actuales (vigentes) de ambas fracciones a reformar; estas son nuestras consideraciones:

Las columnas siguientes comparan los contenidos de la ley vigente y la reforma propuesta. No leeremos el contenido de las columnas, ya que al final se detalla el problema:

LAMVLVC Vigente Propuesta

|  |  |
| --- | --- |
| Artículo 8. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  X. Violencia Mediática o Publicitaria: Aquella difusión o publicación de imágenes estereotipadas y mensajes a través de anuncios publicitarios en exhibición al público en general, que de manera directa o indirectamente promueven la explotación de la mujer en imágenes sexistas que injurien, difamen, discriminen, deshonren, humillen y atenten contra la dignidad humana, legitimando la desigualdad de trato o construya parámetros sociales generadores de violencia contra la mujer. | Artículo 8. Los tipos de violencia contra las mujeres son:  I…, II…, III…, IV…, V…, VI…, VII…, VIII…, IX…  X. Violencia Mediática o Publicitaria. Aquella difusión, publicación de imágenes estereotipadas, mensajes a través de anuncios publicitarios **y/o el uso de mujeres para publicitar y animar comercios, negocios y/o servicios que estén** en exhibición al público en general, que de manera directa o indirectamente promueven la explotación de la mujer en imágenes  **y/o acciones sexistas** que injurien, difamen, discriminen, deshonren, humillen y atenten contra la dignidad humana, legitimando la desigualdad de trato o construya parámetros sociales generadores de violencia contra la mujer. |

El autor basa su reforma en insertar las frases “y/o el uso de mujeres para publicitar y animar comercios, negocios o servicios.” “Y/o acciones sexistas”.

Si analizamos la redacción actual de esta fracción, la reforma propuesta es totalmente innecesaria, ya que se contempla la fracción vigente “anuncios publicitarios en exhibición al público en general, que de manera directa o indirectamente promueven la explotación de la mujer en imágenes sexistas”

Así como el respeto a su dignidad. Por lo que la adición es redundante e innecesaria, y el contenido actual colma en sí mismo la pretensión del autor de la iniciativa.

La fracción IV del artículo 9, refiere:

*IV. Violencia en el ámbito laboral y escolar: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, escolar o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.*

*Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el acoso laboral o el hostigamiento laboral….*

Mientras que el promovente plantea la siguiente reforma:

*Artículo 9. Las modalidades de violencia son:*

*I…, II…, III…*

*IV. Violencia en el ámbito laboral y escolar: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, escolar o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad* ***y/o dignidad.*** *Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso sexual, hostigamiento sexual, acoso y hostigamiento laboral* ***y/o el uso de mujeres para publicitar y animar comercios, negocios y/o servicios.***

Esta fracción se refiere a la violencia que comete un patrón o compañero de trabajo hacia la víctima, que de “origen” ya trabaja ahí. Ya es empleada o trabajadora. Y sufre acciones que atentan contra su dignidad.

En cambio, el planteamiento de usar las mujeres para promover negocios, se refiere en todo caso, atendiendo a la temporalidad, a contratos que aún no se realizan, y donde la potencial víctima tiene todo el derecho y libertad de decidir si lo hace o no. Es decir, hablamos de supuestos que aún no se cumplen, pero que pueden realizarse en el futuro. Mientras que la fracción IV se refiere más bien a relaciones laborales estables y continúas.

Y el mismo caso es para la violencia escolar, presupone una relación previa, actual y de trato reiterado en el tiempo entre el docente o compañero de escuela y la víctima.

Por técnica legislativa, al realizar reformas a una ley son diversos los aspectos que se debe considerar: constitucionalidad, viabilidad, necesidad de la reforma propuesta, etc. Uno de los aspectos más importantes es que no se trate de una adición redundante, que no haga más que reiterar una situación que ya está regulada en la ley.

Otro aspecto es el respeto a la estructura del ordenamiento, es decir, respetar sus componentes y partes que la integran, para que las adiciones o reformas se realicen en los capítulos y artículos correctos.

Es así que la iniciativa analizada presenta los problemas que ya hemos detallado oportunamente.

**CUARTO. -** Atentos a lo señalado, las integrantes de esta Comisión tenemos a bien presentar al Pleno para su aprobación el presente:

Dictamen

Único: Se considera inviable y, por ende, no aprobada la iniciativa analizada en el presente dictamen.

Así lo acuerdan las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad y no Discriminación de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, a los 17 días del mes de Junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIPUTADA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| BLANCA EPPEN CANALES |  |  |  |
| ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES |  |  |  |
| DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Segundo Párrafo del Artículo 107, el Primer Párrafo del Artículo 111 y se adicionan los Artículos 113 BIS 4 y 133 BIS 5 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 18 de marzo del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la Diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, mediante la cual propone reformar el Segundo Párrafo del Artículo 107, el Primer Párrafo del Artículo 111 y se adicionan los Artículos 113 BIS 4 y 133 BIS 5 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir en las comisiones permanentes y obligatorias, la de Salud Pública y la de Seguridad Pública y Tránsito.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto en la que se propone reformar el Segundo Párrafo del Artículo 107, el Primer Párrafo del Artículo 111 y se adicionan los Artículos 113 BIS 4 y 133 BIS 5 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de incluir en las comisiones permanentes y obligatorias, la de Salud Pública y la de Seguridad Pública y Tránsito, se basa en la siguiente

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, al hablar que el estado adoptará para su régimen interior, una forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, marca la pauta para que a su vez en su división territorial y su organización política y administrativa, rija el régimen de un municipio libre, conforme a las bases que estable dicho artículo, que de manera breve enuncio a continuación:*

1. *En la fracción primera se menciona que el Ayuntamiento es quien gobierna el municipio y los representantes son elegidos mediante elecciones populares directas;*
2. *La fracción segunda menciona que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio conforme a la ley, establece las bases para que sea el municipio con aprobación de ese Congreso, el que emita la normatividad que será su marco legal para desarrollar sus funciones;*
3. *En la fracción tercera se enumeran las funciones y los servicios públicos que le corresponden;*
4. *La fracción cuarta reitera la administración libre de la hacienda y su composición;*
5. *En la fracción quinta se menciona las facultades con que cuenta el municipio en relación con el desarrollo urbano municipal;*
6. *La fracción sexta trata del desarrollo de los centros urbanos que involucran a varios municipios de distintas entidades federativas;*
7. *La fracción séptima cita que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal, y por último la*
8. *Fracción octava menciona el principio de representación proporcional en las elecciones de los ayuntamientos y alude el artículo 123 de este mismo ordenamientos, sobre el cual se fundamenta la relación de trabajo entre los municipios y sus trabajadores.*

*Bajo este marco general, nuestra Constitución Política del Estado integra el Título Sexto, el Municipio Libre, el cual cuenta con 2 Capítulos, Primero Bases Fundamentales, Segundo Gobierno Municipal, este segundo cuenta con 3 secciones: La división territorial y El Ayuntamiento y el Consejo Municipal, y La Competencia Municipal; esta última sección se subdivide en 3 apartados: Bases generales, La Hacienda Municipal y Las Funciones y Servicios Municipales.*

*En este orden de normas, se integra a este marco normativo de referencia, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que tiene como objeto normar el gobierno, la estructura orgánica y el funcionamiento de los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, a partir de lo dispuesto en los dos ordenamientos antes citados.*

*Mi exposición de motivos inicia de esta manera para conceptualizar el objeto de nuestra iniciativa, ya que es trascendental recordarlo y tenerlo presente para apoyar el análisis del proyecto de decreto aquí expongo.*

*Como vemos al municipio libre, por mandato de ley, se le respeta su libertad y autonomía para gobernar en su circunscripción territorial, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, administran su hacienda pública, eligen a sus autoridades, emiten su normatividad en congruencia con las esferas jurídicas a nivel federal y estatal.*

*Asimismo la administración pública municipal, tiende a satisfacer las necesidades de su comunidad, a través de la prestación de bienes y servicios, garantizando con ello los derechos de su población.*

*El éxito de una buena administración municipal, se logra gracias a la credibilidad en las autoridades municipales, a la participación de la sociedad en la planeación y ejecución de obras, así como en la calidad en la prestación de los servicios públicos.*

*Quien lleva a cabo la administración municipal en los municipios es el ayuntamiento; “Ayuntamiento” según su significado etimológico que viene del latín “adiunc-tum” supino de adjungere, juntar, es la unión de dos o más individuos para formar un grupo, el Ayuntamiento se integra por tres actores fundamentales, un presidente municipal, los regidores y el síndico, estos dos últimos variaran en su número dependiendo de los habitantes del municipio y de lo que determine la ley, cuidando en todo momento el cumplimiento al principio de paridad.*

*El ayuntamiento por lo tanto, es un órgano colegiado, que forman el Pleno del Honorable Cabildo, el cual sesiona periódicamente, en estas sesiones se delibera sobre las propuestas que presenta el Presidente Municipal, los regidores y/o los síndicos, en relación con temas trascendentes que impactaran directamente a la comunidad.*

*Si bien es cierto, que la gran mayoría de los asuntos presentados en las sesiones del Cabildo son resultas en ese mismo acto, existen alguno asuntos que por su naturaleza son turnados a las comisiones para su análisis.*

*Ahora bien, omito mencionar por razones obvias las facultades con que cuenta el Presidente Municipal y de los síndicos, ya que nuestro tema principal en esta iniciativa es la función que desarrollan los regidores dentro de la administración pública municipal a través de las comisiones de las cuales forman parte.*

*Los regidores son una figura que permite un mayor acercamiento del Gobierno Municipal con la comunidad, donde se abren importantes espacios para que los ciudadanos acuden a presentar su problemática, y con ello los regidores de manera individual o a través de una comisión presenten una estrategia, un plan de trabajo o un programa para dar solución a la problemática planteada, convirtiéndose así en la voz de nuestra comunidad.*

*Con fundamento en el artículo 34 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los regidores son considerados miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio, es decir como persona individual no está dotado con facultades decisorias dentro del Gobierno Municipal, pero cuando es miembro del Cabildo, su voz y voto cuenta para tomar decisiones trascendentales.*

*Dicho precepto legal establece que en lo individual son consejeros y auxiliares del presidente municipal y deben cumplir con las comisiones que le asigne el Ayuntamiento.*

*Sumando a lo anterior, una más de las maneras activas de los regidores de participar dentro del Gobierno Municipal es a través de las comisiones, que tienen como objetivo conformar grupos de trabajo que puedan analizar más a fondo los temas fundamentales para el Gobierno Municipal, y que una vez dictaminados por sus miembros se llevan ante el Pleno H. Cabildo para su consideración y aprobación, si así se amerita.*

*Dentro del artículo 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se establecen como de forzosa conformación las siguientes comisiones:*

1. *De Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública;*
2. *De Planeación, Urbanismo y Obras Públicas;*
3. *De Transparencia y Acceso a la Información;*
4. *De Reglamentación, y*
5. *De Igualdad de Género.*

*Por lo que dilucidamos con todo lo anteriormente expuesto que es vital incluir dentro de estas comisiones, que son de forzosa conformación, la Comisión de Salud Pública y a la Comisión de Seguridad y Tránsito, así mismo pretendemos que se les dé carácter de permanentes y obligatorias, como se menciona en el artículo 111 del mismo ordenamiento legal citado.*

*La comisión de Salud Pública, habla por sí sola, siendo un tema fundamental para el mejor desarrollo de una comunidad.*

*Esta comisión tendría dentro de sus objetivos, mejorar las condiciones de salud de la comunidad, por ejemplo a través de la colaboración con las autoridades federales y estatales, así como con el área administrativa municipal encargada del tema salud, desarrollando políticas públicas favorables para la población; impulsar las campañas para la prevención y tratamiento de adicciones; supervisar la prestación de los servicios médicos para los trabajadores del ayuntamiento; y vigilar la protección y el trato digno que deben tener en los centros antirrábicos hacía los animales, entre otras obligaciones y atribuciones que le confiera el Ayuntamiento.*

*En cuanto a la formación de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, esta tendría entre otros objetivos, los siguientes: contribuir al mejor desempeño de las acciones que en este tema realiza la dependencia municipal competente; elaborar propuestas de programas o planes que generen y preserven el orden público y la paz social, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía; proponer estrategias para la máxima difusión de las campañas de prevención de delitos, así como la difusión de los operativos de tránsito y prevención de accidentes viales; emitir opinión en relación con los programas de seguridad pública y tránsito y proponer acciones de prevención de la violencia con perspectiva de género para la elaboración de políticas públicas municipales.*

*En ambos casos, los objetivos son solo enunciativos, no limitativos, lo que queremos es marcar la pauta y las bases para que Ayuntamiento, una vez que vaya observando la utilidad de estas Comisiones, dentro de su marco normativo interior, puedan ampliar las funciones y atribuciones de dichas comisiones.*

*Tanto la salud, como la seguridad pública, son temas de gran relevancias dentro de la administración pública, construyamos municipios más saludables y más seguros, involucrando de manera más activa a los ediles que forman parte de nuestros Ayuntamientos.”*

**TERCERO.-** En efecto el Ayuntamiento ejerce su trabajo gubernativo mediante las Comisiones las cuales son órganos de atención, dictamen y representación del ayuntamiento en las diferentes ramas del gobierno y la administración municipal. En algunas legislaciones de nuestro país se definen como órganos que se integran por Ediles con el propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como de las dependencias.

Algunas de sus características son que no cuentan con facultades ejecutivas, son órganos de seguimiento, vigilancia y control, actúan como instancias de dictamen de diversos asuntos, representan el interés del ayuntamiento en una materia, garantizan que las decisiones del cabildo se cumplan, tienen atribuciones para la propuesta y resolución de asuntos, tanto el Presidente Municipal, como los síndicos y regidores pueden formar parte de más de una comisión

Las comisiones tienen por objeto distribuir entre los regidores la vigilancia del buen funcionamiento de la administración municipal. Y en efecto dentro de las comisiones de forzosa conformación se deben de encontrar las relativas a Seguridad Pública y la de Salud, ya que coincidimos con la promovente en que son temas de suma importancia que deben encontrarse inmersos dentro de las Comisiones Municipales. Reconocemos que en muchos de los Ayuntamientos estas comisiones ya se encuentran operando, sin embargo, consideramos necesario que se encuentren contemplado en el Código Municipal para que esto permee en todas las administraciones municipales.

Es por ello que la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, está de acuerdo con la Iniciativa planteada toda vez que nos queda claro que actualmente la sociedad requiere de Gobiernos Municipales fuertes en lo institucional, y efectivos en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias sociales que traen los nuevos tiempos. Requiere que se realicen mejores prácticas, que se busquen nuevas formas de gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para la solución de los problemas del entorno municipal.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**UNICO.-** Se reforma el segundo párrafo del artículo 107, primer párrafo del artículo 111 y se adiciona los artículos 113 bis 4 y 113 bis 5, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 107.** …

Las comisiones a las que refieren los artículos 112, 113, 113 BIS, 113 BIS-1, 113 BIS-2, 113 BIS-4 y 113 BIS-5 serán de forzosa conformación por los ayuntamientos, justificándose mediante la importancia que dichas ramas requieren. De igual manera, será libertad de cada ayuntamiento la integración de comisiones bajo libre criterio.

**ARTÍCULO 111.** Las comisiones podrán ser individuales o colegiadas y permanentes o transitorias, y su materia y funciones serán establecidas en el Reglamento Interior o por acuerdo del Ayuntamiento, siempre de conformidad con las necesidades municipales, teniendo el carácter de permanentes y obligatorias las de hacienda, patrimonio y cuenta pública; la de planeación, urbanismo y obras públicas; la de transparencia y acceso a la información, la de reglamentación, la de Igualdad de Género; la de Ciencia, Tecnología e Innovación; la de Salud Pública y la de Seguridad Pública y Tránsito.

...

**ARTÍCULO 113 BIS-4.** La Comisión de Salud Pública tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

1. Colaborar con las autoridades del sector salud a nivel federal y estatal, de manera conjunta con la unidad administrativa municipal de salud, con el objetivo de desarrollar las políticas públicas en materia de salud;
2. Contribuir al mejor desempeño de las funciones de la unidad administrativa municipal del sector salud, proponiendo, analizando y dictaminando el plan de acción propuesto para mejorar la salud pública en el municipio;
3. Plantear estrategias para impulsar las campañas para la prevención y tratamiento de las adicciones;
4. Supervisión de la prestación de los servicios médicos para los trabajadores del ayuntamiento;
5. Vigilar la protección y el trato digno que deben tener en los centros antirrábicos hacía los animales, y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura cívica de protección, responsabilidad y trato digno a los animales, y
6. Las demás que le señale el Ayuntamiento, este código u otras disposiciones aplicables.

**ARTÍCULO 113 BIS-5.** La Comisión de Seguridad Pública y Tránsito tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

1. Contribuir al mejor desempeño de las acciones que llevan a cabo las dependencias municipales con funciones de seguridad pública y tránsito;
2. Elaborar propuestas de programas o planes que generen y preserven el orden público y la paz social, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía;
3. Proponer estrategias para la máxima difusión de las campañas de prevención de delitos, así como la difusión de los operativos de tránsito y prevención de accidentes viales;
4. Emitir opinión en relación con los programas de seguridad pública y tránsito;
5. Proponer acciones de prevención de la violencia con perspectiva de género para la elaboración de políticas públicas municipales,
6. Las demás que le señale el Ayuntamiento, este código u otras disposiciones aplicables.

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN(SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el contenido de los párrafos primero y tercero del artículo 208 del Código Municipal para Estado de Coahuila de Zaragoza.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 6 de mayo de año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por la **Diputada Blanca Eppen Canales**,conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, mediante la cual propone reformar el primer y tercer párrafo del Artículo 208 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación a Contralor Municipal, como primer frente para prevenir la corrupción en la administración municipal, debe tener un papel más claro y preciso, y que sea parte de su deber informar al cabildo de manera precisa sobre las adquisiciones realizadas por el municipio.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto en la que se propone reformar el primer y tercer párrafo del Artículo 208 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación al Contralor Municipal, como primer frente para prevenir la corrupción en la administración municipal, debe tener un papel más claro y preciso, y que sea parte de su deber informar al cabildo de manera precisa sobre las adquisiciones realizadas por el municipio, se basa en la siguiente

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“En fecha 04 de febrero del presente año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, una reforma al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, producto de una iniciativa de nuestro compañero diputado, Gerardo Abraham Aguado Gómez, que se refiere a establecer atribuciones concretas para los contralores municipales en diversos temas; concretamente, las adecuaciones fueron las siguientes:*

*ARTÍCULO 132…*

*El titular de la contraloría municipal deberá rendir un informe cada cuatro meses de su trabajo al Cabildo, conforme a sus atribuciones.*

*ARTÍCULO 133. Son facultades y obligaciones del Contralor Municipal:*

*…*

*XV. Verificar que los Servidores Públicos Municipales cumplan con su obligación de presentar la declaración de situación patrimonial; así como el manifiesto de no conflicto de intereses de los proveedores y contratistas del municipio, verificando su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes en los términos de las leyes aplicables.*

*Vigilando también que los servidores públicos municipales con cargos directivos, así como los integrantes del Cabildo no intervengan o participen indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tengan interés personal, familiar o de negocios.*

*Estas adiciones representaron un gran avance en el combate a la corrupción, gracias al apoyo de todas y todos los diputados de esta legislatura, quienes también han realizado muy importantes aportaciones por medio de reformas a diversos ordenamientos en materia de prevención y combate a la corrupción gubernamental.*

*Al revisar las atribuciones del Contralor Municipal, plasmadas en el artículo 133, podemos apreciar que solo en dos fracciones se hace alusión clara al régimen de adquisiciones del municipio, y son las siguientes:*

*X. Intervenir, para efectos de verificación y control, en los contratos que emanen de la celebración de convocatorias y licitaciones, y vigilar el cumplimiento de dichos contratos.*

*XI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la Administración Pública Municipal.*

*Derivado de este contenido, deseamos concatenar el mismo con lo dispuesto en el artículo 208 de este ordenamiento (Código Municipal):*

*ARTÍCULO 208. En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.*

*Las adquisiciones que realice el municipio o sus dependencias, deberán de sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.*

*La Contraloría Interna Municipal, verificará que las adquisiciones públicas se realicen conforme a los ordenamientos legales estatales y municipales.*

*El primer párrafo del artículo 208, contiene una definición de adquisiciones públicas que no es del todo completa y concordante con la que está plasmada en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual refiere lo siguiente:*

*Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:*

*I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;*

*II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración directa, o los que suministren las Dependencias y Entidades de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras;*

*III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en inmuebles de las Dependencias y Entidades, cuando su precio sea superior al de su instalación;*

*IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido;*

*V. La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de bienes muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia;*

*VI. La contratación de arrendamiento financiero de bienes muebles;*

*VII. La prestación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios personales bajo el régimen de honorarios, y*

*VIII. En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago para las Dependencias y Entidades, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma específica por otras disposiciones legales.*

*Por otra parte, consideramos que el Contralor Municipal, como primer frente para prevenir la corrupción en la administración municipal, debe tener un papel más claro y preciso, similar al que se le otorgó en materia de combate al nepotismo, en la reforma del 04 de febrero del presente año, y que sea parte de su deber informar al cabildo de manera precisa sobre las adquisiciones realizadas por el municipio.”*

**TERCERO.-** Nos queda claro que una de las principales funciones de la Contraloría Municipal como órgano de control interno es encargarse de vigilar y supervisar los recursos Municipales, Estatales y Federales así como supervisar la aplicación de los mismos conforme al presupuesto aprobado, con apego a programas, normatividad y leyes aplicables al Municipio.

Cabe señalar que es un órgano que debe planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las Dependencias y Entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos

La Contraloría es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los bienes del patrimonio municipal, así como también del desempeño y actuación de los servidores públicos; el cual debe siempre promover con estricto apego al marco jurídico, acciones preventivas que permitan maximizar los recursos a fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios y efectividad del Gobierno Municipal.

Ante ello quienes aquí dictaminamos apoyamos y coincidimos con la Iniciativa planteada, buscando siempre que se asegure la transparencia y la honestidad de los Municipios en la conducción del patrimonio y el ejercicio de la administración pública, que permita maximizar los recursos a favor de la ciudadanía, para lograr una mayor credibilidad y confianza de ellos.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, la siguiente:

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma el contenido de los párrafos primero y tercero del artículo 208 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 208**. En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán **todas las señaladas en el artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza**, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

…

La Contraloría Interna Municipal, verificará que las adquisiciones públicas se realicen conforme a los ordenamientos legales estatales y municipales, **dando cuenta de forma detallada al cabildo sobre estas operaciones, dentro del informe previsto en el segundo párrafo del artículo 132 de este Código.**

**T R A N S I T O R I O S**

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado; y

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN(SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, “Con objeto de que se exhorte atentamente a los 38 Ayuntamientos de la Entidad a que, a través de sus respectivos organismos, operadores, implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, los cuales resultarían inadmisibles, ante el inicio de la temporada de calor, pero, sobre todo, en vista de la actual pandemia por coronavirus” planteado por el Diputado Benito Ramírez Rosas.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 23 de abril de año en curso, se trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza” “con objeto de que se exhorte atentamente a los 38 ayuntamientos de la Entidad a que, a través de sus respetivos organismos operadores, implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, los cuales resultarían inadmisibles, ante al inicio de la temporada de calor, pero, sobre todo, en vista de la actual pandemia por coronavirus, así mismo, se envíe un enérgico extrañamiento a la administración del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, por la suspensión, de hasta cuatro días de la semana antepasada, del abasto de agua potable a decenas de colonias de la ciudad, en plena cuarentena por coronavirus, y se le exhorte, por las razones expuestas, a que en lo consecutivo el organismo operador Aguas de Saltillo (Agsal) se abstenga de volver a interrumpir el suministro del vital”, y en virtud de que no fue considerada como de urgente y obvia resolución se dispuso que fuera turnada a esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a lo anterior, la Oficialía Mayor de este H. Congreso turnó a esta Comisión, la Proposición con Punto de Acuerdo a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que en la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado José Benito Ramírez Rosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, señala que existe la urgente necesidad de impulsar las acciones que estén al alcance para contrarrestar en especial en Coahuila, la pandemia COVID-19.

Señala que además de seguir las indicaciones del sector salud relacionadas con el uso de cubre bocas y la sana distancia, consiste en el lavado de manos, sin embargo, se desprende del documento en cuestión que, según diversas versiones periodísticas, desde el pasado miércoles 18 de marzo, y hasta por cuatro días, a miles de saltillenses se les privó del suministro de agua potable, lo que afectó a por lo menos 37 colonias.

Se desprende de la Proposición con Punto de Acuerdo que expertos en la materia han señalado que la solución al crónico problema de escasez y desabasto de agua potable no se resuelve con la sobreexplotación de los mantos acuíferos o abriendo nuevos pozos, pues gran parte de estos se encuentran prácticamente colapsados, sino invirtiendo también en la reparación y/o reposición de la red de distribución, cosa que Aguas de Saltillo se niega a realizar.

Se invoca en el documento en cuestión que el párrafo sexto del Artículo 4º, comprendido en el Capítulo de los Derechos Humanos y Garantías, establece, de manera muy clara, lo siguiente: *Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines*.

En virtud de ello, solicita a esta soberanía se exhorte a los 38 municipios para que por medio de los organismos operadores, implementen estrategias para prevenir los problemas de escases y desabasto de agua, así como enviar un enérgico extrañamiento al Alcalde de Saltillo por la suspensión del abasto de agua potable a decenas de colonias de la ciudad.

**TERCERO.-** Una vez analizado las solicitudes a que hace referencia en la Proposición con Punto de Acuerdo, los integrantes esta Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas coincidimos en la necesidad de que los organismos operadores de agua de los municipios, implementen estrategias para prevenir eventuales problemas de escasez o desabasto de agua potable, pues es indispensable para la vida diaria, mayormente en temporada de calor y obviamente por la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia.

Sin embargo, y en relación a hacer un “enérgico extrañamiento” a la administración del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, por la suspensión de agua potable que hubo en el mes de marzo, debemos precisar que Aguas de Saltillo es una empresa paramunicipal, que cuenta con inversión pública y privada, en la que el Alcalde no decide la reparación, mantenimiento, suspensión o restablecimiento del servicio de agua potable.

En la página oficial de Aguas de Saltillo, así como en sus diversas redes sociales y en diversos medios de comunicación, podemos constatar que se informó puntualmente y advirtió con días de anticipación a los usuarios, que dicha empresa estaría realizado trabajos de mejora y mantenimiento a diversas redes de agua, por lo que se vería afectado temporalmente el servicio de agua en varias colonias y se dio a conocer, el tipo de trabajo que estarían realizando, así como el tiempo estimado de las mismas y las colonias que verían interrumpido el servicio y cuando estaría solucionado el problema, todo ello con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad.

De igual manera se informó sobre los trabajos de interconexión en la línea de conducción sur, que estarían realizando como parte de las acciones para la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas.

Con dichas obras realizadas (dos interconexiones de tubería) se avisó oportunamente que se suspendería el servicio de abastecimiento de agua potable desde el 17 de marzo y se estaría normalizando durante el día 18 de marzo, siendo las colonias afectadas las ubicadas al sur, poniente y centro de la ciudad de Saltillo.

Si bien es cierto, este tipo de suspensiones, ocasionan inconvenientes en la población, muy entendible, debemos comprender que son obras necesarias para posteriormente poder garantizar el abasto de agua potable en la ciudad.

Además, previamente se informa a la población a efecto de que realicen acopio de agua suficiente en sus tinacos, aljibes o cualquier otro método que utilicen para resguardar agua para los días en los que se realizan las obras, por parte de la empresa Agsal.

Asimismo, se informó que no fue posible reestablecer el agua en los sectores sur, poniente y centro, hasta el 19 de marzo, debido a que una válvula colapsó por lo que tuvieron que realizar los trabajos de reparación.

Entendemos que por la situación que estamos viviendo a causa de la pandemia, la desesperación sea mayor por contar con este vital líquido, sin embargo, no se pueden realizar obras de reparación, mantenimiento, interconexión, sin suspender el suministro de agua, es materialmente imposible, y quizá el postergar esas reparaciones, provocaría mayores problemas a la posterioridad.

En ese sentido, esta Comisión estima que la Proposición con Punto de Acuerdo puede aprobarse en un sentido positivo, en lo relacionado a exhortar a los Ayuntamientos de nuestro Estado que a través de sus organismos operadores implementen estrategias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, durante este periodo de cuarentena a causa del coronavirus. En cuanto al extrañamiento al alcalde de Saltillo, ya hemos hecho referencia que no es un asunto de su competencia, en todo caso se haría un exhorto a la empresa Agsal, para que al igual que los demás organismos operadores de agua, eviten en la medida de lo posible suspender el suministro de agua potable, durante este periodo de cuarentena a causa del coronavirus.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO. -** Se exhorta atentamente a los 38 Ayuntamientos de la Entidad a que, a través de sus respectivos organismos operadores implementen las estrategias necesarias para prevenir eventuales problemas de escases y desabasto de agua potable, ante el inicio de la temporada de calor y sobre todo por la actual pandemia por coronavirus, que amenaza con prolongarse, resultando necesario contar de manera permanente con agua, elemento indispensable dentro de las medidas para prevenir dicho virus.

**SEGUNDO. -** Se exhorta a Aguas de Saltillo (Agsal) evite en la medida de lo posible suspender el suministro de agua potable, durante este periodo de cuarentena a causa del coronavirus.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA**  **(COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN(SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA** |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 225, segundo párrafo; y el artículo 229, fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 17 del mes de junio del presente año, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 18 de junio del año 2020 se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 225, segundo párrafo; y el artículo 229, fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 225, segundo párrafo; y el artículo 229, fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*Uno de los principios básicos de las normas jurídicas es que son determinantes o susceptibles de determinación, es decir, que el texto contenido en ellas debe de ser perfectamente entendible y que, si en su caso, requiere de alguna interpretación, esta deberá ser realizada por el juzgador para determinar su alcance y contenido.*

*Así, la configuración del andamiaje jurídico de cualquier país, particularmente en México, debe de encontrarse perfectamente armonizado, definidos sus alcances y su contenido, así como las sanciones por la contravención mediante alguna acción o el incumplimiento por medio de la omisión de alguna norma jurídica.*

*Los principios de la norma jurídica son elementos permanentes, pues independientemente de si se trata de normas civiles, administrativas, laborales, penales, fiscales o cualquier otra, los referidos principios son inherentes a cualquier norma jurídica.*

*Sin embargo, cada rama o especialidad del derecho implica diversos principios que le son propios, mismos que pueden o no ser aplicables a otras materias, pero que no son permanentes en todo el derecho; entre ellos, se encuentra el derecho penal.*

*El derecho penal implica una serie de principios características particulares, y su importancia radica en que es considerado la última razón para imponer sanciones por aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes para la sociedad. En ese sentido, Sergio García Ramírez explica que “no hay duda sobre la misión que incumbe al derecho penal, con su arsenal de medios aplicativos, en un Estado de derecho, comprometido con el respeto al ser humano y la conducción democrática del poder público. El régimen penal es el último recurso del control social.”[[1]](#footnote-1)*

*Dicho lo anterior y en el entendido de que el derecho penal constituye la herramienta del Estado de Derecho para imponer, como último recurso, las sanciones para el control social, el derecho penal contiene ciertos principios que lo diferencian del resto de las ramas del derecho de forma bastante clara.*

*Al respecto, Gissela Morales Nuño, considera la existencia de, por lo menos, los siguientes principios: legalidad, tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, prescripción, non bis in ídem, in dubio pro reo, defensa, oportunidad, igualdad, entre otros[[2]](#footnote-2). En ese sentido, el principio de legalidad y el principio de tipicidad se encuentran unidos indisolublemente por el principio de taxatividad.*

1. ***Principio de legalidad (nullum crimen nulla poena sine lege)***

*El principio de legalidad es fundamental en cualquier rama del derecho, sin embargo, en el derecho penal cobra especial sentido pues tiene implicaciones sobre la libertad de las personas, las sanciones suelen ser más severas que en otras materias del derecho y, por ende, debe entenderse que, por principio de legalidad, no puede imponerse una pena derivada de una conducta si no existe una ley previa.*

*Así, Moisés Moreno Hernández considera que, “conforme al principio de legalidad, plasmado en el artículo 14 constitucional, el Estado en ningún caso podrá imponer pena o medida de seguridad alguna si no es por la realización de una conducta que previamente ha sido descrita en la ley como delito o sin que la sanción esté igualmente establecida en la ley, expresada en la fórmula latina nullum crimen, nulla poena sine lege.[[3]](#footnote-3)*

1. ***Principio de tipicidad***

*El principio de tipicidad es característico del derecho penal y no es encontrado en otras ramas del derecho, ni mucho menos****,*** *en el caso de que así fuera, tendría la misma relevancia que en esta rama del derecho. El principio de tipicidad tiene una estrecha relación con el de taxatividad, pero no puede decirse que son propiamente lo mismo, pues tienen distintas implicaciones.*

*Para Moisés Moreno Hernández, el principio de tipicidad, al igual que el principio de legalidad que tiene la función de describir el la materia de regulación de las normas penales, este, “para poder hablar de pena, uno de sus primeros y necesarios presupuestos lo es precisamente la tipicidad, o sea, la concretización de los elementos del tipo penal, que exige que el órgano encargado de aplicar la ley, acredite la existencia de tales elementos típicos y considere únicamente como delito al hecho que reúna dichos elementos señalados en la descripción legal y así poder concretizar la amenaza penal”.[[4]](#footnote-4)*

*Ahora bien, derivado del principio de tipicidad y el de legalidad, el principio de taxatividad en la ley penal se consagra en la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, al establecer en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que “en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata”.*

*Así mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, establecido que “el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma.”[[5]](#footnote-5)*

*La taxatividad es el principio que determina la exacta aplicación de la ley penal, lo que otorga en último sentido, la garantía de seguridad y certeza jurídica para el gobernado.*

*En ese contexto, en cumplimiento al referido principio y a fin de dar certeza jurídica de las penas a las que son susceptibles las personas que incurren en la comisión de un tipo penal, se propone modificar el artículo 225, párrafo segundo del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece que se aplicará de siete a doce años y multa al que cometa la conducta típica contenida en dicha disposición, a efecto de que se precise expresamente que dicha sanción corresponde a prisión, es decir, de siete a doce años de prisión.*

*En ese mismo sentido, se modifica la fracción II del artículo 229 establece para que, en la parte que se señala “…se impondrá de siete a doce años y multa…”, se precise de manera expresa que los años que se contemplan como sanción son como pena de prisión.*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de la iniciativa de reforma así como de las consideraciones en las que encuentra sustento la misma, verificando que el proyecto normativo tiene por objeto dotar de una adecuada certeza jurídica los delitos establecidos por los artículos 225 y 229 del Código Penal del Estado.

Dentro de la presente exposición de motivos se manifiesta que “*uno de los principios básicos de las normas jurídicas es que son determinantes o susceptibles de determinación, es decir, que el texto contenido en ellas debe de ser perfectamente entendible y que, si en su caso, requiere de alguna interpretación, esta deberá ser realizada por el juzgador para determinar su alcance y contenido”.*

De ello también se desprende que “*los principios de la norma jurídica son elementos permanentes, pues independientemente de si se trata de normas civiles, administrativas, laborales, penales, fiscales o cualquier otra, los referidos principios son inherentes a cualquier norma jurídica”.*

Los principios básicos del derecho penal buscan no solo consagrar penas como castigos a aquellos que violen las normas jurídicas, sino que de estas penas establecidas se obtengan fines preventivos y se consideren como la última razón para imponer una sanción, es por ello que respecto a este ámbito penal deben existir principios especialísimos como lo son el principio de legalidad, de tipicidad, de proporcionalidad, entre otros.

Así, resulta indispensable aludir que especialmente en materia penal al legislador le es exigible la emisión de normas claras precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito y los supuestos de justificación de una conducta típica y antijurídica.

Para determinar la tipicidad de una conducta el legislador debe tener en cuenta como derivación del principio de legalidad el de taxatividad o exigencia de un contenido concreto u unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma.

Tales exigencias para la emisión de normas penales tienen su base en el respeto al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal y el derecho a la seguridad jurídica, mismos que constituyen prerrogativas fundamentales de las personas que rigen las relaciones entre el actuar del Estado en su posición de garante de derechos y los particulares.

Estas garantías de seguridad y certeza de la norma, dan pauta a que el aplicador de la ley pueda ejercer su labor sin arbitrariedad alguna, y además, a que el destinatario de la norma tenga certeza sobre a quien se dirige la disposición, qué conductas efectivamente son consideradas antijurídicas, las consecuencias de las mismas, y los supuestos de exclusión del delito, tal y como se plasma en la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 1a./J. 54/2014 (10a).

***PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.***

*El artículo* [*14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*](javascript:AbrirModal(1))*, consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia* ***penal*** *al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo* ***penal****, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del* ***principio*** *de* ***legalidad****, al de* ***taxatividad*** *o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de* ***taxatividad*** *supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el* ***principio*** *de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo* ***penal****, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del* ***principio*** *de* ***taxatividad*** *es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El* ***principio*** *de* ***taxatividad*** *no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas.*

De igual manera resulta conveniente hacer alusión a la siguiente Tesis Aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

***EXACTA APLICACION DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTIA DE SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIEN A LA LEY MISMA.***

*La interpretación del* [*tercer párrafo del artículo 14 constitucional*](javascript:AbrirModal(1))*, que prevé como* ***garantía*** *la* ***exacta******aplicación*** *de la* ***ley*** *en* ***materia******penal****, no se circunscribe a los meros actos de* ***aplicación****, sino que* ***abarca*** *también a la propia* ***ley*** *que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su* ***aplicación*** *o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la* ***ley*** *que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la* ***garantía*** *indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República.*

Es por todo lo anteriormente expuesto que quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos con el iniciador en el hecho de que el contenido sancionador del ordenamiento penal debe expresarse de modo preciso, claro y unívoco; a fin de dar cumplimiento con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14.

Por ello, resulta indispensable reformar los artículos 225 párrafo segundo y 229 fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de dar cumplimiento al principio de taxatividad, así como otorgar una adecuada certeza jurídica de las penas establecidas dentro de dichas disposiciones, precisando expresamente que las sanciones corresponden de siete a doce años de prisión y multa y de siete a doce años de prisióny multa, respectivamente.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma el artículo 225, segundo párrafo y el artículo 229, fracción II del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 225 …**

…

Se aplicará de siete a doce años de prisióny multa, a quien ilícitamente introduzca en forma total o parcial cualquier elemento o instrumento distinto al pene, por la vía anal o vaginal a persona que por cualquier causa no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o posibilidad de resistir la conducta delictuosa.

…

**Artículo 229 …**

**I.** …

**II.** …

Se considera violación impropia y se impondrá de siete a doce años de prisióny multa, a quien ilícitamente introduzca en forma total o parcial cualquier elemento o instrumento distinto al pene, por la vía anal o vaginal a persona menor de quince años de edad.

**III.** …

…

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 23 de junio de 2020.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se propone reformar los artículos 17, tercer párrafo, 22 primero y segundo párrafos, 60 primer párrafo, 94 Apartado B en sus fracciones I, VIII y XVIII, 111 segundo párrafo, 112 fracciones IV y VII y 118, y derogar los artículos 4, segundo párrafo, y 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; y

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 04 de diciembre del 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, la iniciativa planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; para reformar los artículos 17, tercer párrafo, 22 primero y segundo párrafos, 60 primer párrafo, 94 Apartado B en sus fracciones I, VIII y XVIII, 111 segundo párrafo, 112 fracciones IV y VII y 118, y derogar los artículos 4, segundo párrafo, y 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, la Oficialía Mayor del Congreso turnó a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública es competente para emitir el presente dictamen, conforme a los artículos 94, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; mediante la cual propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa en la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*“El su artículo 67, fracción XXXIV, la Constitución Política del Estado de Coahuila señala que es atribución del Poder Legislativo, es decir, de este Congreso, “Revisar… en los términos previstos en las leyes, la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, Municipios, organismos públicos autónomos” así como de cualquier entidad o persona “que gestione recursos públicos, con objeto de conocer sus resultados y comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos, según corresponda, y a su presupuesto de egresos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas”.*

*La responsabilidad pues de “revisar las cuentas públicas” corresponde esencial y originariamente al Congreso, como expresamente lo vuelve a señalar el párrafo tercero de la citada fracción XXXIV del artículo 67 constitucional, al indicar que el “Congreso concluirá la* ***revisión*** *de las cuentas públicas” en la fecha que ahí se señala.*

*Es cierto, como lo dice el precepto invocado, que el Congreso no revisa directamente las cuentas públicas sino “por conducto de la entidad de fiscalización superior denominada Auditoría Superior del Estado”, pero la responsabilidad política, histórica, ética y constitucional corresponde enteramente al Poder Legislativo y no a esta entidad llamada Auditoría Superior del Estado, la cual es un órgano técnico de la Legislatura ciertamente dotado de “autonomía técnica, presupuestaria y de gestión” pero todo ello* ***“en los términos que disponga la ley”****, según claramente reza el artículo 74-A de la Constitución local de Coahuila.*

*El vigente ordenamiento en la materia, denominado Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de septiembre de 2017, entró en vigor el día siguiente al de su publicación y vino a abrogar la ley del mismo nombre, cuya duración fue de menos de tres años, toda vez que fue publicada en el Periódico Oficial el 11 de noviembre de 2014.*

*Pues bien, la vigente ley prácticamente margina al Congreso del Estado y a la Comisión legislativa que es jurídicamente el enlace entre éste y la Auditoría Superior del Estado, de aspectos fundamentales como son, entre otros, la elaboración y aprobación del programa anual de auditorías y visitas, la modificación de éste en el curso del ejercicio y la expedición de su Reglamento Interno, proceso en el cual –apenas parece creíble- el Congreso tiene un papel absolutamente pasivo.*

*A la luz de lo que ha ocurrido –cuando menos en los últimos tres lustros- en las finanzas públicas del estado en sus diversas dependencias, que han sido objeto de monumental saqueo sin que nada, absolutamente nada suceda; y lo que es peor, quienes son responsables y beneficiarios de tan gigantesco daño al patrimonio público estatal se pasean tan campantes, como si nada, protegidos por una total y absoluta impunidad, ante la manifiesta ineficacia del órgano encargado de realizar las auditorías, señalar irregularidades y determinar las responsabilidades que correspondan, no puede menos que llegarse a la conclusión de que las cosas no deben continuar como hasta ahora, so pena de que como legisladores no sólo toleremos lo que sucede sino que nos convirtamos en cómplices del actual estado de cosas.*

*Por lo expuesto, se hace absolutamente necesario incorporar a la Ley de la materia los cambios necesarios tanto para que el Congreso del Estado ejerza de mejor manera sus atribuciones constitucionales relativas a la presentación y revisión de las cuentas públicas, como para terminar con el mal manejo de la gestión financiera estatal de los últimos lustros, ”*

**TERCERO.-** Una vez analizada la iniciativa planteada, por parte de los integrantes de esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, la mayoría consideramos que no es procedente aprobarla en los términos que plantea el promovente, por varias razones que abordaremos en este dictamen.

En cuanto a la propuesta que hace el Diputado García Villa de derogar el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que se establece que la interpretación administrativa de este ordenamiento legal estará a cargo de la Auditoría Superior del Estado, consideramos que no es conveniente derogar dicha facultad ya que habría un vacío legal al no establecerse a quien le corresponde la interpretación de dicha ley, la cual es necesaria incluso para las entidades sujetas a fiscalización y para el mejor desempeño de sus funciones de fiscalización.

Además, conforme al artículo 2 de dicha ley, ese órgano superior de fiscalización goza de autonomía técnica, presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones y por ende tiene la capacidad de interpretar esta ley.

Respecto a la propuesta planteada por el promovente de la iniciativa, referente a reformar el tercer párrafo del artículo 17 de la referida Ley de Rendición de Cuentas, para que el *Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones*, sea sometido a la revisión y autorización de la Comisión, consideramos que esto atenta contra la autonomía de gestión en el ejercicio de sus funciones, que la Constitución y la propia ley le otorgan a la Auditoría Superior.

En la legislación federal sobre la materia, en el artículo 17 párrafo segundo de la fracción I, al igual que en el Estado, únicamente se da a conocer a la Comisión el PAAVI y la razón es precisamente el respeto irrestricto a la autonomía del órgano fiscalizador.

Es por ello que no estamos de acuerdo con dicha propuesta, pues esto implica quitarle autonomía de gestión a la Auditoría Superior del Estado y esto sería un retroceso legal.

En ese mismo tenor, consideramos que no es procedente reformar los párrafos primero y segundo del artículo 22, propuestos en la iniciativa objeto de este dictamen, respecto a que la Auditoría Superior del Estado someta a la revisión y autorización de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública el *Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones*, o PAAVI como se le conoce por sus siglas, pues sería quitarle la autonomía de gestión que este órgano superior de fiscalización posee por mandato constitucional; la Comisión no debe autorizar el PAAVI, sería volver al sistema anterior, no sería objetivo y parcial, pues los intereses políticos pueden interferir al momento de autorizar qué auditorías practicar, en cambio la función de la Auditoría Superior es técnica y debe abocarse estrictamente a lo que la ley le establece.

El texto actual de nuestra legislación estatal coincide con el de la federación, sobre el particular, ya que de acuerdo con el artículo 81 fracción IV Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Comisión le corresponde solo analizar el programa anual de fiscalización y evaluar su cumplimiento, en ningún momento lo autoriza, hay un respeto al principio de autonomía, que no debemos atentar.

En cuanto a la propuesta de reformar el primer párrafo del artículo 60 y derogar el segundo párrafo, a efecto de que sea la propia Auditoría Superior del Estado la que determine la procedencia de las revisiones por situaciones excepcionales y no la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, consideramos que esta es una de las principales funciones de esta comisión legislativa que le concede la ley, por lo que consideramos necesario conservar esa facultad.

Cabe señalar que las revisiones por situaciones excepcionales es una excepción a la regla general, de que se revisa una vez que la Auditoría Superior recibe la cuenta pública de las entidades sujetas a fiscalización, es decir, posterior al cierre del ejercicio anterior, de ahí que la excepción sea, adelantar la revisión por causas excepcionales, es decir, durante el ejercicio en curso. En este caso, es la Comisión quien determina en base a un análisis si reúne los requisitos que establece la propia ley.

La Auditoría Superior como quiera va a revisar, ya sea durante el ejercicio, cuando proceda alguna razón excepcional, o posteriormente una vez que reciba la cuenta pública de la entidad del ejercicio anterior.

Quienes aquí dictaminamos, consideramos que es importante conservar dicha facultad de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, pues evalúa si procede o no anticipar una revisión por una causa excepcional y la propia ley determina los parámetros y requisitos.

Respecto a la propuesta de reformar las fracciones I, VIII y XVIII del Apartado B del artículo 94 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a las facultades indelegables del Auditor Superior del Estado, con el propósito de que el Reglamento Interior, el *Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones*, y el Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior del Estado que le corresponde expedir, aprobar y emitir respectivamente al Auditor Superior, sea sometido a la autorización de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y se publiquen no solo en la página de internet del propio órgano superior de fiscalización, sino en el Periódico Oficial del Estado, insistimos quienes aquí dictaminamos, en que la Auditoría Superior del Estado tiene autonomía de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, por lo que no podemos ir en contra de esa autonomía, pues esto sería un retroceso.

Respecto a la publicación de los documentos mencionados en dichas disposiciones, cabe señalar que esta se efectúa tanto en el Periódico Oficial como en la propia página oficial de la Auditoría Superior del Estado.

De igual forma, como lo hemos señalado con antelación, también en la legislación federal, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, según el artículo 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al igual que nuestra legislación vigente, aprueba el programa anual y envía a la Comisión para su conocimiento. Esto es así por respeto a su autonomía.

Con ello queremos insistir que tanto nuestra legislación estatal, como la federal y como la del resto de las entidades federativas, acogen el principio de autonomía de sus órganos de fiscalización, por lo que no debemos retroceder al viejo esquema.

Sobre la propuesta de derogar el artículo 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece que el Auditor Superior no podrá ser reconvenido por las opiniones emitidas en el ejercicio de su función, ni por el sentido de sus informes, observaciones, recomendaciones, acciones o resoluciones, consideramos que debe continuar vigente en la ley, toda vez que este artículo fortalece la autonomía de las funciones que el titular de la Auditoría Superior del Estado realiza, esto no lo exime del cumplimiento de sus responsabilidades como servidor público. Consideramos importante que permanezca este artículo, pues su opinión avala su trabajo contable y la imparcialidad del mismo.

En cuanto a la propuesta de reformar el segundo párrafo del artículo 111 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, a efecto de cambiar el termino de podrá evaluar por el de evaluará cuando se refiere al desempeño en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, a través de mecanismos e indicadores que resulten aplicables, consideramos que es innecesario pues es una facultad potes que ya tiene la Comisión, y que la puede hacer valer en cualquier momento.

Tocante a la propuesta de reformar las fracciones IV, VII y XVIII recorriéndose la fracción actual a la siguiente, del artículo 112 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, para otorgarle a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, de autorizar el *Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones*, el Reglamento Interior y el Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior del Estado, en vez de solo recibir y conocer dichos documentos, reiteramos que no podemos ir en contra de la autonomía de gestión que por orden constitucional y legal tiene la Auditoría Superior del Estado, no podemos retroceder al viejo esquema de la extinta Contaduría Mayor de Hacienda.

El propósito de la ASE fue ser un órgano técnico autónomo, pues lo que se pretende es que la revisión de las cuentas públicas sea objetiva e imparcial y para ello se requiere de autonomía en su funcionamiento, presupuesto y estructura, por lo que no coincidimos con lo propuesto por el promovente.

Finalmente, respecto a la propuesta de reformar el artículo 118 de la referida Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado, a efecto de establecer que las peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias que reciba la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública reciba de la sociedad civil, una vez que procedan serán turnadas a la Auditoría Superior del Estado para su inclusión en el PAAVI, al respecto consideramos que la redacción de esta propuesta es ambigua, pues no es claro en qué casos la Comisión determinaría su procedería, lo que deja en estado de indefensión a los particulares que presenten su solicitud, además la Comisión no posee facultades para decidir sobre lo que se incluye y no en el PAAVI, esa facultad le corresponde a la ASE por la autonomía de sus funciones, como lo hemos venido reiterando.

Por todas estas razones, la mayoría de los integrantes de esta Comisión, consideramos improcedente la iniciativa aquí analizada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora emitimos el siguiente:

**ACUERDO**

**ÚNICO.-** Por las razones expuestas en el Considerando Tercero del presente Dictamen, es improcedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto planteada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”; para reformar los artículos 17, tercer párrafo, 22 primero y segundo párrafos, 60 primer párrafo, 94 Apartado B en sus fracciones I, VIII y XVIII, 111 segundo párrafo, 112 fracciones IV y VII y 118, y derogar los artículos 4, segundo párrafo, y 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

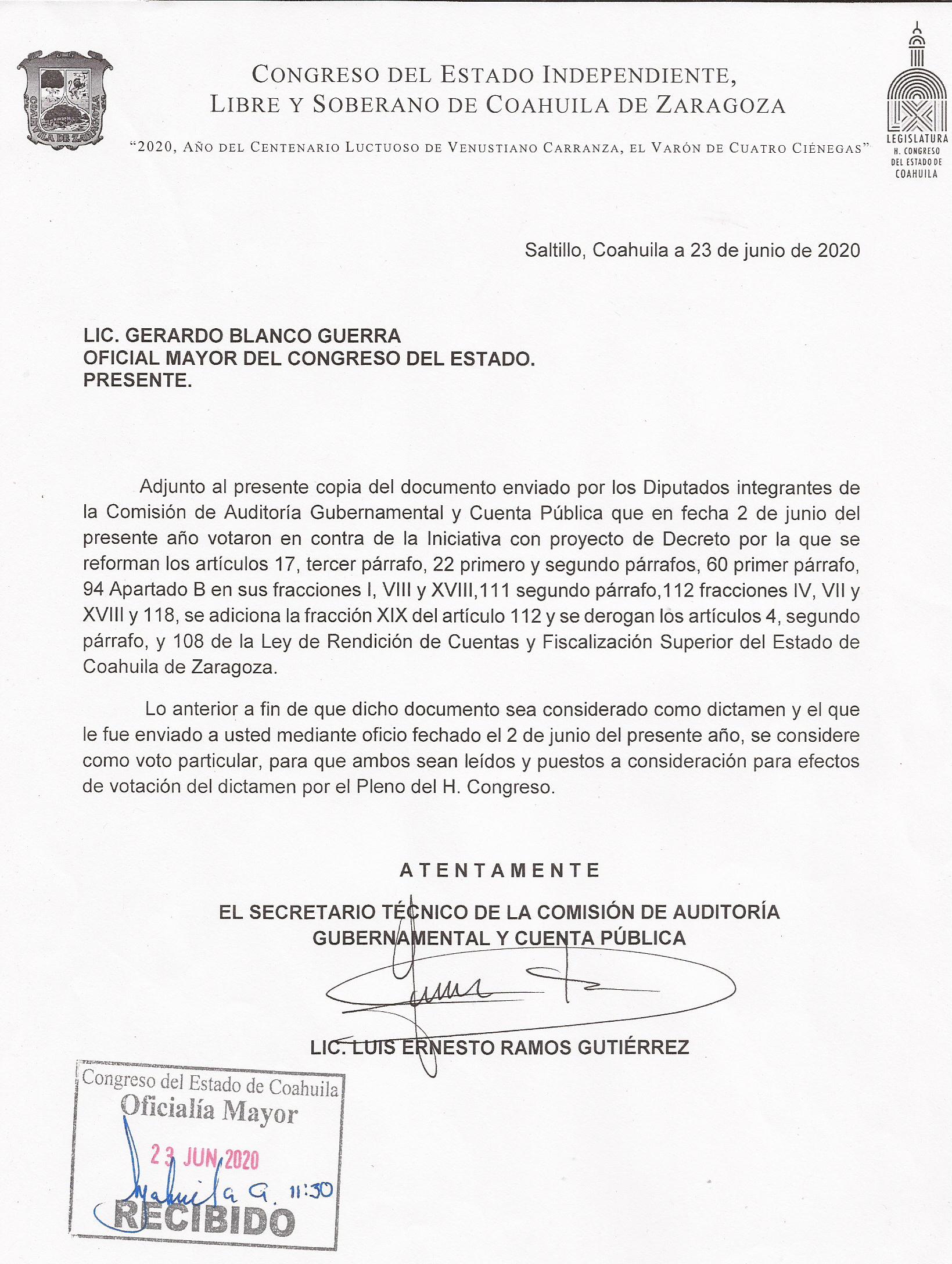
Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Juan Antonio García Villa, (Coordinador), Dip. Lilia Isabel Gutierrez Burciaga (Secretaria), Dip. María Eugenia Cázares Martínez, Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. Jaime Bueno Zertuche.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 24 de junio de 2020.

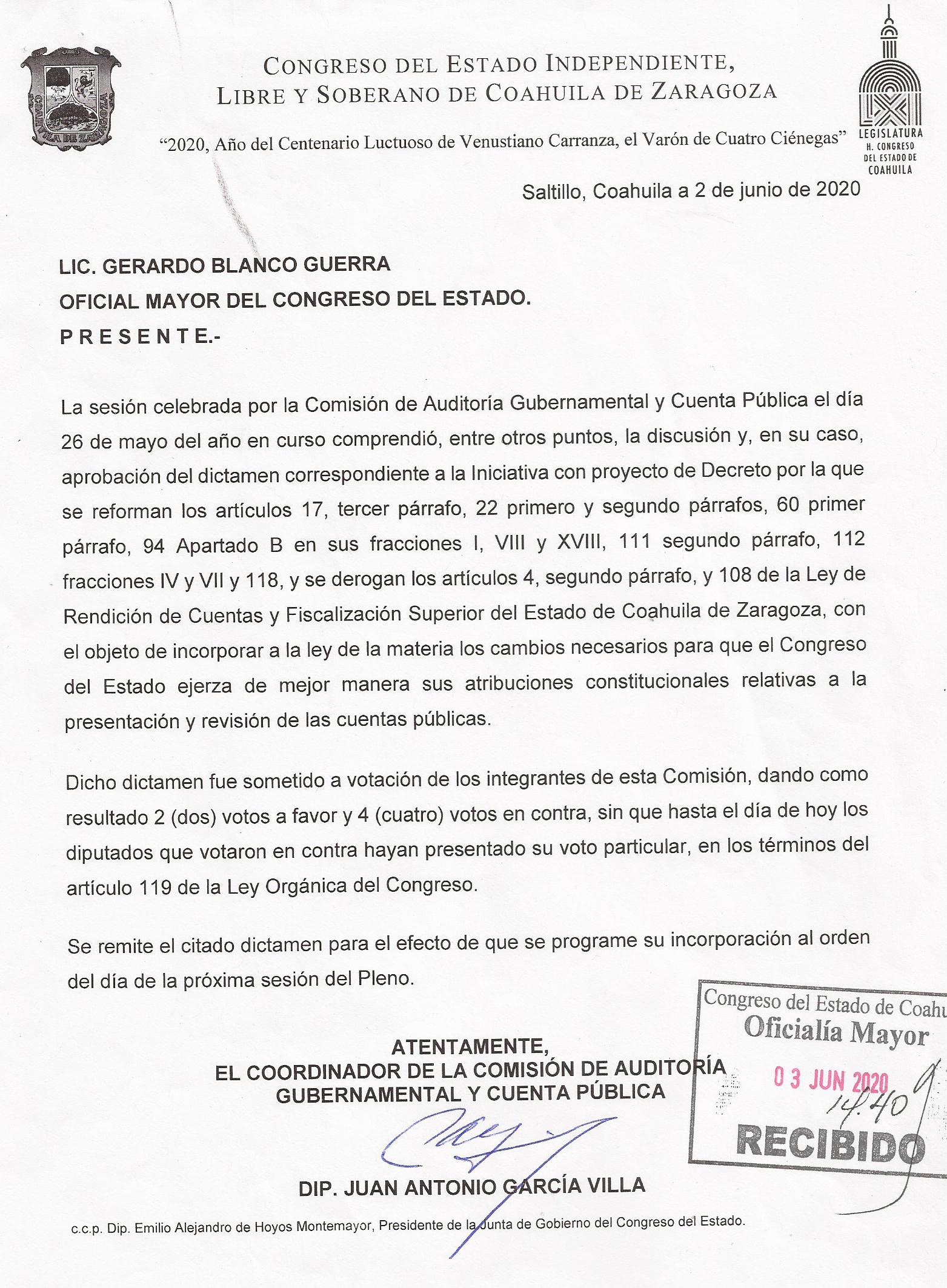
**POR LA COMISION DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**Y CUENTA PÚBLICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA**  **(COORDINADOR)** |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA (SECRETARIA)** |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** |  |  |  |

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE PROPONE REFORMAR LOS ARTÍCULOS 17, TERCER PÁRRAFO, 22 PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS, 60 PRIMER PÁRRAFO, 94 APARTADO B EN SUS FRACCIONES I, VIII Y XVIII, 111 SEGUNDO PÁRRAFO, 112 FRACCIONES IV Y VII Y 118, Y DEROGAR LOS ARTÍCULOS 4, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 108 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

****

****

**Dictamen** de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 4 de diciembre del 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 94, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Juan Antonio García Villa, conjuntamente con los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

La fiscalización, esencialmente consiste en revisar, auditar y vigilar con el propósito de comprobar el cumplimiento de los programas establecidos, la utilización adecuada de los recursos asignados y la obtención de resultados satisfactorios. Ahora bien, la fiscalización superior, es aquella de más alto rango y nivel, cuyo ejercicio es complejo desde el punto de vista técnico, por ello, el Congreso no revisa directamente las cuentas públicas, sino que delega estas funciones en un órgano fiscalizador (Auditoría Superior), dotado de autonomía técnica y de gestión.

El artículo 67, fracción XXXIV, de la Constitución Política del Estado de Coahuila señala que es atribución del Poder Legislativo, es decir, de este Congreso, “Revisar… en los términos previstos en las leyes, la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, Municipios, organismos públicos autónomos” así como de cualquier entidad o persona “que gestione recursos públicos, con objeto de conocer sus resultados y comprobar si se han ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos, según corresponda, y a su presupuesto de egresos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas”.

La responsabilidad de revisar las cuentas públicas corresponde esencial y originariamente al Congreso, como expresamente lo vuelve a señalar el párrafo tercero de la citada fracción XXXIV del artículo 67 constitucional, al indicar que el “Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas” en la fecha que ahí se señala.

Sin embargo, la vigente ley prácticamente margina al Congreso del Estado y a la Comisión legislativa que es jurídicamente el enlace entre éste y la Auditoría Superior del Estado, de aspectos fundamentales como son, entre otros, aprobación del programa anual de auditorías y visitas como sí se lleva a cabo en entidades como la Ciudad de México y Tamaulipas, la modificación del citado programa en el curso del ejercicio y la expedición de su Reglamento Interno, instrumentos legales en los que deben de quedar claros los objetivos de la fiscalización, tales como: la apropiada y eficaz utilización de los fondos públicos, la búsqueda de una gestión rigurosa, la regularidad en la acción administrativa y la información, proceso en el cual el Congreso tiene un papel absolutamente pasivo.

La iniciativa de mérito pretende incorporar a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, las modificaciones para que el Congreso del Estado ejerza de mejor manera sus atribuciones constitucionales relativas a la presentación y revisión de las cuentas públicas.

Con lo anterior se busca que exista un verdadero acto de control, indispensable para mantener el equilibrio entre los poderes que dan paso al estado de derecho, comprobando el buen uso de los recursos públicos, evitando la discrecionalidad y contribuyendo al mejor desempeño de la función pública.

**TERCERO.-** Que los integrantes de esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, realizamos el análisis de la presente iniciativa, mediante la cual se propone reformar, adicionar y derogar diversos preceptos de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**CUARTO.-** Que esta Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, estima que a la presente Iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa, que además de lo planteado, se reforme la fracción XVIII y se adicione la fracción XIX al artículo 112 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de hacer compatibles los preceptos jurídicos con otros que buscan el mismo objetivo.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos que la mencionada Iniciativa de Decreto reúne los elementos necesarios para elaborar el presente dictamen, por lo que estimamos pertinente emitir y poner a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.** Se reforman los artículos 17, tercer párrafo, 22 primero y segundo párrafos, 60 primer párrafo, 94 Apartado B en sus fracciones I, VIII y XVIII, 111 segundo párrafo, 112 fracciones IV, VII y XVIII y 118, se adiciona la fracción XIX del artículo 112 y se derogan los artículos 4, segundo párrafo, y 108 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 4.**

…

Derogado

**Artículo 17.**

…

…

Asimismo, la Auditoría Superior podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en las cuentas públicas. Una vez que le sean entregadas las cuentas públicas, podrá realizar, para el mejor cumplimiento de sus funciones, las modificaciones que considere necesarias al programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y las someterá a la revisión y autorización de la Comisión.

**Artículo 22.**

Durante el primer bimestre del año, la Auditoría Superior someterá a la revisión y autorización de la Comisión el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, el cual una vez autorizado tendrá carácter público y deberá difundirse a través de la página de internet de la Auditoría Superior, así como publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, programa en el que se mencionará a la totalidad de las entidades que serán objeto de fiscalización.

Dicho programa anual podrá modificarse cuando la Auditoría Superior lo considere necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones, debiéndose someter las modificaciones a la revisión y autorización de la Comisión, y en su caso, publicarlas en su página de internet, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**Artículo 60.**

Cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras circunstancias pueda suponerse la presunta recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación o ejercicio irregular de recursos públicos o de su desvío, la Auditoría Superior realizará las revisiones que procedan, durante el ejercicio fiscal en curso, de conceptos específicos vinculados de manera directa a las denuncias o circunstancias, o requerir a las entidades para que a través de sus órganos internos de control lleven a cabo dichas revisiones. El requerimiento deberá aportar indicios probatorios razonables mediante los cuales se presuma que la irregularidad cometida ocasionó un daño o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades.

**Artículo 94.**

…

1. …

I. a XIX. …

1. Indelegables:
2. Elaborar, de conformidad con lo establecido en esta ley, el proyecto de Reglamento Interior de la Auditoría Superior, en el que se distribuirán las atribuciones de sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que habrán de ser suplidos en sus ausencias, el cual someterá a la autorización de la Comisión, debiendo ser publicado dicho reglamento interior en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página de internet de la Auditoría Superior;
3. a VII. …

VIII. Elaborar el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones durante el

primer bimestre del ejercicio y remitirlo a la Comisión para su autorización;

una vez que lo sea, se publicará en la página de internet de la Auditoría Superior, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;

IX. a XVII. …

XVIII. Elaborar el Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera, el cual someterá a

la autorización de la Comisión previamente a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página de internet de la Auditoría Superior;

**Artículo 108.**

Derogado

**Artículo 111.**

…

Para los efectos del párrafo anterior, la Comisión evaluará bajo los principios de objetividad, transparencia y máxima publicidad, el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, a través de mecanismos e indicadores que resulten aplicables.

**Artículo 112.**

I. a III. …

IV. Autorizar el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones que para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones elabore la Auditoría Superior, así como sus modificaciones;

V. a VI. …

VII. Autorizar el Reglamento Interior de la Auditoría Superior.

VIII. a XVII. …

XVIII. Autorizar el estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera.

XIX. Las demás que establezca esta ley y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 118.**

La Comisión recibirá peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por parte de la sociedad civil, las que en caso de proceder serán turnadas a la Auditoría Superior para su inclusión en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, y cuyos resultados deberán ser considerados en los informes individuales y, en su caso, en el Informe Anual de Resultados. Dichas propuestas también podrán ser presentadas por conducto del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, debiendo el Auditor Superior informar a la Comisión, así como a dicho Consejo, sobre las determinaciones que se tomen en relación con las propuestas relacionadas con el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** La Auditoría Superior deberá presentar a la Comisión para su autorización, los proyectos de Reglamento Interior y de Estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera, a que hacen referencia las fracciones I y XVIII del Apartado B del artículo 94 de la presente ley, a más tardar 120 días después de la entrada en vigor de este decreto.

**TERCERO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Juan Antonio García Villa, (Coordinador), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga (Secretaria), Dip. María Eugenia Cázares Martínez, Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Jaime Bueno Zertuche y Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 de mayo de 2020.

**COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA DE LA LXI LEGISLATURA, DE FECHA DEL 26 DE MAYO DE 2020.

**ACUERDO** de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre Proposición con Punto de Acuerdo planteadas por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “por el que solicita al Ejecutivo del Estado desarrollar programas que fortalezcan la creación de escuelas municipales para fortalecer el apoyo a talentos deportivos y la cultura del deporte”.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2019, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “A través del cual se solicita al Ejecutivo del Estado desarrollar programas que fortalezcan la creación de escuelas municipales para fortalecer el apoyo a talentos deportivos y la cultura del deporte”.

**SEGUNDO.-** Que la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, al no haberse planteado como de urgente y obvia resolución, dispuso que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, fuera turnado a esta Comisión para efectos de estudio y análisis.

**TERCERO.-** Que en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción X del artículo 278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Oficialía Mayor turnó a la Coordinadora de esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, la referida Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 97, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “A través del cual se solicita al Ejecutivo del Estado desarrollar programas que fortalezcan la creación de escuelas municipales para fortalecer el apoyo a talentos deportivos y la cultura del deporte”, resulta conveniente hacer un análisis del mismo, a efecto de que esta Comisión se pronuncie al respecto.

La Proposición con Punto de Acuerdo planteada, se basa en las siguientes consideraciones:

*“Por primera vez en la historia reciente de México los académicos e investigadores de la cultura física se pronuncian con recomendaciones a favor del desarrollo de este ámbito; el Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte (CIICUFIDE) se pronuncia en favor de un resolutivo por la Cultura Física Nacional.*

*Uno de los acuerdos de la más reciente reunión del Comité, en 2018, fue el que se hiciera un pronunciamiento en el que se expresen una serie de recomendaciones que deben tomarse en cuenta para instrumentar las políticas públicas en materia de cultura física en los próximos años, con el fin de garantizar el óptimo desarrollo del deporte en México.*

*De entre las recomendaciones que emiten se encuentran, solo por mencionar algunas:*

1. *Realizar el diagnóstico nacional del deporte, en observancia de:*

*Estado de salud y nivel de desarrollo físico de la población.*

*Cantidad de especialistas en las distintas ramas de la cultura física y el deporte.*

*Número de profesionistas en educación física.*

*Número de profesionistas en recreación física.*

*Número de profesionistas entrenadores deportivos.*

*Número de profesionistas en ciencias aplicadas.*

*Número de deportistas adheridos – afiliados a las federaciones deportivas nacionales.*

1. *Revisión de la Normatividad que rigen el deporte municipal, estatal y nacional. Planes Estatales y Municipales de Desarrollo del Deporte.*
2. *Cantidad de Instituciones formadoras y colegios de profesionistas en el ámbito de la cultura física y el deporte.*

*Número de escuelas formadoras de licenciados en educación física.*

*Número de escuelas formadoras de otras ciencias del deporte.*

*Número de centros de investigación y difusión del área.*

1. *Contribuir en la independencia económica, material y de recursos humanos de los institutos estatales del deporte.*

*La Organización Mundial de la Salud señala que la actividad física regular de intensidad moderada como caminar, montar en bicicleta o hacer deporte, tiene considerables beneficios para la salud. En todas las edades, los beneficios de la actividad física contrarrestan los posibles daños provocados, en algunas ocasiones por accidentes.*

*La actividad física regular y en niveles adecuados, mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio, mejora la salud ósea y funcional, reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, diferentes tipos de cáncer (como el cáncer de mama y el de colon) y depresión; reduce el riesgo de caídas y de fracturas vertebrales o de cadera; y es fundamental para el equilibrio energético y el control de peso.*

*Aunado a lo anterior, la actividad física puede contribuir al desarrollo social de los niños y jóvenes, dándoles la oportunidad de expresarse, fomenta la autoconfianza, la interacción e integración social; sin dejar de mencionar por supuesto que los jóvenes activos generan comportamientos saludables y así evitan el consumo de tabaco, alcohol y drogas, además de un mejor rendimiento escolar.*

*Coahuila cuenta con un marco jurídico que fortalece las acciones de la sociedad civil, gobierno estatal y municipios en favor del deporte.*

*Entre ellos un plan Estatal de Deporte que, de acuerdo a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, deberá incluir las acciones, programas y proyectos que tengan como fin promover las actividades deportivas y de cultura física.*

*Como es un documento con el que todavía no contamos y, seguramente esta en proceso, es importante incluir acciones que permitan anexar, las recomendaciones de los expertos del Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte y aprovechar instalaciones o edificios municipales como centros comunitarios, canchas deportivas, como escuelas municipales de fomento deportivo y de vincularse con organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas para que se fortalezcan estas actividades de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.*

*Hoy Coahuila merece impulsar la actividad del deporte y la educación física en cada rincón de los 38 municipios porque, finalmente, fortalece una herramienta formativa de desarrollo integral en la niñez y juventud de nuestro estado; respaldar las actividades deportivas bien planeadas y con seguimiento permitirá enriquecer el tejido social a través de los valores que se practican dentro del deporte y generar una cultura orientada a la activación física y a una sana convivencia social.*

*Compañeras y compañeros legisladores:*

*Para nadie es novedad que la inclusión del deporte y la cultura en el fortalecimiento del entorno comunitario permite contar con sociedades sanas, seguras y en paz.*

*El deporte permitirá contrarrestar la tasa creciente de problemáticas relacionadas con la salud en menores de edad y aprovechar de manera más eficiente los espacios públicos. Además de prevenir problemas como las adicciones y la violencia, entre otros.*

*Si bien existe el Instituto Estatal del Deporte que opera en toda la entidad, la cobertura que se tiene no es suficiente en todos los municipios. La propuesta es trabajar de forma articulada con los municipios ampliando y fortaleciendo la oferta deportiva.*

*De acuerdo a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 8, los municipios, en la esfera de su competencia, tendrán las siguientes atribuciones:*

*I. Fomentar y promover la cultura física y la práctica de las actividades deportivas entre los habitantes de su municipio; y celebrar convenios con instituciones públicas, privadas, sociales y recreativas, con objeto de patrocinar la realización de eventos deportivos y la conformación de ligas y equipos de las distintas disciplinas físicas más aceptadas por los habitantes de cada municipio.*

*II. Crear una unidad administrativa responsable y especializada en materia de cultura física y deporte, cuya titularidad, cualquiera sea la denominación de ésta, deberá recaer en una persona de amplia y comprobada experiencia en la promoción y difusión del deporte.*

*III. Asignar una partida presupuestal anual que permita ejecutar los programas en materia de cultura física y deporte; la cual deberá quedar debidamente especificada en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal que corresponda.*

*IV. Participar en la planeación de la infraestructura del deporte y presentar a las autoridades estatales, las recomendaciones que consideren pertinentes. Asimismo, administrar las instalaciones deportivas de su competencia y promover la participación de la comunidad, para que, de forma organizada, subsidiaria y corresponsable pueda participar en la construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de las instalaciones deportivas; quedando establecidas las reglas y bases de esta participación en el reglamento que corresponda.*

*V. Convocar a la sociedad en general y, en particular, a los deportistas y sus asociaciones, a formar parte del Sistema Municipal del Deporte;*

*Además de promover y fomentar la cultura física y el deporte en la población del Estado, así como la difusión, investigación y la participación social, definir e instrumentar la aplicación de la política pública del Estado en materia deportiva; alentar entre la sociedad, la constitución y entrega de reconocimientos y estímulos a los deportistas y elaborar, en coordinación con los municipios y sociedad civil, los programas que conformen el Plan Estatal del Deporte, entre otros.*

*La propuesta que planteamos es que, a la brevedad, en el marco de la integración del Plan Estatal de Deporte, el Ejecutivo considere la creación de escuelas de deporte municipales en coordinación con los Direcciones municipales de las áreas afines al tema que nos ocupa a fin de que se le dé mayor y directa atención a la implementación de la cultura física y el deporte.*

*Estas escuelas municipales permitirán entre otras cosas, generar atletas y entrenadores de alto rendimiento mejor capacitados, incentivarán la activación física creando una mayor oferta de opciones deportivas, expandirán la oferta deportiva a todas las zonas de nuestro estado y crearán redes de jóvenes y padres de familia de integración.*

*Las familias coahuilenses requieren opciones sobre las diferentes rutas que existen para seguir desarrollándose dentro del deporte. (Becas deportivas, centros de alto rendimiento, olimpiadas, etc.)*

*Y esto llevará a un círculo virtuoso de generar semilleros de deportistas, crear una atmosfera deportiva en la que la generación de mayor antigüedad sirva de ejemplo para la generación que viene detrás y dotar a niños y jóvenes de escasos recursos la oportunidad de integrarse a un grupo u organización.****”***

**TERCERO. –** Una vez analizada la Proposición con Punto de Acuerdo planteada, es importante señalar que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2023 dentro del eje rector relativo al Desarrollo Social Incluyente y Participativo, se encuentran los objetivos específicos para fomentar el deporte en nuestro Estado, y conseguir la inclusión para todos los sectores de la población, entre los cuales podemos destacar los siguientes:

* Fomentar la práctica del deporte y la activación física como una medida fundamental para el desarrollo personal, el entrenamiento y el cuidado de la salud.
* Renovar el marco jurídico del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila para modernizar y focalizar los aspectos legales que fundamenten las acciones del mismo para fortalecer la cultura del deporte en el estado
* Mejorar la infraestructura deportiva especializada y la de convivencia social, particularmente en sectores marginados.
* Propiciar la integración de los diferentes estratos de la sociedad para integrarlos en programas de activación física y combate al sedentarismo.
* Intensiﬁcar el apoyo al deporte de alto rendimiento, tanto con instalaciones, como con entrenadores y equipos.
* Instrumentar un esquema transparente de asignación de becas de acuerdo con la importancia del evento deportivo.
* Aumentar la participación de deportistas coahuilenses en las competencias estatales, regionales, nacionales e internacionales.
* Diseñar un programa de capacitación y certificación de entrenadores deportivos.
* Crear un programa de escuelas de iniciación y especialización deportiva.
* Fortalecer la integración de personas con discapacidad a programas de desarrollo deportivo.
* Implementar el Registro Estatal del Deporte.
* Impulsar un programa deportivo que fomente la cohesión social y participación ciudadana para el desarrollo comunitario.
* Fortalecer el programa de deporte paralímpico y de adultos mayores.

Además de lo anterior es importante señalar que se encuentra publicado el Programa Especial de Deporte y Activación Física 2017-2023, mismo que fue elaborado coordinadamente por la Secretaría de Educación, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo del Estado, siendo el instrumento que guíe la acción gubernamental, tendiente a lograr que el deporte y la activación física sean medios que favorezcan el desarrollo integral y eleven la calidad de vida de los coahuilenses.

El objetivo general de dicho programa es lograr que el deporte y la cultura física estén al alcance de todos los sectores de la población.

Sin embargo, ante la pandemia que se vive actualmente desde el mes de marzo se estableció dentro del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID 19, la suspensión de eventos masivos de todo tipo entre ellos los deportivos, y ante el creciente número de contagios que se está generando, existe la incertidumbre de la fecha en que se podrán retomar estas actividades.

De lo anterior esta Comisión estima pertinente replantear la solicitud propuesta por el Diputado Emilio de Hoyos Montemayor, en el sentido de que una vez que pase la contingencia sanitaria y se retomen las actividades escolares presenciales y deportivas, el Instituto Estatal del Deporte coordine acciones necesarias para desarrollar las actividades que favorezcan el fortalecimiento de la cultura y oferta del deporte en cada municipio del Estado de Coahuila, en base a los objetivos establecidos en el Programa Especial de Deporte y Activación Física 2017-2023.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se estima procedente enviar un atento exhorto al Instituto Estatal del Deporte con el objeto de que una vez que las actividades deportivas sean reactivadas en nuestro Estado, coordine las acciones necesarias para establecer un programa que permita la creación de escuelas deportivas en los 38 Ayuntamientos del Estado, que favorezcan el fortalecimiento de la cultura y oferta del deporte en cada localidad del Estado de Coahuila, en base a los objetivos establecidos en el Programa Especial de Deporte y Activación Física 2017-2023.

**SEGUNDO.-** Se estima procedente exhortar al Instituto Estatal del Deporte a celebrar una reunión de trabajo con la Comisión de Deporte de este H. Congreso del Estado a fin de escuchar las propuestas en materia de infraestructura y fomento deportivo para el 2020 y la inclusión del deporte como política pública para el desarrollo social e inclusión.

**TERCERO.-** Notifíquese lo anterior, a la Oficialía Mayor para los efectos legales procedentes.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS**

**Y ACTIVIDADES CÍVICAS DE LA LXI LEGISLATURA.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**

**COORDINADORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **SECRETARIO** |  | **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  | **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |

**ACUERDO** de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteadas por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, relativo a ampliar el personal de psicólogos que atienden los diversos centros escolares.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 2019, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se exhorta a las autoridades educativas a ampliar el personal de psicólogos que atienden los diversos centros escolares y el presupuesto para la operación de los USAERS en todo el Estado y la Región Carbonífera”.

**SEGUNDO.-** Que la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, al no haberse planteado como de urgente y obvia resolución, dispuso que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, fuera turnado a esta Comisión para efectos de estudio y análisis.

**TERCERO.-** Que en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción X del artículo 278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Oficialía Mayor turnó a la Coordinadora de esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, la referida Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 97, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, “Por el que se exhorta a las autoridades educativas a ampliar el personal de psicólogos que atienden los diversos centros escolares y el presupuesto para la operación de los USAERS en todo el Estado y la Región Carbonífera”, resulta conveniente hacer un análisis del mismo, a efecto de que esta Comisión se pronuncie al respecto.

La Proposición con Punto de Acuerdo planteada, se basa en las siguientes consideraciones:

*“Coahuila es fuerte por enfrentar de forma propositiva los problemas que se le presentan. Para nadie es desconocida la problemática a nivel estatal respecto a problemas de salud mental y los vemos en casa, en la escuela y en la comunidad.*

*Recientemente aprobamos una legislación para dotar de herramientas al estado y la ciudadanía en materia de prevención del suicidio.*

*Hoy retomo el tema de la salud mental como fundamental para el desarrollo humano de todos nosotros.*

*Hace algunos meses planteaba la necesidad de fortalecer la cobertura de psicólogos con especialidad educativa en todo el sistema educativo estatal, con la finalidad de atender a la comunidad escolar de Coahuila.*

*“¿Qué define específicamente a un psicólogo educativo respecto a otros profesionales del ámbito escolar o educativo? Ya que la Psicología es la ciencia del comportamiento, consecuentemente, el psicólogo educativo es el profesional que analiza, evalúa e interviene, desde el conocimiento de los principios y de la evidencia científica psicológica, los problemas educativos actuales. Por tanto, es el profesional que trabaja con conocimientos y modelos científicos explicativos a la hora de evaluar e intervenir. Es el especialista que ha sido formado en los procesos de desarrollo (Psicología del desarrollo) y del aprendizaje humano (Psicología del aprendizaje), así como, en los procesos de enseñanza (Psicología de la instrucción). Además, su ámbito profesional de trabajo son los contextos educativos formales (escuela), no formales (familia, organizaciones) e informales (tiempo libre, TV, cine, internet, asociaciones…) para favorecer la salud mental y el bienestar psicológico”, plasma el catedrático de Psicología Evolutiva en España, Jesús De la Fuente Arias en su artículo “Relevancia del psicólogo educativo como profesional especializado: funciones específicas”.*

*El artículo 7 de la Ley de Educación del Estado de Coahuila en su fracción XVII establece que se tienen como obligaciones:*

*X VII. Fomentar las medidas necesarias para la protección y cuidados de las y los alumnos, para preservar su integridad física, emocional, psicológica y social, propensas a detectar, prevenir y evitar conductas violentas entre ellos, que atente en contra de su desarrollo y competencias; individuales, sociales e integridad física, sobre una base de respeto y dignidad.*

*XVIII.- Promover, fomentar e impulsar en los educandos una cultura de paz, a través de técnicas de mediación y prácticas restaurativas para la solución de conflictos derivados del ámbito escolar.*

*El artículo 36 de la Ley de Educación establece: La educación básica tiene como propósito formar y desarrollar en los educandos las competencias necesarias para favorecer el desarrollo armónico e integral de su personalidad, su comprensión del medio ambiente e incorporación a la vida social.*

*La Secretaría de Educación del Estado diseñará las estrategias necesarias para articular pedagógicamente los niveles educativos que comprende la educación básica tomando en consideración la normatividad aplicable que en este rubro señale la autoridad federal. En el servicio educativo destinado a menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su persona y la aplicación de la disciplina escolar compatible con su edad.*

*Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos y la obligación que tienen al estar encargados de la custodia de los menores educandos, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.*

*De acuerdo con información de profesores de las Escuelas Primarias y Secundarias de la Región Carbonífera, cada vez son más los casos donde los maestros solicitan la participación de psicólogos para la valoración de los diferentes casos que se presentan en las escuelas. Entre ellos violencia, bullying, hiperactividad o déficit de atención.*

*Las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) es una instancia técnico operativa de apoyo a la atención de alumnos de necesidades educativas y/o discapacidad integrados a las escuelas de educación básica mediante la orientación personal y docente.*

*Su misión ha sido favorecer el acceso y la permanencia de las niñas, los niños y jóvenes que presentan necesidades especiales en el Sistema Educativo dando prioridad a aquellos que tienen alguna discapacidad.*

*El punto es que los USAER tienen una carga de trabajo excesiva, en primer lugar porque atienden a la población objetivo para quienes fueron creados y segundo porque están atendiendo problemas de salud mental comunes en los niños y jóvenes de educación básica como el hiperactividad, violencia y algunos casos esquizofrenia.*

*“En el mundo, los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública con un alto costo social que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socioeconómico o cultura. La enfermedad mental participa del 13% de la carga global de enfermedad, constituye una de las tres primeras causas de mortalidad de personas entre 15-35 años, esto último influido por el suicidio”, destaca el informe de Salud Mental en México*

*El suicidio es la segunda causa de muerte a escala mundial más común entre los jóvenes. Y de acuerdo al informe una influencia mutua entre los trastornos mentales y otras enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la infección por el VIH y el SIDA.*

*“Asimismo, también hay una importante aparición conjunta de los trastornos mentales y los trastornos por abuso de sustancias. Considerados en conjunto, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias suponen un costo elevado para los resultados en materia de salud”, explica.*

*En el caso de niños y adolescentes según los reportes epidemiológicos en el mundo, la prevalencia de enfermedad mental es 20%, de este porcentaje, entre el 4 y 6% requiere intervención clínica, pero pocos tienen acceso a servicios, y aunque la falta de servicios especializados es un fenómeno mundial, la región de las Américas muestra una brecha del 26% en los servicios de salud mental para niños y adolescentes.*

*Recientemente el Gobierno Federal destacó que urgente fortalecer acciones preventivas en materia de salud mental. Si bien las instituciones de salud en todo el país están haciendo esfuerzos preventivos dando cobertura y atención psicológica, es necesario fortalecer la acción preventiva.*

*De acuerdo con un estudio realizado por especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, uno de cada cuatro mexicanos, entre 18 y 65 años, ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco, de los que lo padecen recibe tratamiento. Entre las enfermedades mentales más comunes está la depresión, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima.*

*Es importante centrarnos en lo que sucede en el mundo para tomar acciones*

*Locales, en Coahuila.*

*De acuerdo con la OMS, más de 800 mil personas se suicidan al año a nivel mundial, lo que equivale a una muerte por suicidio cada 40 segundos. Según las estadísticas de mortalidad de Inegi, durante 2016, Coahuila registró 171 casos de suicidios, cifra que posicionó al estado dentro de las 15 entidades con mayor número suicidios en el país.*

*Fuente:*[*https://newsweekespanol.com/2018/10/datos-y-retos-de-la-salud-mental-en-coahuila/*](https://newsweekespanol.com/2018/10/datos-y-retos-de-la-salud-mental-en-coahuila/) *Publicado por: NWCOAHUILA.*

*En el caso de nuestra entidad el Sistema Educativo Estatal en Educación básica se tiene una matrícula estimada de 900 mil alumnos en 5201 planteles de acuerdo al Programa Estatal de Educación.*

*Los USAER que atienden en las cinco regiones de Coahuila son insuficientes para una cobertura adecuada.*

*Aunque el Sistema Educativo Estatal hace esfuerzos por capacitar a docentes y trabajadores de la educación en orientación tanto a alumnos y padres de familia a veces son insuficientes, de la misma manera el personal de psicólogos adscritos a las zonas escolares.*

*Sabemos el sistema educativo será siempre socorrido para actuar de manera proactiva en la detección y análisis de la problemática social. Sin embargo en la mayoría de los casos es en la comunidad escolar dónde se pueden detectar problemas que como autoridades podemos prevenir.****”***

**TERCERO. –** Una vez analizada la Proposición con Punto de Acuerdo planteada, es importante señalar que en el mes de diciembre el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una iniciativa a la Ley Estatal de Educación, misma que fue dictaminada en esta Comisión, y cuyo objetivo principal es la prevención desde los centros escolares del problema del suicidio.

En la misma se aprobó que los trabajadores sociales especialistas en psicología sean quienes en primera instancia dentro de los centros educativos presten la atención debida y el seguimiento al avance que pueda ir reportando un alumno con ideas suicidas.

La actual Legislatura ha coincidido en todo momento en apoyar aquellas acciones que representen el fortalecimiento del sistema educativo y que garanticen el bienestar de todos los estudiantes de los diferentes niveles educativos.

Por ello tal como fue planteado en la Iniciativa a la Ley Estatal de Educación que presentó el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, las y los profesores y trabajadores sociales especialistas en psicología son esenciales para la prevención del suicidio ya que son junto a la familia quienes conviven la mayor parte del tiempo con las niñas, niños y adolescentes en su desarrollo.

Con dicha iniciativa quedo estipulado dentro del Artículo 36 de la Ley Estatal de Educación que “todas las escuelas de educación básica dentro del Sistema Educativo Estatal, podrán contar, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, con un trabajador social especialista en psicología, o bien, con un área especializada en la materia, con el objetivo de cuidar, atender e informar a los educandos, a fin de que estos puedan ejercer y desarrollar sus habilidades intelectuales, sociales y emocionales”.

De lo anterior podemos advertir que con dicha iniciativa existe la posibilidad de que las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), no se vean sobrepasadas en su capacidad de atender a la población.

Sin embargo y ante la contingencia sanitaria que se ha dado en lo que va de este año las clases escolares presenciales han sido suspendidas, por lo que no es posible detectar los problemas de salud mental que pudiesen surgir en el alumnado dentro de los centros escolares.

De lo anterior esta Comisión estima pertinente replantear la solicitud propuesta por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cazares, en el sentido de que una vez que pase la contingencia sanitaria y los centros escolares retomen las clases presenciales la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, coordinen acciones en la medida de sus posibilidades para prevenir y atender problemas de salud mental en los centros escolares de educación básica de todo el Estado.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se estima procedente enviar un atento exhorto a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Salud del Estado con el objeto de que una vez que los centros escolares retomen las clases presenciales, coordinen acciones en la medida de sus posibilidades para ampliar el personal de psicólogos que atienden los centros escolares, con la finalidad de prevenir y atender problemas de salud mental en las instituciones educativas de educación básica de todo el Estado.

**SEGUNDO.-** Notifíquese lo anterior, a la Oficialía Mayor para los efectos legales procedentes.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS**

**Y ACTIVIDADES CÍVICAS DE LA LXI LEGISLATURA.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**

**COORDINADORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **SECRETARIO** |  | **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  | **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |

**ACUERDO** de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que en su página oficial publique material digital destinada a alumnos de nivel básico, como libros, material didáctico, que contribuyan a fortalecer el aprendizaje desde casa”.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada el día 23 de abril de año en curso, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que en su página oficial publique material digital destinada a alumnos de nivel básico, como libros, material didáctico, que contribuyan a fortalecer el aprendizaje desde casa”.

**SEGUNDO.-** Que la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, al no haberse planteado como de urgente y obvia resolución, dispuso que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, fuera turnado a esta Comisión para efectos de estudio y análisis.

**TERCERO.-** Que en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción X del artículo 278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Oficialía Mayor turnó a la Coordinadora de esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, la referida Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 97, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Que respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada Graciela Fernández Almaraz, “Con el objeto de exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal, para que en su página oficial publique material digital destinada a alumnos de nivel básico, como libros, material didáctico, que contribuyan a fortalecer el aprendizaje desde casa”, resulta conveniente hacer un análisis del mismo, a efecto de que esta Comisión se pronuncie al respecto.

La Proposición con Punto de Acuerdo planteada, se basa en las siguientes consideraciones:

*“Como ya sabemos, durante este periodo, en el cual se ha declarado una pandemia, se han implantado distintas estrategias encaminadas a prevenir y garantizar que los niñas, niños, adolescentes y jóvenes, estén protegidos e informados respecto el Covid-19.*

*Por su parte la Secretaría de Educación Pública Federal, a fin de evitar la propagación del virus, siendo el principal objetivo cuidar la salud de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ha optado por decretar un receso escolar, comprometiéndose a recuperar el aprendizaje de los contenidos para lograr cumplir con los planes y programas establecidos durante dichos días.*

*Evidentemente toda la sociedad se ha esforzado para acatar todas las medidas y recomendaciones que ha emitido la Organización Mundial de la Salud, a fin de contener las afectaciones de dicho virus.*

*Al inicio de la propagación del virus, el Titular de la Secretaría de Educación Pública solicitó se instalara una comisión de salud dentro de los consejos de Participación Escolar, con el objetivo de que se acataran las indicaciones sanitarias, se establecieran filtros en escuelas y contrarrestar la propagación de la pandemia.*

*Luego en el Acuerdo número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación, se tomó la decisión de suspender clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública*

*Consecuentemente la SEP estableció que, para lograr contener el impacto masivo, la comunidad educativa que es conformada por diversos sectores en materia de investigación y enseñanza a nivel nacional implementaría un sistema de educación a distancia electrónica y digital, para la recuperación de contenidos de aprendizaje.*

*Sin embargo, además de los cierres de las escuelas, necesitamos implementar nuevas estrategias para mitigar los efectos negativos al aprendizaje y bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en consecuencia de dichas medidas, haciendo posible efectuar algunos métodos de aprendizaje a distancia, ya sea estableciendo estrategias de educación en línea o emitir radialmente contenido académico, siempre tomando en cuenta que dichos receptores cuenten con los servicios básicos para poder obtener dicha información.*

*La UNICEF ha exhortado a escuelas, para proporcionar educación a distancia, pero sobre todo un apoyo integral, en el cual se les instruya información vital sobre la prevención de dicho virus, pero también ha considerado necesario otras medidas para facilitar el apoyo a la salud mental de la familia.*

*Debido a lo anteriormente señalado, consideramos necesario hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública Federal para que en su página oficial publique material digital, ya sea libros, o material didáctico, a fin de fortalecer y facilitar el aprendizaje desde casa, ya que es imprescindible efectuar planes sólidos para que garantizar la continuidad del aprendizaje, implementando métodos de educación a distancia, pero sobre todo se garantice el derecho a la educación, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de México.*

*Actualmente hay muchos niños, que no se les ha dado algún programa o tipo de seguimiento a su educación por falta de recursos para utilizar internet, ante ello requerimos se garantice la educación mediante estrategias, no solo en línea sino diversos medios de comunicación, durante esta contingencia sanitaria, hasta que los centros educativos sean reabiertos.****”***

**TERCERO. –** Esta Comisión de Educación está de acuerdo con el planteamiento realizado por la Diputada Graciela Fernández Almaraz, sin embargo, una vez que analizamos lo vertido por la promovente, hemos verificado que en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública Federal ya se encuentran actualizados los contenidos, programas, libros de texto y diversos materiales disponibles para los alumnos de los diferentes niveles escolares.

No dudamos que al momento que se elaboró la Proposición con Punto de Acuerdo que ahora nos ocupa, la página oficial quizá no contaba con la totalidad del material para cada grado escolar.

Sin embargo, estamos conscientes que para el nuevo ciclo escolar 2020-2021, se deberá redoblar esfuerzos, ya que debido a la pandemia aún prevalece la incertidumbre de cuando se podrá retomar las clases presenciales en cada uno de los niveles educativos, por ello se considera pertinente modificar la solicitud vertida en el documento en cuestión, para que se solicite atentamente a la Secretaría de Educación Pública Federal continúe reforzando los programas de educación en línea, con la finalidad de que se encuentren actualizados al momento de iniciar el nuevo ciclo escolar.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se envíe un atento exhorto a la Secretaría de Educación Pública Federal a efecto de que se continúen realizando las acciones necesarias para reforzar la educación en línea y sean actualizados los programas y materiales digitales ante el inicio del próximo ciclo escolar 2020-2021, con la finalidad de garantizar la educación en cada uno de los niveles escolares durante la pandemia.

**SEGUNDO.-** Notifíquese lo anterior, a la Oficialía Mayor para los efectos legales procedentes.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a junio de 2020.

**POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS**

**Y ACTIVIDADES CÍVICAS DE LA LXI LEGISLATURA.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**

**COORDINADORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS**  **SECRETARIO** |  | **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  | **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |

1. García Ramírez, Sergio, *Derecho penal,* México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990 [↑](#footnote-ref-1)
2. Morales Nuño, Gissela, *Los principios del derecho penal aplicados al derecho disciplinario*, México, s.f. [↑](#footnote-ref-2)
3. Moreno Hernández, Moisés, *Principios Rectores en el Derecho Penal Mexicano*, México: SEP, 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ídem [↑](#footnote-ref-4)
5. Amparo en revisión 448/2010. 13 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. [↑](#footnote-ref-5)